

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO

GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES
Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001
PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200

TRAZABILIDAD No.	<ul style="list-style-type: none">• Denuncia 2016-95575-80634-D.• Auto No. 0001 del 01 de noviembre de 2016 «Por medio del cual se da apertura a la indagación preliminar ANT_IP-2016-01960».• Auto No. 002 del 27 de abril de 2017 «Por el cual se cierra la Indagación Preliminar No.ANT_IP-2016-01960 y se da traslado al Grupo de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva».• Oficio No. 2017IE0039091 del 10 de mayo de 2017 (Traslado del Auto No. 002 del 27 de abril de 2017 del grupo de vigilancia fiscal al Gerente Departamental).• Oficio No. 2017IE0039307 del 10 de mayo de 2017 (Traslado de la indagación preliminar fiscal ANT_IP-2016-01960 al grupo de responsabilidad fiscal de la gerencia departamental colegiada del Quindío).• Oficio No. 2017IE0050004 del 16 de junio de 2017 (Devuelve expediente al grupo de vigilancia fiscal).• Oficio No. 2017IE0056535 del 14 de julio de 2017 (El grupo de vigilancia fiscal remite expediente al gerente departamental Quindío).• Oficio No 2017IE0084343 del 13 de octubre de 2017 (Se traslada el expediente al grupo de responsabilidad fiscal para abrir proceso de responsabilidad fiscal).
PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No.	PRF-2017-01200
CUN SIREF:	AC-80632-2016-22119
ENTIDAD AFECTADA:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - OCTAVA BRIGADA - BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE No. 8 «CACIQUE CALARCÁ» NIT. 800 130.829-8.
CUANTÍA INICIAL DE DAÑO:	QUINIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO

GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES
Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001
PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200

	TREINTA Y NUEVE PESOS M-CTE (\$541.803.439,19).
CUANTÍA INDEXADA DEL DAÑO	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON VEINTIUN CENTAVOS M-CTE (\$459.193.865,21)
PRESUNTOS RESPONSABLES FISCALES:	<p>Teniente coronel FERNANDO DE JESÚS CALLE MORENO, identificado con cédula de ciudadanía No.14.322 663 expedida en Honda (Tolima), quien en calidad de comandante y Ordenador de Gastos del Batallón BASPC No 08 «CACIQUE CALARCÁ», celebró con la empresa RIMARCO SAS NIT.900.075.341-3, el contrato de mantenimiento y adecuación No. 078- BASPC08-2014.</p> <p>Igualmente, en calidad de comandante y Ordenador de Gastos del Batallón BASPC No 08 «CACIQUE CALARCÁ», celebró con la empresa GRUPO EMPRESARIAL FARMAQ S.A.S. NIT. 900.129.037-2, el contrato de prestación de servicios profesionales No. 079-BASPC08-2014 CONTRATANTE.</p> <p>Teniente coronel EDISON WILMAN MANCHEGO OROZCO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.643.255, expedida en Bogotá D.C. quien en calidad de director de la Central Administrativa y contable CENAC Armenia y Ordenador del gasto, suscribió el contrato modificadorio No. 01 del 15-07-15 y contrato modificadorio No. 02 del 04-09-2015, con la empresa RIMARCO SAS NIT. 900.075.341-3, al contrato de mantenimiento No. 078- BASPC08-2014 del 24 de diciembre de 2014 y ordenó el segundo pago del mismo.</p> <p>Igualmente suscribió el contrato modificadorio No. 1 del 04-09-2015, al contrato de prestación de servicios profesionales No 079-BASPC08-2014 CONTRATANTE.</p> <p>RIMARCO SAS - NIT. 900.075.341-3, persona jurídica que ejecutó el contrato de mantenimiento y adecuación No. 078-BASPC08-2014, para la época de los hechos, representada legalmente por el señor</p>

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO

GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES
Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001
PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200

	<p>JOISMAR NAYIBE QUIROZ QUINTERO, identificado con la cédula de ciudadanía No.52 774.905.</p> <p>CONTRATISTA.</p> <p>Contrato de mantenimiento y adecuación No. 078-BASPC08-2014</p> <p>GRUPO EMPRESARIAL FARMAQ S.A.S. NIT. 900.129.037-2, representado legalmente por el señor JOSÉ WILLIAM ADARME ALBARRACÍN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.030.579.022 de Bogotá D.C., quien ejecutó el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No.079-BASPC08-2014, para la época de los hechos, el cual tenía por objeto prestar apoyo a la supervisión de manera técnica, oportuna y suficiente; además, ostentaba obligaciones de carácter general, administrativas, técnicas, financieras y de carácter social frente al contrato No. 078- BASPC08-2014.</p> <p>Contratista con funciones de apoyo a la supervisión del Contrato de Mantenimiento y Adecuación No. 078- BASPC08-2014.</p>
TERCEROS CIVILMENTE RESPONSABLES:	<p>Compañía Aseguradora: QBE SEGUROS S.A. - NIT. 860.002.534-0</p> <p>Póliza No. 000705407955 - «Póliza de manejo para entidades oficiales», expedida el 2015/01/19, vigente desde 2015/01/01 hasta 2015/12/31.</p> <p>Asegurado: MDN - EJE- DIRECCIÓN DE INTENDENCIA Y REMOTA. - NIT. 800.130.632-4 póliza que cubre el menoscabo de fondos y bienes nacionales causados por sus servidores públicos por actos u omisiones que se tipifiquen como delitos contra la administración pública o fallos con responsabilidad fiscal. Valor asegurado: \$1.000.000.000,00. Sin deducible.</p> <p>Coaseguros:</p> <p>Código: 1309 - Aseguradora: QBE SEGUROS S.A. - Porcentaje de participación: 21.5%. Valor asegurado: \$215 000.000.</p>



FALLO No: 00001

FECHA: 25 FEB 2019

PÁGINA 4 DE 116

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO

GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES
Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001
PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200

Código: 891700037 - Aseguradora: MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. - Porcentaje de participación: 11.9999967%. Valor asegurado: \$119.999.967.

Código: 860002400 - Aseguradora: LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS. - Porcentaje de participación: 21.5000039%. Valor asegurado: \$215.000.039.

Código: 860002184 - Aseguradora: SEGUROS COLPATRIA S.A. - Porcentaje de participación: 22.4999997%. Valor asegurado: \$224.999.997

Código: 860026182 - Aseguradora: ALLIANZ SEGUROS S.A. - Porcentaje de participación: 22.4999997%. Valor asegurado: \$224.999.997.

Compañía Aseguradora: QBE SEGUROS S.A. - NIT. 860.002.534-0.

Póliza No. 000706237137 - «Póliza de manejo para entidades oficiales», expedida el 2016/01/04. Vigente desde el 2016/01/01 hasta el 2016/12/31.

Asegurado: MDN - EJE- DIRECCIÓN DE INTENDENCIA Y REMOTA. - NIT. 800.130.632-4 póliza que cubre el menoscabo de fondos y bienes nacionales causados por sus servidores públicos por actos u omisiones que se tipifiquen como delitos contra la administración pública o fallos con responsabilidad fiscal. Valor asegurado de \$1.000.000.000,00.
Sin deducible.

Coaseguro:

Código: 1309 - Aseguradora: QBE SEGUROS S.A. - Porcentaje de participación: 21.50%. Valor asegurado: \$215.000.000.

Código: 891700037 - Aseguradora: MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. - Porcentaje de participación: 12%. Valor asegurado:



FALLO No: 00001

FECHA: 25 FEB 2019

PÁGINA 5 DE 116

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO

GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES
Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001
PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200

\$119.999.967.

Código: 860002400 - Aseguradora: LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, Porcentaje de participación: 21.50%. Valor asegurado: \$215.000.039.

Código. 860002184 - Aseguradora: SEGUROS COLPATRIA S.A. Porcentaje de participación: 22.50%. Valor asegurado: \$224.999.997.

Código 860026182 - Aseguradora: ALLIANZ SEGUROS S.A. - Porcentaje de participación: 22.50%. Valor asegurado: \$224.999.997.

LIBERTY SEGUROS S.A. NIT. 860.002.534-0.
Póliza No 2448868 - fecha de expedición: 2014-12-24 - y Anexo de Modificación de fecha 2015-09-07.
Contrato de Mantenimiento y Adecuación No. 078-BASPC08-2014.

Póliza de Cumplimiento a favor de entidades estatales (Decreto 1510 de 2013).
Tomador: RIMARCO SAS.
Asegurado y beneficiario: MDN EJÉRCITO NACIONAL BATALLÓN DE ASPC No. 8 CACIQUE CALARCÁ NIT. 800 130 829-8.

Riegos asegurados:
Cumplimiento del Contrato: \$117.040.000.00 - vigente desde el 2014-12-24 hasta el 2016-02-11 (según anexo de modificación).
Estabilidad y calidad de la Obra \$117.040.000.00 - vigente desde el 2014-12-24 hasta el 2019-12-24 (según anexo de modificación).
Calidad de los bienes \$117.040.000.00 - vigente desde el 2014-12-24 hasta el 2018-10-11 (según anexo de modificación).
Sin deducible.

LIBERTY SEGUROS S.A. - NIT. 860.002.534-0.
Tomador Grupo Empresarial FARMAQ S.A.S.
Póliza No. 2448854 - fecha de expedición: 2014-12-24 - y Anexo de Modificación de fecha 2015-09-07.
Contrato No. 079 - BASPC08-2014



FALLO No: 00001

FECHA: 25 FEB 2019

PÁGINA 6 DE 116

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO

GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES
Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001
PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200

Póliza de Cumplimiento a favor de entidades.
Asegurado y beneficiario: MDN EJÉRCITO
NACIONAL BATALLÓN DE ASPC No. 8 CACIQUE
CALARCÁ NIT. 800.130.829-8.

Riegos asegurados.
Cumplimiento del Contrato: \$6.160.000.00 - vigente
desde el 2014-12-24 hasta el 2015-10-30 (según
anexo de modificación).
Calidad del Servicio: \$6.160 000.00 - vigente desde
el 2014-12-24 hasta el 2016-06-30 (según anexo de
modificación).
Sin deducible.


I. ASUNTO

Los directivos colegiados de la gerencia departamental colegiada del Quindío de la Contraloría General de la República, proceden de conformidad a las plenas facultades contenidas en los artículos 29, 209, 267 y 268 numeral 5º de la Constitución Política de Colombia, Ley 610 de 2000, Ley 1474 de 2011 y la Resolución Orgánica No 6541 del 18 de abril de 2012, a proferir decisión de fondo dentro del proceso de la referencia, con base en los siguientes:

II. ANTECEDENTES

A través de oficio sigedoc No. 2017IE0039307 del 10 de mayo de 2017, el gerente departamental de la gerencia departamental colegiada del Quindío de la Contraloría General de la República (e), trasladó a la coordinación de investigaciones, juicios fiscales y jurisdicción coactiva para estudio y posible apertura de proceso de responsabilidad, el antecedente con incidencia fiscal resultado de la indagación preliminar No. ANT-IP-2016-01960, adelantada por presuntas irregularidades acaecidas en relación al contrato No. 078 BASPC-2014 y al de suministro Nos. 062-2014 y 162-2015 en el Batallón de Servicios No. 8 «CACIQUE CALARCÁ», actuación llevada a cabo por el grupo de vigilancia fiscal de la gerencia departamental colegiada del Quindío.

Con oficio sigedoc No. 2017IE0040585 del 16 de mayo de 2017, fue designado el abogado Augusto de Jesús Mejía Giraldo, para determinar mediante plan de trabajo, la procedencia de un proceso de responsabilidad fiscal mediante el trámite bien ordinario o bien verbal, ello como consecuencia de lo ordenado en la indagación preliminar fiscal No. ANT_IP-2016-01960 generada por la denuncia ciudadana No. 2016-95575-80634-D, correspondiente al Batallón de Servicios No. 8 «CACIQUE

 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	FALLO No: 00001
	FECHA: 25 FEB 2019
	PÁGINA 7 DE 116
GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO	
GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO	
FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001 PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200	

CALARCÁ», donde se estableció como detrimento patrimonial la suma de \$541 803.439,13.

La Colegiatura, a través de Acta No 80631-003-80-42 del 13 de octubre de 2017, analizó las observaciones planteadas en mesa de trabajo del 25 de septiembre de 2017, donde se exponían una serie de inconsistencias que fueron señaladas en oficio sigedoc No. 20171E0050004 del 16 de junio de 2017, indicando que las mismas se habían subsanado y ordenó seguir adelante con el trámite, decisión comunicada a través de oficio 2017IE0084343 del 13 de octubre de 2017, y remitiendo el expediente para la apertura del proceso de responsabilidad fiscal, de acuerdo a lo consagrado en las Leyes 610 de 2000 y 1474 de 2011.

Con Auto No.00077 del 9 de noviembre de 2018 fue designada la funcionaria Juliana Buriticá Ossa del grupo de investigaciones, juicios fiscales y jurisdicción coactiva, para continuar con el proceso con el fin de que continúe con la actuación procesal y proyecte las decisiones interlocutorias y de fondo que en derecho correspondan.

III. FUNDAMENTOS DE HECHO

Los hechos objeto de reproche fiscal se circunscriben en lo siguiente:

Con ocasión del ejercicio auditor, el grupo de vigilancia fiscal de la gerencia departamental colegiada de Quindío, emitió informe final de la Denuncia 2016-95575-80634-D, adelantada por presuntas irregularidades acaecidas en el Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No. 08 «CACIQUE CALARCÁ», que involucraban los contratos de suministro No. 052 BASPC8-2014 y 0162 BASPC8-2015 y el contrato de mantenimiento y adecuación No. 078 BASPC8-2014, decidiéndose en mesa de trabajo del 25 de agosto de 2016 dentro de la Denuncia 2016-95575-80634-D, solicitar la apertura de una indagación preliminar para establecer si la inversión a través del contrato de mantenimiento y adecuación No. 078-BASPC8-2014 terminó en una obra inútil, lo que se configuraría como un daño al patrimonio público

Producto del ejercicio anterior, se originó la indagación preliminar fiscal ANT_IP-2016-01960, la cual culminó con el cierre a través del Auto No 002 del 27 de abril de 2017 y la orden de apertura de proceso de responsabilidad fiscal, por los hechos relacionados únicamente con el contrato de mantenimiento y adecuación No. 078 BASPC8-2014, celebrado por el BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE No. 8 «CACIQUE CALARCÁ» NIT. 800.130.829-8 y la firma RIMARCO SAS, el cual fue suscrito por la suma de QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M-CTE (\$585.200.000,00).

Para el equipo auditor se verifica un presunto daño patrimonial al Estado en la suma de \$541.803.439,13; que corresponde al valor total invertido en el proyecto

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO

GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES
Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001
PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200

«mantenimiento y adecuación de instalaciones locativas y red LAN para poner en funcionamiento las oficinas del CENAC Armenia en el BASPCB», toda vez que las problemáticas estructurales que presenta la construcción no permiten que sea habitada, ni adaptada para las oficinas del CENAC - Armenia, no cumpliendo la finalidad estatal.

Acorde con el Auto No. 002 del 27 de abril de 2017, el presunto detrimento patrimonial se advierte del informe del ingeniero civil Hernán Alonso Aristizábal Álzate, funcionario asignado al grupo de vigilancia fiscal de la gerencia departamental colegiada del Quindío quien fuera designado como apoyo técnico, donde se indicó (Fs. 388-400):

...Con el ánimo de determinar si la obra realizada se configuraría como un daño al patrimonio público, se designó al ingeniero civil Hernán Alonso Aristizábal Álzate, identificado con cédula de ciudadanía No. 18 496.585, Profesional Universitario Grado 2, del Grupo de Vigilancia Fiscal de la Gerencia Departamental Colegiada del Quindío, con el fin de que presentara informe técnico en el cual determinara la existencia o no de un posible detrimento patrimonial en la edificación del CENAC Armenia, así mismo estableciera su cuantía. El profesional presenta informe bajo el radicado 20171E0033816 del 23 de abril de 2017 (cuaderno tres Fs. 388 - 419), documento en el cual manifiesta . .

*“El anterior informe técnico permite al despacho determinar de manera inequívoca que dentro de la presente causa fiscal, se presenta un daño al erario público, así lo establece el ingeniero civil en su informe cuando afirma “. se verifica un presunto daño patrimonial al Estado en la suma de **\$541.803.439,13**; como valor pagado al contratista por una edificación sin terminar que incumple los requisitos de construcción sismo resistente y pone en riesgo a las personas que decidan habitarlo”.*

(...)

“Es contundente el profesional de apoyo, cuando asevera en su informe que existe un detrimento patrimonial valorado en \$541.803 439,13, que corresponde al valor total invertido en el proyecto “mantenimiento y adecuación de instalaciones locativas y red LAN para poner en funcionamiento las oficinas del CENAC Armenia en el BASPCB”, toda vez que las problemáticas estructurales que presenta la construcción no permiten que sea habitada ni adaptada para las oficinas del CENAC Armenia.

Lo anterior pone de manifiesto que en el caso particular existe un daño de QUINIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON TRECE CENTAVOS (\$541.803.439,13), el cual amerita dar inicio a un proceso de responsabilidad fiscal en contra de las personas que de una o otra manera han desarrollado gestión fiscal dentro del presente negocio contractual...”

Igualmente, el profesional en su informe rendido a través de oficio Rad. 20171E0033816 del 23 de abril de 2017, señaló que producto de la visita especial practicada el día lunes 27 de marzo de 2016, en compañía del Director del CENAC -



FALLO No: 00001

FECHA: 25 FEB 2019

PÁGINA 9 DE 116

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO

GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES
Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001
PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200

Armenia, Coronel Barreto y un delegado de la firma contratista RIMARCO SAS, evidenció otras irregularidades consistentes en faltantes de obra, y que puntualmente aluden a que «. una vez realizada la medición de las actividades ejecutadas con el contrato, se evidencio una diferencia apreciable en las cantidades de obra, que indican un presunto detrimento patrimonial al Estado por valor de \$49.265.134,48, explicado por dos circunstancias, la primera que se ejecutaron algunos ítems en menor cantidad a la indicada y pagada con el Acta de recibo a Satisfacción, como por ejemplo el piso en porcelanato y la construcción de muro en bloque La segunda circunstancia es que se pagaron obras o actividades que no fueron realizadas, como el caso de las acometidas eléctricas, el sistema de puesta a tierra y el Breaker totalizador, por ejemplo...» faltantes que aparecen detallados en el informe técnico.

Indicó así mismo que «.en el desarrollo del trámite de la Denuncia Ciudadana se comunicaron varias observaciones, una de las cuales (observación No. 05) tuvo que ver con el mencionado contrato de obra, donde se estableció que según visita técnica del 7 de junio de 2016, "Al cotejar las cantidades de obra ejecutadas con las que se observan en el Acta de recibo a satisfacción, los documentos cortes finales Armenia y Balances mayores y menores Armenia, se detectó cantidades faltantes en las actividades constructivas"; que corresponden con un valor de \$43'396 560,87. Sin embargo, debido a que el proceso contractual no había sido liquidado ni el valor de la obra faltante pagada, se determinó proceder con la apertura de una Indagación Preliminar con trazabilidad No.ANT-IP-2016-01960...».

De otra parte en el informe en cita se aclaró «... que la posibilidad de realizar un cotejo de la información presentada en el acta de recibo a satisfacción, estuvo sujeta a la correspondiente liquidación y pago del contrato. Por lo tanto, una limitación en el desarrollo del apoyo técnico encomendado, fue que el acta de liquidación se realizó sólo hasta el pasado 9 de marzo de 2017, con la resolución No. 0037 y de forma unilateral por parte de la Central Administrativa y Contable CENAC Armenia del Ejército Nacional, destacándose en la misma que se realizaron dos (2) pagos al contratista por valor de \$284 992 400 y \$256 811 039,13, para un total de \$541.803.439,13, lo cual genera una diferencia con el valor del contrato (\$585.200.000) de \$43.396.560,87, que corresponden, según se indica en la resolución unilateral de liquidación, a una retención por la existencia de un informe de la Contraloría General de la República, el cual se considera se relaciona con el documento de comunicación de la observación No. 05 del trámite hecho con la denuncia ciudadana...».

Se menciona en el Auto No. 002 de 2017, que adicional a las deficiencias en la edificación, se suma el más importante y relevante para este proceso, que consiste en que **la obra no puede ser utilizada, toda vez que incumple con los requisitos generales de diseño y construcción sismo resistente contenidos en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 y además se encuentra ubicada en un zona de sismicidad alta**, y que así lo advierte el experto en su informe (Resaltado y subrayas fuera de texto).

Debe precisarse que el origen de esta actuación tiene su génesis en el Auto No. 002 del 27 de abril de 2017, a través del cual se ordenó la apertura del proceso de responsabilidad fiscal por hechos relacionados con irregularidades en el contrato de

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO

GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES
Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001
PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200

mantenimiento y adecuación No. 078 BASPC8-2014, BATALLÓN DE APOYO SERVICIOS PARA EL COMBATE No. 08 «CACIQUE CALARCÁ», decisión donde se concluyó con respecto al daño lo siguiente:

.. Dentro de la presente actuación fiscal se encuentra probado la existencia de un daño fiscal en la cuantía de QUINIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON TRECE CENTAVOS (\$541.803 439,13), por ejecutarse una obra que no se puede utilizar porque no cumple con las normas de diseño y construcción sismo resistente, que puede poner en peligro la vida de los ocupantes.

Para el despacho es evidente que la inversión de los recursos iba destinada a la construcción de una edificación donde funcionarían las oficinas del CENAC Armenia y que a pesar de que se desembolsaron los recursos y se ejecutó la obra, estos no cumplieron su objetivo. A la fecha de esta investigación, la edificación no se ha podido utilizar, es decir los recursos fueron inutilizados o enterrados en una obra improductiva...» (Resaltado y subrayas fuera de texto).

IV. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Como fundamentos de derecho, se invocan las siguientes normas:

- Constitución Política de Colombia artículos 267, 268 numeral 5° y 271.
- Ley 610 de 2000 «Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías».
- Ley 1474 de 2011 «por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública», artículos 82, 83 y 84; Subsección II artículos 106 al 109 y Subsección III del artículo 110 al 120 (Modificaciones a la regulación y disposiciones comunes al procedimiento ordinario y verbal de responsabilidad fiscal).
- Resolución Orgánica No. 5500 de 2003, mediante la cual se determina la competencia para el conocimiento y trámite de la acción de responsabilidad fiscal en la Contraloría General de la República y se dictan otras disposiciones, modificada, entre otras, parcialmente por las Resoluciones Orgánicas Nos. 5868 de 2007 y 6541 de 2012
- Resolución Orgánica No. 6541 de 2012 artículo vigesimocuarto y siguientes, los cuales establecen la distribución de competencias entre otros, para el Proceso de responsabilidad fiscal de las gerencias departamentales colegiadas, modificada parcialmente por la Resolución Orgánica No. 6928 de 2013.

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO

GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES
Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001
PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200

NORMAS ESPECIALES:

- a) Ley 80 de 1993 «*Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública*» y sus decretos reglamentarios
- b) Ley 1469 de 2010 «*Por la cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a la función pública que desempeñan los curadores urbanos y se expiden otras disposiciones*», y demás normativa reglamentaria.
- c) Norma NSR-10 (Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente).
- d) Resolución No. 2240 del 19 de marzo de 2014 «*Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones*».
- e) Resolución Interna No. 6302 del 31 de julio de 2014 «*por la cual se adopta el Manual de Contratación del Ministerio de Defensa y de sus unidades ejecutoras*».
- f) Resolución No. 1549 del 6 de marzo de 2015, por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones.

V. NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD AFECTADA

El Ministerio de Defensa Nacional es un organismo del sector central de la administración pública nacional, perteneciente a la rama ejecutiva del poder público en el orden nacional, reorganizado a través del Decreto 2335 del 09 de diciembre de 1971.

Posteriormente con la expedición de la Ley 790 de 2002 (diciembre 27) «*Por la cual se expiden disposiciones para adelantar el programa de renovación de la administración pública y se otorgan unas facultades Extraordinarias al Presidente de la República*», en su artículo 7° se determinó el número, denominación, orden y precedencia de los Ministerios, entre ellos el «Ministerio de Defensa», expidiéndose entre otros, el Decreto 049 del 13 de enero de 2003 «*por el cual se modifica parcialmente la estructura del Ministerio de Defensa Nacional*»

De acuerdo a lo previsto en el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, el Ministerio de Defensa Nacional, como parte del presupuesto general de la Nación, tiene la autonomía presupuestal a que se refieren la Constitución Política y la Ley para contratar, comprometer y ordenar el gasto de los recursos aprobados en la Ley de presupuesto y además prevé que: «*Estas facultades estarán en cabeza del jefe de cada órgano quien podrá delegarlas en funcionarios del nivel directivo o quien haga sus veces, y serán ejercidas teniendo en cuenta las normas consagradas en el estatuto general de contratación de la administración pública y en las disposiciones legales vigentes*»

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO

GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES
Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001
PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200

Conforme el Auto No. 002 del 27 de abril de 2017, como entidad afectada se encuentra el Batallón de Servicios para el Apoyo y Combate No. 08 «CACIQUE CALARCÁ» - BASPC8 NIT 800.130.829-8, ubicado en la avenida centenario No. 25-00 Norte, teléfono 7495700 - Armenia Quindío, representado legalmente por el coronel LEONARDO BARRETO GAITÁN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 93.085.869, en calidad de Comandante Director Central Administrativa y Contable Regional Armenia CENAC y el comandante de la Octava Brigada, coronel EDGAR ALBERTO QUIROGA CASTILLO.

VI. IDENTIFICACIÓN DE LOS PRESUNTOS RESPONSABLES
FISCALES Y DE LAS COMPAÑÍAS GARANTES EN CALIDAD DE TERCEROS
CIVILMENTE RESPONSABLES

Se identificaron como gestores fiscales y presuntos responsables fiscales, producto de la ejecución del Contrato de Mantenimiento y Adecuación No. 078 BASPC8-2014, las siguientes personas naturales y jurídicas que se enuncian a continuación:

- a) Teniente coronel **FERNANDO DE JESÚS CALLE MORENO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 14.322.663, quien para la época de los hechos ostentaba la calidad de comandante y Ordenador del Batallón BASPC No. 08 «CACIQUE CALARCÁ» y celebró con la empresa RIMARCO S.A.S., el Contrato de Mantenimiento y Adecuación No. 078 - BASPC08-2014 de fecha 24 de diciembre de 2014.
- b) Teniente Coronel **EDISON WILMAN MANCHEGO OROZCO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79 643.255, quien para la época de los hechos, ostentaba la calidad de Director de la Central Administrativa y Contable CENAC - Armenia y Ordenador del Gasto, suscribió el contrato modificadorio No. 01 del 15 de julio de 2015 y No 2 del 04 de septiembre de 2015, con la empresa RIMARCO SAS, al contrato de mantenimiento y adecuación No 078-BASPC08-2014 de fecha 24 de diciembre de 2014, igualmente ordenó el segundo pago.
- c) Sociedad **RIMARCO SAS** NIT. 900.075.341-3, en calidad de CONTRATISTA, quien ejecutó el contrato de mantenimiento y adecuación No. 078-BASPC08-2014 para la época de los hechos, obrando a través de su representante legal señor **JOISMAR NAYIBE QUIROZ QUINTERO**, portador de la cédula de ciudadanía No. 52.774.905.
- d) **GRUPO EMPRESARIAL FARMAQ S.A.S.** NIT. 900.129 037-2, quien ejecutó el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 079-BASPC08-2014, el cual tenía por objeto prestar apoyo a la supervisión de manera técnica, oportuna y suficiente, además, tenía obligaciones de carácter general, administrativas, técnicas, financieras y también social frente al contrato No. 078- BASPC08-2014,

 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	FALLO No: 00001
	FECHA: 25 FEB 2019
	PÁGINA 13 DE 116
GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO	
GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO	
FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001 PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200	

obrando a través del representante legal **JOSÉ WILLIAM ADARME ALBARRACÍN**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.030.579.022.

Como entidades garantes se encuentran:

Compañía Aseguradora: QBE SEGUROS S.A. - NIT. 860.002.534-0, póliza No. 000705407955 - «póliza de manejo para entidades oficiales», expedida el 2015/01/19, vigente desde 2015/01/01 hasta 2015/12/31, asegurado: MDN - EJE- DIRECCIÓN DE INTENDENCIA Y REMOTA. - NIT. 800.130.632-4 póliza que cubre el menoscabo de fondos y bienes nacionales causados por sus servidores públicos por actos u omisiones que se tipifiquen como delitos contra la administración pública o fallos con responsabilidad fiscal. Valor asegurado: \$1.000.000.000,00. Sin deducible.

Coaseguros:

Código: 1309 - Aseguradora: QBE SEGUROS S.A. - porcentaje de participación: 21.5%. Valor asegurado: \$215.000.000.

Código: 891700037 - Aseguradora: MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. - porcentaje de participación: 11.9999967%. Valor asegurado: \$119.999.967.

Código: 860002400 - Aseguradora: LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS. - porcentaje de participación: 21.5000039%. Valor asegurado: \$215.000.039.

Código: 860002184 - Aseguradora: SEGUROS COLPATRIA S.A. - porcentaje de participación: 22.4999997%. Valor asegurado: \$224.999.997.

Código: 860026182 - Aseguradora: ALLIANZ SEGUROS S.A. - porcentaje de participación: 22.4999997%. Valor asegurado: \$224.999.997.

Compañía Aseguradora: QBE SEGUROS S.A. - NIT. 860.002.534-0, póliza No. 000706237137 - «póliza de manejo para entidades oficiales», expedida el 2016/01/04. Vigente desde el 2016/01/01 hasta el 2016/12/31, asegurado: MDN - EJE- DIRECCIÓN DE INTENDENCIA Y REMOTA. - NIT. 800.130.632-4 póliza que cubre el menoscabo de fondos y bienes nacionales causados por sus servidores públicos por actos u omisiones que se tipifiquen como delitos contra la administración pública o fallos con responsabilidad fiscal. Valor asegurado de \$1.000.000.000,00. Sin deducible.

Coaseguro:



FALLO No: 00001

FECHA: 25 FEB 2019

PÁGINA 14 DE 116

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO

GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES
Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001
PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200

Código: 1309 - Aseguradora: QBE SEGUROS S.A. - porcentaje de participación: 21.50%. Valor asegurado: \$215.000.000.

Código: 891700037 - Aseguradora: MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. - porcentaje de participación: 12%. Valor asegurado: \$119.999.967.

Código: 860002400 - Aseguradora: LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, porcentaje de participación: 21.50%. Valor asegurado: \$215.000.039.

Código: 860002184 - Aseguradora: SEGUROS COLPATRIA S.A. porcentaje de participación: 22.50%. Valor asegurado: \$224.999.997.

Código: 860026182 - Aseguradora: ALLIANZ SEGUROS S.A. - porcentaje de participación: 22.50%. Valor asegurado: \$224.999.997.

LIBERTY SEGUROS S.A. NIT. 860.002.534-0, póliza No. 2448868 - fecha de expedición: 2014-12-24 - y anexo de modificación de fecha 2015-09-07. **Contrato de Mantenimiento y Adecuación No. 078-BASPC08-2014.**

Póliza de Cumplimiento a favor de entidades estatales (Decreto 1510 de 2013).

Tomador: RIMARCO SAS.

Asegurado y beneficiario: MDN EJÉRCITO NACIONAL BATALLÓN DE ASPC No. 8 CACIQUE CALARCÁ NIT. 800.130.829-8.

Riegos asegurados:

Cumplimiento del Contrato: \$117.040.000.00 - vigente desde el 2014-12-24 hasta el 2016-02-11 (según anexo de modificación).

Estabilidad y calidad de la Obra \$117.040.000.00 - vigente desde el 2014-12-24 hasta el 2019-12-24 (según anexo de modificación).

Calidad de los bienes \$117.040.000.00 - vigente desde el 2014-12-24 hasta el 2018-10-11 (según anexo de modificación).

Sin deducible.

LIBERTY SEGUROS S.A. - NIT. 860.002.534-0.

Tomador Grupo Empresarial FARMAQ S.A.S.

Póliza No. 2448854 - fecha de expedición: 2014-12-24 - y anexo de modificación de fecha 2015-09-07. **Contrato No. 079 - BASPC08-2014**

Póliza de Cumplimiento a favor de entidades.

Asegurado y beneficiario: MDN EJÉRCITO NACIONAL BATALLÓN DE BASPC No. 8 CACIQUE CALARCÁ NIT. 800.130.829-8.

Riegos asegurados:

Cumplimiento del Contrato: \$6.160.000.00 - vigente desde el 2014-12-24 hasta el 2015-10-30 (según anexo de modificación).

 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	FALLO No: 00001
	FECHA: 25 FEB 2019
	PÁGINA 15 DE 116
GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO	
GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO	
FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001 PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200	

Calidad del Servicio: \$6.160.000.00 - vigente desde el 2014-12-24 hasta el 2016-06-30 (según anexo de modificación).
Sin deducible

VII. MATERIAL PROBATORIO

Como material probatorio recaudado obra en el expediente el que se relaciona a continuación:

DOCUMENTALES:

1) Medio magnético (1) CD (F 2) contentivo de:

Listado de rutas de carpetas para el volumen Mis Archivos - El número de serie del volumen es EC56-25EA) D.

- 200 ACE521 012 DDT Muestras contratos suministro.xlsx
- 210 ACE521 013 DDT Visita Técnica casas fiscales.xlsx
- 220 ACE521 014 DDT Visitas especiales casas fiscales.pdf
- 300 AG14 002 Ayuda memoria aprueba 4 obs.pdf
- 301 AG081 001 15062016EE0076328 Comunica Obs 1-4.pdf
- 302 AG082 001 28062016ER0065647 Respuesta Obs 1-4.pdf
- 310 AG14 003 Ayuda memoria aprueba 1 obs fiscal.pdf
- 311 AG081 002 15072016EE0089388 Comunica Obs 5.pdf
- 312 AG082 002 22072016ER0074011 Respuesta Obs 5.PDF
- 313 AG082 002 22072016ER0074011 Respuesta Obs 5 Anex1.PDF
- 314 AG082 002 22072016ER0074011 Respuesta Obs 5 Anex2.PDF
- 320 AG14 004 Ayuda memoria Análisis respuestas validacion.pdf
- 400 ACE521 016 DDT Proyección respuesta de fondo.pdf

No existe ninguna subcarpeta

2) Oficio No. 2016ER0118363 del 22 de noviembre de 2016, por el cual se dio respuesta a requerimientos, se allegaron los contratos No. 078 BASPC8-2014 y No. 162-BASPC08-2015 y se informó igualmente que el contrato No. 078 BASPC8-2014 no ha sido liquidado, así mismo, remitieron los comprobantes de los pagos realizados y pólizas. Se adjuntaron copias de los modificatorios al contrato No. 078 BASPC8-2014 (Fs. 194-243), que incluye medio magnético (F. 243) con la siguiente información:

Listado de rutas de carpetas para el volumen Mis Archivos. El número de serie del volumen es C898-95C4

D: .

- └─batallon Cacique Calarca No. 08
 - └─Contrato BASPC162-2015
 - Carpeta 1 Contrato 162-2015 CENAC ARMENIA.pdf
 - Carpeta 18 contrato 162-2015 CENAC ARMENIA.pdf
 - Carpeta 19 contrato 162-2015 CENAC ARMENIA.pdf
 - Carpeta 2 contrato 162-2015 CENAC ARMENIA.pdf
 - └─ContratoBASPC78-2014



FALLO No: 00001

FECHA: 25 FEB 2019

PÁGINA 16 DE 116

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO

GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES
Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001
PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200

FUIDContrato 078.pdf

Folder 0107 contrato 78.pdf
Folder 0207 contrato 78.pdf
Folder 0307 contrato 78.pdf
Folder 0407 contrato 78.pdf
Folder 0507 contrato 78.pdf
Folder 0607 contrato 78.pdf
Folder 0707 contrato 78.pdf

- 3) Oficio No.2016ER0152708 del 01 de diciembre 2016 solicitando información (F. 245).
- 4) Oficio No.2016ER0155060 del 07 de diciembre de 2016 solicitando información (F. 246).
- 5) Oficio No. 2016ER0125219 del 14 de diciembre de 2016 con el cual se allegó el acta del 25 de julio de 2016 de verificación de aspectos técnicos del contrato No. 078-BASPC08-2016 (Fs. 247-253).
- 6) Oficio No.2016ER0125937 del 16 de diciembre de 2016, allegando información (Fs. 254-275).
- 7) Constancia de recibido de información por correo electrónico procedente del CENAC - Armenia (Fs. 281-284).
- 8) Oficio No. 2016EE0164150 del 30 de diciembre de 2016 solicitando información (Fs. 291-292).
- 9) Oficio No 2017ER0001220 del 05 de enero de 2017 (Fs. 293-294), que incluye medio magnético (F.294) contentivo de la siguiente información:

Listado de rutas de carpetas para el volumen 170524_1556. El número de serie del volumen es 2D20-DB99

D:.

└─casas fiscales

ACUERDO_002_DE_2014_ICFE.pdf
ANEXOS CONVENIO 001-2014.pdf
CIRCULAR INFORMATIVA MANTENIMIENTO USUARIO 2014.pdf
contabilizacion contrato 162 2015.pptx
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 001 DE 2014.pdf
CORREO A CASAS FISCALES.pptx
DOCUMENTACION PRESUPUESTO.pdf
entrada contrato 162 2015.pptx
HR No. 1397 CARGUE APROPIACION CONVENIO 2014.pdf
MANUAL DE CONTRATACIONICFE 2014.pdf
MANUAL DE CONTRATACIONICFE 2015.pdf
PRESUPUESTO_APROBADO_2014.pdf
Presupuesto_Aprobado_Vigencia__2015.pdf

└─convenio 2014

ANEXOS CONVENIO 001-2014.pdf
CIRCULAR INFORMATIVA MANTENIMIENTO USUARIO 2014.pdf
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 001 DE 2014.pdf
HR No. 1397 CARGUE APROPIACION CONVENIO 2014.pdf

└─convenio 2015

| ANEXO C - AREAS COMUNES.pdf



FALLO No: 00001

FECHA: 25 FEB 2019

PÁGINA 17 DE 116

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO

GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES
Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001
PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200

ANEXOS CONVENIO No. 001-2015.pdf
CIRCULAR No. 0137 EJECUCION PARTIDA.pdf
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 001-2015 TRABAJO.pdf

— Nueva carpeta

- 10)Oficio No. 2017ER000899 del 05 de enero de 2017 solicitando información (F. 295).
- 11)Oficio No.2017ER0001374 del 06 de enero de 2017 de respuesta oficio No. 2017ER000899 del 05 de enero de 2017 (F. 296).
- 12)Oficio No. 2017ER0003777 del 17 de enero de 2017 de respuesta oficio 2017ER000899 del 05 de enero de 2017 (Fs. 298-299).
- 13)Oficio No. 2017EE0004492 del 18 de enero de 2017 reiterando solicitud de información (Fs. 300-301).
- 14)Oficio No. 2017ER0006257 del 25 de enero de 2017 de respuesta oficio 2017EE000899 del 05 de enero de 2017 (Fs. 307-311) que incluye medio magnético (F.311) que contiene la siguiente información:

Listado de rutas de carpetas para el volumen 24 ene 2017. El número de serie del volumen es B3A4-E399

D:.

respuesta oficio.docx
LISTADOS EXCEL.xlsx
No existe ninguna subcarpeta

- 15)Oficio No. 2017EE0008038 del 25 de enero de 2017 reiterando solicitud de información (F. 312).
- 16)Oficio 2017ER0006968 del 26 de enero de 2017 de respuesta oficio 2017EE0008038 de fecha 25 de enero de 2017 (Fs. 313-346).
- 17)Oficio No. 2017ER0010407 del 03 de febrero de 2017 de respuesta oficio 2017EE0000899 del 05 de enero de 2017 (Fs. 347-358).
- 18)Oficio No.2017ER0015233 del 15 de febrero de 2017, dando respuesta a oficio 2016EE0159176 del 19 de diciembre de 2016 (F. 365).
- 19)Correo electrónico del 10 de marzo de 2017 a través del cual el CENAC - Armenia, remitió la liquidación unilateral del contrato No. 078-BASPC08-2014 y pólizas de manejo (Fs. 386-387), incluye medio magnético (F.387) contentivo de la siguiente información:

Listado de rutas de carpetas para el volumen 170427_1006 - El número de serie del volumen es D2FA-8D23

D:.

—DOCUMENTOS CENAC ARMENIA
POLIZA DE TESORERIA 2014-15.zip
POLIZA GLOBAL 2015 HASTA 31-DI-2015.pdf
POLIZA GLOBAL DE MANEJO VIGENCIA 2016.pdf
resolucionliquidacion contrato 078BASPC8-2014.pdf

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO

GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES
Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001
PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200

- 20) Oficio No. 2017IE0033816 del 23 de abril de 2017 alusivo al informe de apoyo técnico rendido por el ingeniero civil HERNÁN ALONSO ARISTIZÁBAL ÁLZATE (Fs 388-419)
- 21) Copia del contrato de mantenimiento y adecuación No. 078-BASPC08-2014, póliza de cumplimiento de LIBERTY SEGUROS y certificado de aprobación de garantía única (Fs. 421-446).
- 22) Oficio 2017IE0035564 del 27 de abril de 2017 de solicitud de cumplimiento de Auto No. 002 del 27 de abril de 2017 (F. 447).
- 23) E-mail del CENAC - Armenia, remitiendo cuantías contractuales por razón del salario mínimo legal para el año 2014 y Resolución No. 2240 del 19 de marzo de 2014 por la cual se delegan funciones y competencias relacionadas con la contratación en el Ministerio de Defensa Nacional (Fs. 494-515).
- 24) Oficio No. 2017IE0056535 del 14 de julio de 2017 contentivo del informe alusivo a la ANT_IP-2016-01960, e incluye oficio No. 2017ER0064142 del 29 de junio de 2017 por el cual el Director de la Central Administrativa y Contable de Armenia, del Ejército Nacional, allegó contrato de Interventoría No. 079-BASPC-2014 y cuantías para contratar del Ministerio de Defensa Nacional (Fs. 519 - 527).
- 25) Oficio No. 2017IE0067224 del 23 de agosto de 2017, con el cual se allegó información de las historias laborales del TC. FERNANDO DE JESÚS CALLE MORENO y TC EDISON WILMAN MANCHEGO OROZCO (Fs. 528-548).
- 26) Oficio No. 2017IE0072524 del 11 de septiembre de 2017, remitido por el Director de la Central Administrativa y Contable de Armenia adjunta historias laborales del TC. FERNANDO DE JESÚS CALLE MORENO y TC EDISON WILMAN MANCHEGO OROZCO (Fs. 549 - 572).
- 27) Oficio No. 2017ER0092214 del 19 de septiembre de 2017, con el cual el Teniente Coronel JHON JAIRO HENAO OSPINA, Jefe de Sección Historias Laborales del Ejército, allegó información relativa a las historias laborales de los siguientes: TC. FERNANDO DE JESÚS CALLE MORENO y TC EDISON WILMAN MANCHEGO OROZCO (Fs. 573 - 590).
- 28) Oficio No. 2018IE0038994 del 24 de mayo de 2018 por medio del cual se da respuesta a objeciones al informe técnico suscrito por el profesional designado (Fs. 870-890).
- 29) Oficio No. 2018ER0054127 del 25 de mayo de 2018 por medio del cual se envía análisis de sismo resistencia nuevo edificio CENAC ARMENIA suscrito por el TC LEONARDO BARRETO GAITÁN (Fs. 893-895).
- 30) Oficio No. 2018ER0058084 del 8 de junio de 2018 por medio del cual se envía acta de reanudación audiencia de debido proceso contrato 078 (Fs 901-902)
- 31) Prueba documental presentada por el apoderado del TC FERNANDO DE JESÚS CALLE MORENO en audiencia de descargos realizada el 11 de julio de 2018 (Fs 951-1159, 1160-1360, Fs. 1361-1471)
- 32) Oficio No. 2018ER0078737 del 2 de agosto de 2018 por medio del cual se informa el estado del proceso administrativo sancionatorio contractual (Fs. 1533-1536).
- 33) Oficio No. 2018ER0080148 del 8 de agosto de 2018 remitido por la compañía de Seguros Colpatria (Fs. 1537-1538).

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO

GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES
Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001
PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200

- 34) Oficio No. 2018ER0081243 del 10 de agosto de 2018 por medio del cual Liberty seguros da respuesta a solicitud de información (Cd. 1541-1545).
- 35) Oficio No. 2018ER0085706 del 22 de agosto de 2018 por medio del cual MAFRE da respuesta a solicitud de información (C. 8 Fs. 1546-1550).
- 36) Oficio No. 2018ER0088743 del 29 de agosto de 2018 por medio del cual QBE Seguros da respuesta a solicitud de información (C. 8 Fs. 1551-1558)
- 37) Oficio No. 2018ER0090685 del 3 de septiembre de 2018 por medio del cual se adjuntan pruebas documentales por parte de la apoderada de RIMARCO SAS (Fs. 1576-1600).
- 38) Oficio No. 2018ER0105125 del 9 de octubre de 2018 por medio del cual se allega copia de estudio sede CENAC (Fs. 1620-1652).
- 39) Oficio No. 2018ER0104161 del 5 de octubre de 2018 por medio del cual RIMARCO SAS anexa pruebas documentales (Fs. 1653-1718).
- 40) Oficio de inspección visual a la obra suscrito por el asesor estructural COING MARTÍN AUGUSTO LÓPEZ JAIME (Fs. 1730-1731).
- 41) Oficio No. 2018ER0125617 de fecha 29 de noviembre de 2018, presentado por RIMARCO SAS el cual contiene las aclaraciones al informe técnico (FS. 1766-1773).
- 42) Oficio No. 2018ER0128435 de fecha 6 de diciembre de 2018 por medio del cual se envía resolución que declara la ocurrencia del siniestro de obra y hace efectiva la póliza de estabilidad y calidad de la obra (Fs. 1777-1784).

INFORME TÉCNICO:

Informe técnico presentado con el escrito No. 2017IE0033816 del 23 de abril de 2017 por el profesional universitario del grupo de vigilancia fiscal de la gerencia departamental colegiada del Quindío, el ingeniero civil HERNÁN ALONSO ARISTIZÁBAL ÁLZATE, designado en el auto de apertura e imputación No. 00091 de fecha 21 de noviembre de 2017 (Fs. 388-400) y anexos (Fs. 401-413).

Informe técnico presentado con el escrito No. 2018IE0065184 del 30 de agosto de 2018 por el profesional universitario del grupo de vigilancia fiscal de la gerencia departamental colegiada del Quindío, ingeniero civil HERNÁN ALONSO ARISTIZÁBAL ÁLZATE resultado de la visita técnica a la obra efectuada y al estudio técnico incorporado al expediente (Fs. 1559-1565).

Informe técnico presentado con el escrito No. 2018IE0087310 del 9 de noviembre de 2018 por el profesional universitario del grupo de vigilancia fiscal de la gerencia departamental colegiada del Quindío, ingeniero civil HERNÁN ALONSO ARISTIZÁBAL ÁLZATE resultado de la visita técnica luego de que el contratista realizara la intervención de reforzamientos estructurales a la obra (Fs. 1740-1755).

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO

GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES
Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001
PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200

VISITA ESPECIAL:

- 1) Acta de visita especial realizada en las instalaciones del BASPC8 «Cacique Calarcá», por la sustanciadora de la indagación preliminar YANETH ACEVEDO MORENO y funcionarios del CENAC - Armenia el día 21 de diciembre de 2016 (Fs. 277-278).
- 2) Acta de visita fiscal especial realizada el 27 de marzo de 2017 por el ingeniero civil HERNÁN ALONSO ARISTIZÁBAL ÁLZATE a la obra (Fs.410-413).
- 3) Acta de visita fiscal especial No. 01 llevada a cabo el día 9 de agosto de 2018, por el ingeniero civil HERNÁN ALONSO ARISTIZÁBAL ÁLZATE a la obra (Fs 1566-1568).
- 4) Acta de visita fiscal especial No. 02 realizada el 30 de octubre de 2018 por el ingeniero civil HERNÁN ALONSO ARISTIZÁBAL ÁLZATE a la obra (Fs 1726-1728).

VIII. ACTUACIONES PROCESALES

En el desarrollo del proceso, se destacan las siguientes actuaciones procesales:

- Auto No. 0001 fechado 1 de noviembre de 2015, por medio del cual se apertura una indagación preliminar fiscal (C. 1 Fs. 3-16).
- Auto No. 01 fechado 06 de abril de 2017, se tienen por suspendidos los términos y se reanudan los mismos (C. 2 Fs. 383-385).
- Auto No. 002 del 27 de abril de 2017, por medio del cual se cierra la indagación preliminar y se traslada al grupo de investigaciones, juicios fiscales y jurisdicción coactiva (C. 3 Fs. 448-490).
- Auto No. 00091 de fecha 21 de noviembre de 2017, por medio del cual se apertura y se imputa responsabilidad fiscal dentro del proceso verbal de responsabilidad fiscal No. PRF-2017-01200 (C. 4 Fs. 591-630).
- Providencia No. 00092 del 13 de diciembre de 2017, por medio de la cual se fija fecha y hora para el inicio de la audiencia de descargos en el proceso verbal de responsabilidad fiscal No. PRF-2017-01200 (Cd. 4 Fs. 632-634) notificada por estado No. 0055 del 14 de diciembre de 2017.
- Auto No. 00039 del 24 de mayo de 2018, mediante el cual se niega una solicitud de nulidad interpuesta (C. 5 Fs. 861-869).
- Providencia No. 000048 del 25 de junio de 2018, por medio de la cual se aplaza una audiencia de descargos y se fija fecha y hora para su continuación (C. 5 Fs. 920-921) notificada en el estado No. 0028 del 26 de junio de 2018.
- Auto No.00077 del 09 de noviembre de 2018, por medio del cual se reasigna el presente proceso de responsabilidad fiscal (C. 9 Fs 1756-1758)
- Providencia No. 00083 del 28 de noviembre de 2018, por medio de la cual se aplaza una audiencia de descargos y se fija fecha y hora para su



FALLO No: 00001

FECHA: 25 FEB 2019

PÁGINA 21 DE 116

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO

GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES
Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001
PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200

continuación (C. 10 Fs. 1761-1763), notificada en el estado No. 0054 del 29 de noviembre de 2018.

Por tratarse de un proceso verbal, durante su desarrollo se llevaron a cabo diez (10) sesiones de la Audiencia de Descargos, de la siguiente manera:

PRIMERA SESIÓN AUDIENCIA DE DESCARGOS, realizada el día 24 de enero de 2018, la cual fue suspendida toda vez que al no hacerse presente el señor TC EDISON WILMAN MANCHEGO OROZCO, presunto responsable fiscal, el despacho requería adelantar los trámites pertinentes para la designación de un apoderado de oficio, en aras de garantizarle su derecho de defensa y contradicción.

SEGUNDA SESIÓN AUDIENCIA DE DESCARGOS, efectuada el día 27 de febrero de 2018, la cual fue suspendida por fallas técnicas relacionadas con la imposibilidad de establecer conexión con la ciudad de Bogotá D.C.

TERCERA SESIÓN AUDIENCIA DE DESCARGOS, surtida el 21 de marzo de 2018, en la que se reconoció personería jurídica, se dio lectura al Auto de Apertura e Imputación de Responsabilidad Fiscal No. 000911 del 21 de noviembre de 2017 y se corrió traslado del informe técnico y del material probatorio recaudado en el trámite de la denuncia 2016-95575-80634-D y en la indagación preliminar ANT_IP-2016-01960 concediéndose un término de diez (10) días para que los sujetos procesales se pronunciaran.

CUARTA SESIÓN AUDIENCIA DE DESCARGOS, llevada a cabo el día 7 de mayo de 2018, en la cual se exhortó a los presuntos responsables fiscales para que aceptaran o no los cargos, así como para que presentaran solicitud de acumulaciones, propusieran nulidades, impedimentos y/o recusaciones, aspecto frente al cual no aceptaron cargos y por parte del apoderado de ALLIANZ SEGUROS S.A. se interpuso solicitud nulidad de lo actuado y solicitud de desvinculación de la aseguradora.

QUINTA SESIÓN AUDIENCIA DE DESCARGOS, realizada el día 24 de mayo de 2018, en la cual mediante Auto No. 00039 de la misma fecha se negó la solicitud de nulidad impetrada, se resolvieron las objeciones por parte del profesional designado ingeniero civil HERNÁN ALONSO ARISTIZÁBAL ÁLZATE presentadas frente al informe técnico y se dio lectura al Auto No. 00031 del 3 de mayo de 2018 por medio del cual se decretan medidas cautelares, se interpuso recurso de reposición por parte del apoderado judicial del señor FERNANDO DE JESÚS CALLE MORENO en calidad de presunto responsable fiscal.

SEXTA SESIÓN AUDIENCIA DE DESCARGOS, surtida el día 11 de julio de 2018, en la cual se dio lectura al Auto 00051 de la misma fecha, por medio del cual se confirma en todas sus partes el Auto No. 00031 del 3 de mayo de 2018 que

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO

GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES
Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001
PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200

decretó medidas cautelares y se corrió traslado a las partes de informaciones y solicitudes plasmadas en diversos oficios. Así mismo, se pasó a la etapa de presentación descargos, toda vez que los señores FERNANDO DE JESÚS CALLE MORENO, EDISON WILMAN MANCHEGO y ROBERTO ERIC PRIETO CASALLAS, renunciaron a la exposición libre y espontánea.

SÉPTIMA SESIÓN AUDIENCIA DE DESCARGOS, celebrada el día 13 de julio de 2018, en la cual se continuó y culminó con la presentación de descargos. Igualmente, se adelantó la etapa de pruebas, incorporando al proceso los documentos aportados por el apoderado del TC FERNANDO DE JESÚS CALLE MORENO, el oficio remitido por el apoderado de FARMAQ SAS, los documentos probatorios enuncidados por las partes, las carátulas de las pólizas de la compañía de seguros QBE y se decretó oficiar a cada una de las compañías aseguradoras principal y coaseguradoras, para que certificaran los montos de las pólizas y su disponibilidad. Así mismo, oficiar al comando para que remitiera el estado del proceso administrativo sancionatorio instaurado contra el contratista RIMARCO SAS y las actas de inspección de ingenieros del comando. Igualmente, el despacho decretó de oficio correr traslado al profesional designado como apoyo técnico ingeniero HERNÁN ALONSO ARISTIZÁBAL ÁLZATE del informe del CENAC para que realizara una valoración y comparativo de los informes, el cual debía efectuar luego de llevar a cabo visita técnica al sitio de la obra, con el ánimo de establecer si hubo resarcimiento pleno del daño.

OCTAVA SESIÓN AUDIENCIA DE DESCARGOS, celebrada el día 31 de agosto de 2018, en la cual se corrió traslado a todos los sujetos procesales de las pruebas documentales aportadas obrantes a folios 951 y ss. Seguidamente, se procedió a dar lectura al informe de valoración y comparación de informes realizado por el ingeniero HERNÁN ALONSO ARISTIZÁBAL ÁLZATE frente al cual las partes tuvieron la oportunidad de controvertir y se decretó por parte del despacho la revisión por parte del apoyo técnico del estudio de vulnerabilidad efectuado por MASERRA ingeniería y arquitectura. Igualmente, se decretó una nueva visita en compañía del cuerpo de ingenieros del comando CENAC.

NOVENA SESIÓN AUDIENCIA DE DESCARGOS, celebrada el día 9 de noviembre de 2018, donde se comunica el cambio de sustanciador y se continua con la práctica de pruebas, corriendo traslado de diversos oficios allegados al expediente y de las resultas de la visita técnica practicada por el apoyo técnico y los ingenieros del comando CENAC que fue plasmada en informe, del cual se concedieron diez (10) días, para los pronunciamientos respectivos.

DÉCIMA SESIÓN AUDIENCIA DE DESCARGOS, realizada el día 20 de diciembre de 2018, en la cual se corre traslado a las partes de una prueba documental y se efectúa pronunciamiento respecto al escrito de aclaraciones al informe técnico por parte de la apoderada de RIMARCO SAS, el cual fue presentado de manera



FALLO No: 00001

FECHA: 25 FEB 2019

PÁGINA 23 DE 116

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO

GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES
Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001
PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200

extemporánea. Se culmina la audiencia de descargos y se da inicio a la Audiencia de Decisión.

PRIMERA SESIÓN AUDIENCIA DE DECISIÓN, se da inicio el 20 de diciembre de 2018, se les comunica a los sujetos procesales que el debate probatorio ha terminado y que seguidamente pueden presentar los alegatos de conclusión de conformidad con lo establecido en el artículo 101 de la Ley 1474 de 2011.

SEGUNDA SESIÓN AUDIENCIA DE DECISIÓN, celebrada el día 28 de enero de 2019, en la cual se presentaron los alegatos de conclusión por parte de los apoderados de los presuntos responsables fiscales y de las compañías de seguros ALLIANZ SEGUROS S.A y AXA COLPATRIA S.A., QBE SEGUROS S.A., MAFRE, LIBERTY y LA PREVISORA S.A.

IX. ARGUMENTOS DE DEFENSA DE LOS PRESUNTOS RESPONSABLES FISCALES Y DE LOS TERCEROS CIVILMENTE RESPONSABLES ANTE EL AUTO DE APERTURA E IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD FISCAL

Una vez iniciado el trámite del presente proceso verbal de responsabilidad fiscal, encontrándonos en la Audiencia de Descargos, los presuntos responsables fiscales y los apoderados presentaron sus argumentos de defensa frente al Auto de Apertura e Imputación de Responsabilidad Fiscal, en los siguientes términos:

ARGUMENTOS DE DEFENSA DEL TENIENTE CORONEL FERNANDO DE JESÚS CALLE MORENO POR INTERMEDIO DE SU APODERADO DOCTOR JUAN SEBASTIAN HENAO GARZÓN (Fs. 928-930):

En la audiencia da lectura a su escrito de descargos y manifiesta:

*. mis actuaciones respondieron a una necesidad del servicio, que debí atender en su momento, tal y como se expresó al inicio de estos descargos mediante una comunicación del Mayor General **ERNESTO MALDONADO GUARNIZO**, en calidad de Segundo comandante y **JEM** del Ejército, en donde planteó los planes de necesidades del **CENAC**, expresando las de mantenimiento de bienes inmuebles entre otros.*

Se contaba con la disponibilidad presupuestal para el efecto como se ha señalado en precedencia, con vigencias actuales para la fecha, futuras y de adición presupuestal, que en ningún momento afectaron la etapa precontractual, ni contractual.

*Se designaron diferentes comités para participar en el proceso de selección abreviada que adelanté en su fase inicial, contando con profesionales idóneos en quienes se depositó la confianza legítima que implica el cargo que el suscrito ostentaba, por tanto, se contó con. **GERENTE DEL PROYECTO, SUPERVISOR, ESTRUCTURADOR TÉCNICO, ESTRUCTURADOR JURÍDICO, ESTRUCTURADOR***



FALLO No: 00001

FECHA: 25 FEB 2019

PÁGINA 24 DE 116

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO

GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES
Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001
PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200

ECONÓMICO, EVALUADOR TÉCNICO, EVALUADOR JURÍDICO, EVALUADOR ECONÓMICO.

Se siguieron todos y cada uno de los lineamientos de la contratación estatal hasta donde me correspondió, pues se respetaron los fines de la constitución, la Ley y la función pública.

Se tomó la oferta que mayor puntaje obtuvo y que generaba más beneficio a la entidad contratante, pues, la sociedad contratista generó la aptitud suficiente para la funcionalidad, mantenimiento, durabilidad y estabilidad de la obra.

Finalmente se suscribe el contrato, se adjudica, suscribo acta de inicio y hasta allí garanticé porque todo lo atinente a ese contrato siguiera a cabalidad las normas y principios de la contratación estatal

Ahora bien, se tendría entonces, de acuerdo al problema jurídico a resolver por parte de este honorable cuerpo colegiado, determinar si mi participación como ordenador del gasto para ese contrato y si dentro de los tiempos en que fungí como tal, mis acciones fueron determinantes en la entrega de una obra presuntamente "inútil" y generadora de un daño fiscal.

Mas adelante señala:

Por lo expresado, solicito a este cuerpo colegiado, se revisen los elementos de la responsabilidad, que en ningún momento podrían recaer sobre mí, toda vez que mis actuaciones no se encuentran permeadas de dolo o culpa atribuible al suscrito, pues, mis funciones fueron desarrolladas con el debido acatamiento, celendad y respeto por el derecho positivo, y de revisarse el nexo causal en el presunto detrimento patrimonial de una obra que al parecer es inútil, de ninguna manera deviene de la etapa precontractual, ni la rúbrica del contrato, sino más, de su ejecución y de las garantías que el contratista, se encuentra en la posibilidad de ofrecer, como quedó establecido con la contratación de fiducia, la expedición de pólizas y la capacidad técnica, financiera y de experiencia que demostró el mejor oferente

De lo anterior, se colige con extrema claridad, que cualquier incumplimiento contractual, en temas de estabilidad de obra, es del resorte único y exclusivo del contratista, quien al suscribir el contrato que hoy nos ocupa, aceptó todos los avatares que nos convocan, y es el principal interviniente llamado a responder, toda vez que el suscrito no ejecutó el contrato, ni la obra, pues hubo competencias que como se expresó, eran material y jurídicamente imposibles de llevar a cabo por mí.

...

Conforme estos hechos expuestos se pude concluir

*Para el ente de control se configuró el daño **por el recibo de una obra sin terminar**, sin que se imputara el daño a las actuaciones de planeación, actividad precontractual y celebración del contrato, lo que provocó una imputación limitada, situación que da*

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO

GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES
Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001
PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200

cuenta que no existe mérito alguno para establecer responsabilidad frente a la etapa de planeación al encontrar que sí existía la necesidad, el rubro presupuestal y las obligaciones tratadas se sujetaban a las mismas

*Se debe precisar tal y como se detalla de forma reiterada en el Auto 091 de 2017, que el daño se consolidó el día **Seis (6) de octubre de 2015**, fecha en la cual se suscribió el acta de recibo a satisfacción No **01114**, del contrato No. **078 BASPC08-2014**, es decir, se limita temporalmente el daño, a la fecha en que se recibió la obra.*

El equipo auditor en ningún momento en los hechos vislumbró indebidas actuaciones o hechos atribuibles al daño, frente a mi participación en la etapa de planeación, actuaciones precontractuales que no cuestionaron o que aun si así se hubiese realizado, no quedaron consignadas en el daño imputable a mi nombre, más aun cuando al contrario de lo anterior queda plenamente evidenciado que en mi calidad temporal en el contrato objeto de revisión como ordenador de gasto, cumplí con lo dispuesto en el punto 17 de la resolución 6345 de 2012 Manual de Contratación del Ministerio de Defensa Nacional y sus unidades ejecutoras, rompiendo con esta situación el nexo causal entre la responsabilidad fiscal y el daño, al encontrar que no se le puede imputar al investigado una conducta activa u omisiva en lo que respecta a la participación en el acta de recibo de satisfacción del día 6 de Octubre de 2015, fecha en la cual no contaba con funciones y/o competencias para actuar como ordenador del gasto, lo cual deja plenamente claro que la eventual y presunta responsabilidad, recae única y exclusivamente en la persona ejecutora del gasto para la respectiva fecha...

ARGUMENTOS DE DEFENSA DEL TENIENTE CORONEL EDISON WILMAN MANCHEGO OROZCO A TRAVÉS DE SU APODERADA DE CONFIANZA DOCTORA MARITZA DEL SOCORRO QUINTERO JIMÉNEZ (Fs.928-930):

.. Mi cliente fue totalmente ajeno a la etapa precontractual por lo que no tuvo participación alguna en las cotizaciones y precios del mercado, estudios previos y pliego de condiciones ni en la minuta del contrato. En efecto, el 31 de octubre de 2014 se solicitó un CDP por valor de 300 millones, y el jefe financiero comunica destinación del presupuesto de Armenia en 300 millones vigencia actual, 316 millones para una vigencia futura y una adición de 350 millones. Quiero hacer énfasis en estos antecedentes y solicito que la Contraloría tenga en cuenta estas actuaciones del nivel central, pues desde allí es de donde se enviaba el plan de necesidades para mantenimiento de inmuebles, es decir, para este caso el jefe financiero le dice a Armenia ustedes para la vigencia 2014 tienen 300 millones, por vigencia futura tienen 316 millones y una adición de 368, pero con esos 984 millones hacen un plan de necesidades y el 20 de noviembre se establece un plan de necesidades relacionadas con el mantenimiento y adecuación de las instalaciones locativas del CENAC que es el objeto contractual. Entonces en las necesidades en el año 2014 se tenían 300 millones de pesos para la contratación entonces en los estudios previos, en los que no participó el Cnel. Manchego, cuando él llega a la ejecución, el proceso ya estaba determinado desde el punto de vista presupuestal y de pronto el desfinanciamiento que pudo tener el proyecto que más adelante yo explico, por qué? porque en los estudios previos suscritos por TC JHON RODRIGUEZ PARRA de fecha noviembre de 2014 se menciona mantenimiento, adecuación y remodelación y se señala que se

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO

GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES
Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001
PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200

tiene una partida especial para la vigencia de 2014, lo que hace evidenciar que el proceso se iba a desarrollar por etapas porque si estamos frente a un presupuesto y unas cantidades por 984 millones y decimos que para la vigencia 2014 tenemos 300 millones pues se van a bajar cantidades y presupuesto, entonces por ejemplo en los estudios previos dice: los materiales para instalación de redes serán suministrados conforme a las cantidades y especificaciones mínimas relacionadas y ya en los estudios previos dice se dejó un presupuesto de 285 millones y una vigencia futura de 300 millones, pero como el ejército no mandó toda la plata, el presupuesto fue ajustado a 585 millones, entonces para que coordine con el informe de la jefatura de ingenieros, el presupuesto inicial era de 980 y finalmente tocó ajustar el objeto contractual a 580 millones. Se evidencia que el proyecto quedó desfinanciado. Esto comportó que se ajustara el presupuesto y las cantidades inicialmente establecidas en 985 millones. Entonces yo quiero que el apoyo técnico revise que se cortó todo lo establecido en el plan de necesidades inicial de 985 millones, tal es el caso del ítem 2.6 las cantidades de obra quedaron un poco de ítems por fuera. Debe precisarse que se conformó un comité estructurador técnico, jurídico y económico y se nombró un comité evaluador. Debe precisarse que las cotizaciones realizadas en noviembre de 2014, todas las cotizaciones son de más de 900 millones de pesos para un contrato que se hizo por 580 millones, entonces precisamente eso es lo que yo quiero dar a entender, que se tenga en cuenta esa situación, entonces en estas actuaciones no estuvo mi defendido el Cnel. Manchego. Ahora, el 24 de diciembre de 2014 se suscribe el contrato y dice: mantenimiento y adecuación de instalaciones locativas y red LAN para poner en funcionamiento las oficinas del CENAC Armenia de acuerdo a los estudios previos y la propuesta del contratante por valor de 585 millones. Para esta época mi cliente no ostentaba el cargo de director del CENAC. En enero se tramita un anticipo que se tenía pactado por 284 millones de pesos. ¿Qué pasa? Cuando llega el Cnel. a verificar la ejecución del contrato, el contratista advirtió aquí hay una serie de ítems que hay que adicionarlos pues se eliminaron del ítem 2.6, entonces el Cnel manifiesta que era necesario un concepto a la jefatura de ingenieros para que indicara qué hacer con este contrato en el cual quedaron por fuera varios ítems que los cortaron y no los ajustaron a los 580 millones. Entonces el 19 de marzo de 2015 se suspendió el contrato y las razones que dio mi defendido fueron que se daba la necesidad de incluir actividades no previstas en el objeto contractual, las cuales estaban dentro del proyecto de 935 millones que no se pudo realizar y que eran necesarias para la ejecución normal de este contrato. Entonces por ser actividades adicionales tenían un costo adicional, desmonte, descapote, demolición de la edificación, la cual estaba prevista desde el plan de necesidades, bloques, pañetes, muros, enchapes, cerámica importada, sanitarios. Entonces todos estos ítems que fueron eliminados, hacían parte del plan de necesidades. Entonces se dijo, suspendamos a ver qué actividades nos alcanza con los 500 millones y qué plata nos hace falta, entonces el Cnel. dijo, suspendamos a ver que hacemos y que podemos ejecutar esperando que se adicionara más plata para cubrir los famosos 900 millones establecidos en el plan de necesidades. Paralelo a esto, se dio una contradicción que debe ser aclarada entre el objeto acordado (mantenimiento) y adecuación de instalaciones locativas y el contrato celebrado entre las partes de obra pública, aparente contradicción que debe ser subsanada de manera inmediata, que establecía mantenimiento y se trataba de una demolición porque en si efectivamente se necesitaba una demolición, y en una parte de los estudios previos decía rehabilitación. Entonces con base en estas actas aclaratorias ya vino la jefatura de

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO

GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES
Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001
PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200

ingenieros que es quien maneja la parte técnica del ejército a nivel nacional y la jefatura de ingenieros fue la que consideró pertinente y dijo qué estaba pasando y también vino a hacer seguimiento a ver qué podían hacer. El día 15 de junio de 2015, se adicionaron actividades hasta el monto de los recursos, entonces qué quiero yo explicar; como habían unas actividades iniciales en el plan de necesidades, se requerían todas estas que yo les mencioné de los ítems 3.03 al ítem 11.5 entonces se adicionaron y se ajustaron esas actividades que faltaron en el contrato inicial. Entonces al estar el contrato suspendido y no haber plata, él amplió el plazo contractual, pues la misma ley 80 dice que como ordenador del gasto él debía garantizar la ejecución del contrato, él realizó la gestión de la adición, no se la dieron y por lo menos realizó acciones para garantizar la ejecución de los 585 millones. El mismo supervisor al que excluye la contraloría, afirma que la obra no pudo ser terminada en su totalidad ya que el recurso asignado no alcanzó y el existente fue ejecutado por RIMARCO. El 6 de octubre de 2015 fue suscrita el acta de recibo a satisfacción del contrato, que fue suscrita por mi mandante por encontrarse precedida del siguiente concepto del apoyo a la supervisión del grupo empresarial Farmaq: "En virtud de lo anterior solicitamos se conceda el visto bueno de la ejecución de las actividades adelantadas por RIMARCO y la entrega a satisfacción de la debida ejecución contractual para no alterar ni retardar las acciones subsiguientes. Entonces ahí hay un visto bueno que el interventor dice conforme a lo hecho se ejecutó la labor". El 26 de noviembre de 2015, luego de recibida la obra, él llamaba siempre a la jefatura de ingenieros bueno vengan a ver cómo quedó esto, el 26 de noviembre la jefatura de ingenieros hace visita de reconocimiento concluyendo que deberá hacerse un comparativo de las actividades ejecutadas con las actividades faltantes, para determinar qué recursos se requieren para finalizar la obra y concretarla en una segunda etapa. El 15 de marzo de 2015 mi defendido dice yo que hago con este proceso, lo voy a suspender va a la jefatura de ingenieros y le dicen mire señor para que las obras queden más o menos en obra gris le faltan estas actividades, ya en noviembre le dicen mire señor que más le falta y pida más recursos, porque tenemos que consolidar los 900 millones que tenían planeado. El 30 de noviembre de 2015, TC JOSE MANUEL GÓMEZ VALENZUELA, señaló: "que en efecto el proyecto finalizó en etapa de obra gris", dejando pendiente la mayoría de las obras en acabados, así como instalaciones eléctricas y de voz de datos, por lo tanto, la instalación no puede entrar al servicio porque se necesitan los 365 millones que mi defendido había solicitado y le sugieren realizar los trámites para la consecución de los recursos necesarios para terminar la obra, se señala que el contratista de interventoría tomaron las acciones correctivas. Después que sale mi defendido el periodo de él fue del 8 de enero de 2015 al 14 de junio de 2016, él gestiona los recursos para la terminación de la obra en la segunda etapa y le dijeron que no alcanzó, cuando él entra, el anticipo ya se había dado y cuando él sale, él lo único que hizo fue ver cómo se ejecutaba la obra y cómo quedaba la obra, no giró ningún recurso ni nada de esas cosas. Ni al momento del giro del último desembolso, ni del acta de liquidación unilateral tampoco se encontraba como comandante. Con esto quiero verificar las actuaciones y desvirtuar el dolo o la culpa grave que se le pueda endilgar al Cnel. Manchego pues lo que hizo fue garantizar que se pudiera ejecutar el contrato y que pudiera quedar más o menos en obra gris mientras llegaba la otra plata y se terminaba. Entonces la interventoría también se ajustó a la administración y a los recursos que se daban. Entonces frente al análisis de responsabilidad fiscal de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 610 de 2000 y el elemento del dolo o la culpa en la gestión fiscal, dentro del cual

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO

GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES
Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001
PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200

queda proscrita la responsabilidad objetiva, juicio que hace el despacho respecto a mi defendido, donde al haber firmado el modificadorio del contrato, generalizaron la actuación por la solidaridad en materia de contratación y no individualizaron la actuación de cada uno de los presuntos responsables fiscales, no se estudiaron las condiciones de tiempo, modo y lugar de cada uno de los imputados, cuáles eran las obligaciones funcionales, cómo se incumplieron y en qué sentido su actuar se traduce en negligencia grave, no se analizaron las actuaciones del nivel central donde se estableció un plan de necesidades con 900 millones y mandan solamente 500 millones de pesos. Imputar a una persona un resultado con fundamento en la simple relación de causalidad material es lo que constituye responsabilidad objetiva. De las pruebas practicadas por la Contraloría se concluye que no se realizó una valoración probatoria, es decir, en el informe técnico se dice que la obra quedó gris pero no hace un análisis de por qué no está funcionando, cuáles fueron los antecedentes, cuáles fueron los estudios del mercado; si se hubiera analizado esto se sabría por qué la obra quedó en etapa gris, reitero no se hizo ningún análisis, no basta con que se diga la obra no está funcionando, son responsables todos los funcionarios intervinientes, debe explicar los motivos por los cuales llegó a esa conclusión y debe tener certeza subjetiva de la existencia del mismo. También se debe tener en cuenta que nadie está obligado a lo imposible y como iba el Cnel. a terminar una obra sin el presupuesto necesario que no fue asignado por el nivel central, igualmente no estoy de acuerdo en que se tramite un proceso de responsabilidad fiscal cuando existe un proceso sancionatorio contractual en curso. Cuando se trata de un incumplimiento contractual se deben hacer efectivas las pólizas de estabilidad, la de cumplimiento y en este caso la Contraloría no tiene nada que ver, además pretender un resarcimiento económico cuando no se ha presentado ningún detrimento patrimonial, viene a constituir un enriquecimiento sin causa, que repugna con los elementos de justicia y rechaza nuestra legislación. Solicito que la Contraloría revise cuál es el objeto del proceso de responsabilidad fiscal y cuáles son los hechos del proceso sancionatorio contractual para poderlo desvirtuar...

Finalmente hace alusión también a la sentencia de la causa adecuada, pues se cuestiona si la modificación que hizo el Coronel fue la que produjo el daño. Concluye solicitando el archivo del proceso.

ARGUMENTOS DE DEFENSA DE RIMARCO SAS EN CALIDAD DE CONTRATISTA, A TRAVÉS DE SU APODERADA DOCTORA PAOLA ANDREA ADAMES PASTRANA:

... Se debe indicar que el ejército entrega al batallón de Armenia un proyecto de los cuales se solicitaba las cotizaciones mediante oficio del 7 de noviembre de 2014, el jefe financiero estableció un valor total de \$984 359 780, donde se establece que para la vigencia actual se tendrían unos 300 millones, una vigencia futura de 316 y una adición de 368 millones. Se señaló un anticipo el cual sería manejado en una fiducia. El 24 de abril de 2014, la jefatura financiera envió el plan de necesidades, donde se señaló que el plan tendría que ser sobre el mantenimiento de unos bienes inmuebles, estando sujetas únicamente a las especificaciones técnicas descritas en los planes adjuntos. El plan de necesidades del 20 de noviembre de 2014 señaló: Se planea la necesidad de adquisición de bienes y servicios, como mantenimiento de bienes

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO

GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES
Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001
PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200

inmuebles, para mantenimiento de la primera fase del CENAC Armenia por un valor de 585 millones, correspondientes a los recursos situados por el Comando Superior en vigencia de 2014. No obstante, a que los recursos presupuestados inicialmente sumaban 984 millones. Debe resaltarse que las cotizaciones que se solicitaron en noviembre, se aportaron por más de 900 millones. Posteriormente en el plan de necesidades de diciembre de 2014 se mantiene la descripción de la necesidad de mantenimiento de una fase, pues en sí, este contrato era de mantenimiento y no de construcción como se configura después. En los estudios previos se indica que las condiciones y las especificaciones técnicas se encuentran en el anexo de condiciones técnicas, y documento complementario que corresponde a los diseños y medidas y áreas y materias de condiciones técnicas, acabados para las obras de mantenimiento. Atendiendo a la convocatoria del 24 de diciembre, se suscribió contrato No. 078 cuyo objeto fue: mantenimiento y adecuación de instalaciones locativas y red LAN para poner en funcionamiento las oficinas del CENAC Armenia en el BASPC8, de acuerdo a los estudios previos de la entidad y la propuesta adjudicataria.

En la respectiva convocatoria la entidad no tuvo en cuenta las normas sismo resistentes pues en los estudios previos no se indicó nada acerca de las mismas, pues el objeto inicial de este contrato, en los estudios y en todo lo que se llevó a cabo, era para mantenimiento y adecuación, pero en los estudios previos solamente en una parte se citaba la rehabilitación, pero nada tenía esto que ver con las normas sismo resistentes. Se debe aclarar que el objeto del contrato era el mantenimiento de una edificación que ya existía. Inicialmente la entidad no quería suspender la obra, pero al final interventoría intervino a la Jefatura de Ingenieros que suspendió la obra para una verificación, ¿por qué? porque es que la obra que se iba a construir estaba en unas deficientes condiciones y nosotros como constructora consideramos que ahí no se podía hacer nada, que había que demoler y ya el objeto tenía que cambiar pues no era un mantenimiento sino una construcción. Entonces desde el principio se evidenció una falla en la entidad, puesto que se hizo unos estudios previos frente a un mantenimiento de lo cual estaba ya una edificación construida, pero era una edificación precaria, que en realidad no cumplía con ninguno de los requerimientos. El día 19 de marzo de 2015 se resolvió suspender el contrato. Se solicitó la presencia del supervisor en la ejecución del contrato, pero éste nunca se presentó, estuvimos prácticamente solos en la etapa de ejecución, el cual, de acuerdo con la matriz de riesgos, era una responsabilidad de la administración que el supervisor atendiera de manera eficaz y eficiente los requerimientos. En el mes de mayo de 2015, se realizó un plan de contingencia y entre las conclusiones, se dejó señalado. "Se expone a la entidad una posible solución para continuar con el avance de la obra normal, se le solicita a la supervisión apersonarse del tema, estudiar las posibles soluciones aportadas, tanto, por el contratista como por la misma entidad y ofrecer una solución definitiva con el fin de no seguir dilatando el desarrollo de las actividades y ocasionándonos a nosotros un atraso en la ejecución de esta obra" Como se puede evidenciar, como contratista se desarrolló la mayor cantidad de la obra, que es objeto de un restablecimiento en el equilibrio financiero. La obra se ejecutó mediante un modelo, mediante un programa especial en el cual se determinó que la obra aguantaba un sismo y en cuanto a los sismos, la obra cumple con su propósito. Por otro lado, en la forma de pago, tanto en los pliegos como en el contrato se previó un pago con anticipo, en la suma de 285 millones, mediante fiducia, el cual solo se efectuó hasta el 1 de junio de 2015, es decir, 7 meses después de haber iniciado con

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO

GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES
Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001
PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200

la ejecución del contrato. El día 15 de junio de 2015, se suscribió el modificadorio 1 mediante el cual se adecuaban las actividades contractuales a las realidades de la obra y del contrato, previo al análisis técnico de la jefatura de ingenieros. El día 4 de septiembre de 2015, se suscribió el modificadorio 2 en el que se amplió el plazo contractual por no encontrarse en la ciudad de Armenia algunos materiales necesarios para la ejecución de la obra. En el informe de apoyo a la supervisión del 6 de octubre de 2015, entre las conclusiones y recomendaciones se señaló: 1. Las actividades ejecutadas por el contratista de obra se encuentran en general en óptimas condiciones por lo que es viable la entrega por parte del contratista de la obra, 2. A la presente fecha la obra no es funcional puesto que la misma no cuenta con puertas, ventas, red LAN y otras actividades totalmente utilizables, sin embargo, los recursos asignados por el contratista para la ejecución de la obra fueron invertidos en un 100%. El día 6 de octubre de 2015, fue suscrita el acta de recibo a satisfacción de la obra, que mi mandante suscribió por encontrarse precedida del concepto del representante legal con el apoyo del grupo empresarial FARMAC SAS. En la revista realizada el 26 de octubre de 2015, por parte de la asesora de obra de la 5ta división, señaló: "Es de señalar que la obra si bien no fue terminada en su totalidad ya que el recurso asignado para la obra civil no alcanzó y fueron ejecutados en su totalidad por la empresa RIMARCO". El 30 de noviembre de 2015 el TC JOSE MANUEL GÓMEZ VALENZUELA, señaló que en efecto el proyecto finalizó en etapa de obra gris, dejando pendiente la mayoría de actividades de acabado, así como también las instalaciones eléctricas y de voz y datos, por lo cual la edificación no puede entrar en servicio. Pertinente dejar claro que la entidad contratante inicia la consecución de los recursos faltantes, en aras de dejar una instalación en condiciones óptimas para su funcionamiento. Se señaló igualmente que el contratista de interventoría de obra tomó las acciones correctivas, dice el coronel. Como se evidencia, con los recursos ejecutados, la obra quedó en una primera fase, el cual para finalizar la obra se requiere contar con más recursos. El 25 de julio de 2016 por acta de verificación aspectos técnicos del contrato, el contratista hizo entrega de los planos récord en físico, digital y estructurales, de cubiertas, acabados, redes hidráulicas, redes eléctricas, detalles constructivos, haciendo énfasis en que los mismos habían sido entregados en el informe, final soporte acta de recibo final, con recibido a satisfacción del 6 de octubre de 2015. Mediante Resolución No. 0037 del 9 de marzo de 2017, se liquidó unilateralmente el contrato y debido a la investigación de la Contraloría, se retiene la suma de 43 millones. Finalmente, debe señalarse que la obra se ejecutó mediante un programa especial, en el cual se determinó que la obra era capaz de soportar un evento sísmico, de los cuales se puede evidenciar que, en el Municipio de Armenia, en estos últimos años después de la obra, ocurrieron 2 eventos sísmicos de gran magnitud y a pesar de ello la obra se encuentra intacta. Esos eventos sísmicos ocurrieron en 2015, el 1 de marzo, con una magnitud de 6.3 y el otro, el 3 de octubre de 2016, con una magnitud de 5.2. La obra no se cayó, está igual, en perfecto estado, así que en cuestión de eventos sísmicos estamos bien y la obra cumple con esos requisitos. Prácticamente un año después de iniciada la obra se giró el anticipo, es decir, se estuvo prácticamente más de 7 meses trabajando sin nada. De esa manera me permito indicar que las irregularidades en la etapa precontractual y contractual se dieron por una ausencia de planeación por parte de la entidad contratante. Respecto a la planeación ha manifestado el Consejo de Estado, que su falta tiene incidencias en la etapa de formación del contrato pero ella se refleja con mayor importancia en su etapa de ejecución, momento en el cual las omisiones de la administración, generan

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO

GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES
Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001
PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200

graves consecuencias por falta de estudios y diseños definitivos, circunstancias que llevan a modificar las cantidades de obra, las condiciones técnicas inicialmente pactadas y en el peor de los casos conducen a la paralización de las obras o a su imposible realización.

Continúa su intervención la apoderada, haciendo alusión a varios pronunciamientos del Consejo de Estado respecto a la trascendencia del principio de planeación el cual a su criterio fue trasgredido por la entidad, pues es exclusivamente de su competencia, sin que le sea posible al oferente, participar de esta etapa precontractual. Igualmente menciona las deficiencias del presupuesto, que se proyectó inicialmente en 984 millones y que se materializó en un contrato de obra por 584 millones, detectando que esta suma no cubría todo el proyecto, por lo que la oficina de ingenieros determinó que la obra era gris y que requería mayores recursos, situación que no se dio. Reitera que su prohijada ejecutó el 100% del presupuesto el cual era insuficiente para terminar con la obra.

Más adelante arguye:

... Algo muy importante que ocurrió con este contrato fue la deficiencia en la entrega del paquete técnico por parte del Batallón. Para efectos técnicos la entidad contratante entregó un paquete técnico que no cumplía con las necesidades de este contrato, pues se evidenció que las cantidades en cuanto a cemento, varillas y demás materiales de la obra eran deficientes y eran diferentes respecto de los planos y la ejecución que ellos querían. Se entregó un paquete técnico que no cumplía con las necesidades de este contrato, por ejemplo, en la realidad se necesitaba demolición, cargue y descargue de escombros y esto no estaba contemplado. Por lo tanto, era necesario un paquete técnico con estudios de suelos, planos estructurales actualizados, pues los suministrados por la entidad no eran los más idóneos para este tipo de obra. Recordemos que ellos nos entregaron un paquete técnico por el mantenimiento, pero no por la estructura que se debía realizar, pues acá no era solo mantenimiento, se tenía que demoler, y se tenían que hacer unas nuevas columnas, zapatas, por decir de alguna manera, de los cuales ellos no nos entregaron estos requisitos y estas actividades nuevas generaron nuevos presupuestos.

Indica además que la obra es sismo resistente, advirtiendo: lo que pasa es que no cumple con las normas de los estándares que es lo que solicitaron, cuestión que no se encontraba descrito en la planeación contractual. Se compromete de esta manera el contratista a realizar el reforzamiento de la manera más técnica posible, de acuerdo al informe presentado por el comando de ingenieros del ejército nacional de fecha 22 de mayo de 2018 y que la obra deberá venir acompañada por un método constructivo, normas estructurales, seguimiento permanente, que será entregada en fecha 6 de agosto de 2018, es decir, hay una inexistencia del daño puesto que ya se está subsanando lo que nos indicaron los ingenieros en el informe.

Aduce que los hechos presentados en el proceso sancionatorio contractual y en el proceso de responsabilidad fiscal son iguales, tienen el mismo objeto, la misma

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO

GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES
Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001
PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200


naturaleza, por lo cual no se puede volver a juzgar dos veces por lo mismo. En el presente caso la Contraloría confundió el incumpliendo contractual con el perjuicio económico que no se cuestiona bien, pudo haber soportado la contratante el cual fue producto de las irregularidades en la ejecución del contrato, que en todo caso no se pueden equiparar con el daño patrimonial pues ya se inició un proceso sancionatorio en el cual ya se están realizando las obras y se está gestionando la parte de gestión de calidad que es lo único restante. Afirma que Rimarco no puede catalogarse como gestor fiscal y no puede ser objeto de responsabilidad fiscal, por tanto, solicita que no se le declare responsable fiscal y que se archive el proceso.

ARGUMENTOS DE DEFENSA DEL CONTRATISTA CON FUNCIONES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN GRUPO EMPRESARIAL FARMAQ S.A.S. A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL ROBERTO ERIC PRIETO CASALLAS:

Mediante auto del 21 de noviembre de 2017 este Despacho resolvió aperturar e imputar responsabilidad fiscal teniendo como uno de los presuntos responsables al grupo empresarial FARMAC SAS con quien se suscribió el contrato de prestación de servicios profesionales No. 079-BASPC08-2014, para apoyar la supervisión al Contrato No. 078-BASPC08-2014. Llama la atención del Despacho que en virtud de dichas obligaciones se suscribió el acta de recibo final de obra y el acta de recibo a satisfacción, ambas de la misma fecha 6 de octubre de 2015, omitiendo el cumplimiento de las obligaciones contractuales, siendo negligente en cuanto a la observancia del mismo, pues con su aval permitió que durante el proceso contractual se ejecutara una obra que no puede ser utilizada o habitada por incumplimiento de los requisitos de construcción sismorresistentes establecidos por la Ley 400 de 1997 y del reglamento colombiano de construcción sismorresistente NSR10 ocasionando un perjuicio para los intereses de la entidad.

Se precisa que en virtud del contrato 079-BASPC08-2014 el grupo empresarial FARMAC SAS tenía las siguientes obligaciones contractuales

B. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: *En virtud del presente contrato el contratista se obliga a:* a) Prestar apoyo a la supervisión del contrato de manera técnica, oportuna y suficiente. b) Colaborar con la entidad para guiar al contratista constructor para el mejor éxito de las obras; c) verificar, cumplimiento del contrato y de las especificaciones en todas sus partes; d) atender y resolver toda consulta sobre la correcta interpretación de los planos o especificaciones y sobre errores u omisiones que se puedan contener; e) estudiar y recomendar los cambios sustanciales que se consideren convenientes o necesarios en los planos y en las especificaciones, y presentarlos a la consideración del EJÉRCITO NACIONAL BATALLÓN BASPCN8, f) revisar las decisiones sobre los cambios sustanciales en los planos y en las especificaciones técnicas se requieran; g) aprobar o rechazar los materiales y sus procesos de elaboración, previo el examen, análisis o ensayo que fuere del caso y controlar constantemente la calidad de aquellos; (. .) n) Velará por el cumplimiento de la ley 400 de 1997 -Normas Colombianas de Diseño y Construcción sismo resistente (NRS-2010), en lo referente a responsabilidades de

 CONTRALORÍA <small>GENERAL DE LA REPÚBLICA</small>	FALLO No: 0 0 0 0 1
	FECHA: 2 5 FEB 2019
	PÁGINA 33 DE 116
GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO	
GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO	
FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001 PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200	

los profesionales, materiales, métodos alternos de diseño y construcción, calidades y requisitos de los profesionales.

Antecedentes contractuales:

- 1 Como primero el 24 de diciembre de 2014 se celebró el contrato No. 079-BASPC08-2014, cuyo objeto fue: El contrato de prestación de servicios profesional para prestar apoyo a la supervisión, al mantenimiento y adecuación de instalación de instalaciones locativas y red LAN para poner en funcionamiento las oficinas del CENAC Armenia BASPC8.
- 2 El 13 de enero de 2015 se da inicio al contrato.
3. Dentro de la ejecución del contrato, se evidenciaron falencias en cuanto a las cantidades de obra, los planos estructurales, la edificación no estaba estandarizada, las cuales fueron advertidas por el contratista al supervisor del contrato, y al ordenador, lo cual comportó que se diera a la suspensión del contrato, el 19 de marzo de 2015.
- 4 El día 6 de octubre fue suscrita el acta de recibo a satisfacción del contrato por el cual se realiza informe en apoyo a la supervisión donde se manifiesta lo siguiente: "Se indica que es necesario que la entidad realice la verificación y recibo de las obras que se entregan por parte del contratista con el fin que haya claridad por parte de la entidad del Estado en calidad de la obra entregada y no se generen inconvenientes futuros respecto a garantías a las que no hubiere lugar" Es de señalarse que en dicha acta de recibo, la cual es suscrita por el supervisor de la entidad, el competente conforme a las disposiciones legales transcritas respecto al cumplimiento del objeto contractual.

Igualmente, precisó que la naturaleza jurídica del grupo empresarial FARMAQ SAS dentro de sus actividades principales no ejerce la interventoría.

Menciona el abogado que es importante que la Contraloría tenga presente que el contrato celebrado no fue de interventoría sino de apoyo a la supervisión. Por lo tanto, aclara en qué consiste la supervisión, en concepto de Colombia compra eficiente, frente a la pregunta de si la supervisión puede ser ejercida por un contratista, la misma menciona lo siguiente: 1. La supervisión de un contrato estatal consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero y contable y jurídico que sobre el cumplimiento del contrato es ejercido por la misma entidad, cuando no se requieren conocimientos especializados. 2 En la supervisión, el seguimiento es responsabilidad de la entidad estatal a diferencia de la interventoría en la que una persona natural o jurídica contratada por la entidad es quien adelanta el seguimiento, 3 De acuerdo con lo anterior, la supervisión solo puede ser ejercida directamente por un contratista a través de la celebración de un contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. Del mismo modo ante la pregunta puede entenderse que el denominado personal de apoyo alude a personas naturales o jurídicas contratadas bajo la modalidad de prestación de servicios que cuentan con la competencia (función reglada) para ejercer directamente la supervisión de contratos estatales o contrario sensu deben ser tenidas como personas externas que mediante actividades operativas o profesionales colaboran con la supervisión sin que tal colaboración sea considerada como el ejercicio directo de la supervisión de contratos estatales, en tanto, es función pública de resorte exclusivo de la administración.

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO

GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES
Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001
PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200

Ahora bien, teniendo las obligaciones necesarias en el contrato, no pudiendo ser contrarias al objeto del contrato, el cual era apoyo a la supervisión, por lo tanto, este apoyo no le da al grupo empresarial la calidad de gestor fiscal y por lo tanto no podría estar vinculado a este proceso. Es importante resaltar que en su momento se discutió sobre el alcance del contrato realizado con FARMAC y la entidad, en la cual la entidad se pronunció el día 26 de octubre de 2015, manifestando lo siguiente: Así mismo, no es posible que exista concurrencia entre la supervisión y la interventoría, por lo que no es posible que el contrato realizado por el grupo empresarial FARMAC para el apoyo a la supervisión cuente con las características de una interventoría en razón a que en el estudio previo donde se deben plantear cuales son las características de la interventoría que tiene un fin eminentemente técnico, realice además el seguimiento jurídico, técnico, financiero y contable del contrato, y para el caso de este contrato, no ocurrió, luego, es lógico que a la luz de la situación que la intención del batallón del cual usted hace parte, no es realizar el seguimiento a través de un tercero sino brindarle al personal nombrado como supervisor el apoyo en todas sus obligaciones. De las obligaciones plasmadas para el grupo empresarial FARMAC SAS que tenían por objeto prestar apoyo a la supervisión para el contrato de mantenimiento y adecuación de instalaciones locativas y red LAN para poner en funcionamiento las oficinas del CENAC Armenia en el BASPC8, se evidencia que si bien existen temas jurídicos, financieros, y económicos, también es cierto que estos no son principales sino de apoyo, por lo que dejar al contrato 078 de 2014, sin supervisor y pretender que el contrato de apoyo a la supervisión cumple con esta finalidad correspondería a una irresponsabilidad de mi parte, toda vez que las inquietudes mencionadas las cumple el supervisor...

En cuanto a la calidad de gestor fiscal, respecto al contrato de prestación de servicios, no tomaba decisiones, era simplemente apoyo.

(..) Inicialmente debe analizarse y concluirse que el Despacho en su estudio recae en la prohibición de un juicio de responsabilidad objetiva, en la que no individualiza a cada sujeto desde sus deberes funcionales y su actuar, sino que generaliza, al punto que el juicio conductual es el mismo para todos y cada uno de los presuntos responsables, se precisa sobre el concepto de culpa grave y simplemente se concluye su existencia, sin adecuarlo a las conductas objeto de reproche.

Como se observa, no existió juicio de responsabilidad subjetiva en el que se estudiaran las condiciones de tiempo, modo y lugar de cada uno de los imputados, cuáles eran sus deberes funcionales, cómo se incumplieron, y en qué sentido su actuar se traduce en negligencia grave al punto que no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios.

De esa manera, no se logra explicar el motivo por el cual el grupo empresarial FARMAQ SAS se encuentra vinculado en este proceso, pues si bien el supervisor del contrato fue desvinculado del mismo, sería lógico que el apoyo a dicha supervisión también lo estuviera



FALLO No: 00001

FECHA: 25 FEB 2019

PÁGINA 35 DE 116

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO

GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES
Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001
PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200

Asimismo, dentro de la cláusula 12 del contrato de prestación de servicios de apoyo a la supervisión se señala que la supervisión y control se ejercería a través del asesor de control interno, quien verificará la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto del contrato y durante la ejecución del mismo no se le inició al GRUPO EMPRESARIAL FARMAQ proceso sancionatorio alguno...

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 54 de la Ley 610 de 2000 solicito que se proceda a emitir fallo sin responsabilidad fiscal, pues se encuentran desvirtuadas las imputaciones formuladas en cuanto la inexistencia de los elementos de la responsabilidad fiscal..

ARGUMENTOS DE DEFENSA PRESENTADOS POR EL DR. JAVIER FERNANDO LANDINEZ MONTAÑEZ APODERADO DE LAS COMPAÑÍAS DE SEGUROS ALLIANZ SEGUROS S.A. Y AXA COLPATRIA S.A.:

Aquí el apoderado afirma entre otros

. La ley 610 de 2000 establece en su artículo 44 la forma en la que debe procederse la vinculación de las compañías de seguros al proceso de responsabilidad fiscal en donde debe hacerse indicación de los motivos por los cuales somos llamados o debemos ser vinculados al proceso.

. la sentencia C-468 de 2002 de la Corte Constitucional hizo énfasis en la vinculación de las aseguradoras como terceros civilmente responsables, concluyendo que su responsabilidad eventualmente está determinada por el riesgo amparado, es decir, que el ente de control no podrá apartarse de las estipulaciones pactadas en el contrato de seguros, por lo que en el caso que pretenda hacer efectiva alguna de las pólizas por las cuales se nos ha vinculado al proceso, deberá hacer plena aplicación de las normas comerciales y el contrato de seguros.

De otra parte, la Contraloría debe hacer mención expresa del momento en el que ocurre el hecho objeto del detrimento patrimonial que se investiga en el proceso y los amparos que se pretendan hacer efectivos, habrá que determinar si el cargo de los funcionarios son objeto de cobertura, el valor asegurado, el deducible pactado y los elementos que son propios del seguro. Tenemos que para el caso, la Contraloría no hizo mención de ninguno de esos elementos que son intrínsecos del contrato y por ello se evidencia una indebida vinculación de mis representadas, que estamos en virtud de un coaseguro, en donde el asegurador líder ya es conocido por ustedes.

Debemos hacer una precisión y es que los amparos de la póliza de manejo por los cuales se vincula a mis representadas, operan por ocurrencia, es decir que este contrato de seguro ampara los hechos que han acaecido en vigencia de la póliza En el caso concreto una vez analizado el auto de apertura, se encuentra que el hecho generador de la vinculación de las pólizas expedidas por QBE seguros y los coaseguros, es el 6 de octubre de 2015, fecha en la cual se suscribió el acta de recibo a satisfacción del contrato de mantenimiento y adecuación que es conocido por el Despacho, por lo que la Contraloría debe proceder a la desvinculación de la póliza de manejo 000706237137 expedida el 4 de enero de 2016, pues solo cubre hechos

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO

GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES
Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001
PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200

acaecidos dentro de la vigencia, de acuerdo al artículo 1073 del Código de Comercio y en ese sentido tenemos que no resulta procedente tener vinculada a la aseguradora

El auto de apertura tampoco hace relación concreta, respecto a las pólizas en las que figura ALLIANZ SEGUROS y AXA COLPATRIA pues esta misma póliza puede ser afectada en otro proceso de responsabilidad fiscal y es conocido también que si se efectúan pagos con cargo a la póliza, habrá necesariamente que determinarse si aún se cuenta con valor disponible del valor asegurado de la cobertura que se pretende hacer efectiva.

El abogado manifiesta que en el presente caso se presenta una responsabilidad objetiva como también lo han aducido sus colegas respecto de los encartados fiscales, por cuanto no se establece de forma concreta y cierta, cuáles fueron los actos u omisiones que son reprochables y que son calificados a título de culpa grave.

Así mismo, que para este caso se encuentra frente a un eventual daño fruto de una gestión culposa de carácter leve o levísimo, la cual no puede estar presente para determinar una responsabilidad fiscal en el ordenamiento jurídico; por lo tanto se deberá probar la culpa grave o el dolo y que de acuerdo a sentencia del Consejo de Estado, para determinar su existencia, no se debe limitar a las definiciones del Código Civil, sino que deben tenerse en cuenta las características particulares del caso, que deben armonizarse con los artículos 6 y 91 de la Constitución, analizarse los manuales de funciones y así mismo tener en cuenta otros conceptos como la buena o la mala fe y que no cualquier actuación permite deducir responsabilidad del agente estatal o particular en ejercicio de funciones públicas.

Menciona que no se ha probado en qué medida los implicados tienen responsabilidad, teniendo en cuenta que la obra fue recibida a satisfacción conforme al informe de la firma de supervisión del contrato, pues hace énfasis en cuál es el papel de la supervisión y la interventoría, resaltando su función y concluye que en lo atinente a la póliza de manejo por ellos expedida, la 000705407955 y 000706237137, la Contraloría en esta actuación administrativa y de acuerdo a las condiciones generales del contrato de seguro, deberá demostrar más allá de toda duda, que existe una actuación u omisión que tipifica un delito contra la administración pública para que en efecto se pueda hacer efectiva la cobertura de las aseguradoras y que de momento el auto de apertura e imputación no es claro respecto a estas conductas y en ese sentido no se dan los presupuestos pactados en el contrato de seguro para hacer efectivas las pólizas de manejo

Finalmente aduce que tampoco tiene claro que se configuren los elementos de la responsabilidad fiscal puesto que no se ha demostrado en cifras reales y concretas cuál es el daño que ha sufrido la entidad afectada y por ello solicita la desvinculación de sus representadas.

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO

GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES
Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001
PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200

ARGUMENTOS DE DEFENSA PRESENTADOS POR LA DRA. CAROLINA GÓMEZ GONZÁLEZ APODERADA DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS QBE SEGUROS S.A.:

... Como se puede observar, para que sea posible la imputación de responsabilidad fiscal no es suficiente con que se verifique la existencia de un detrimento patrimonial, sino que el mismo debe derivarse de un comportamiento calificado y no de cualquier olvido o descuido, sino que se requiere probar con rigurosidad la infracción directa de la Constitución o de la Ley.

En el caso en concreto, encontramos como después de realizar un proceso de selección adecuado y sujeto a la Ley y las necesidades particulares de la entidad, se suscribió el contrato de mantenimiento y adecuación No. 078-BASPC8-2014, entre el Batallón de ASPC No 08 "CACIQUE CALARCÁ" y la firma RIMARCO SAS, que tenía por objeto el "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES LOCATIVAS Y RED LAN PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO LAS OFICINAS DEL CENAC ARMENIA EN EL BASPC8", por valor de \$585.200.000.00, el cual se ejecutó a cabalidad, no obstante, y sea dicho de paso, el hecho que el contratista eventualmente haya incumplido con sus obligación no es óbice para endilgar responsabilidad fiscal a los funcionarios del batallón, pues ni esa entidad ni ninguna otra o incluso un particular están exentos que ese contratista que de buena fue seleccionado o contratado, no cumpla con sus obligaciones, es parte del aleas del contrato, lo que permite desvirtuar la existencia de culpa grave o dolo por parte de dichos funcionarios, que se ajustaron a la Ley y a los manuales de contratación para seleccionar al contratista, por lo que estamos frente a una eventual controversia contractual por un posible incumplimiento del contrato, pero no frente a un acto que derive responsabilidad fiscal y mucho menos que el mismo le sea imputable a algún funcionario del asegurado, no siendo procedente siquiera su imputación por no estar acreditados los elementos ya referenciados.

Por lo tanto, al tratarse de una controversia contractual la misma se debe tramitar ante el Juez natural del contrato, y no en un proceso de responsabilidad fiscal, como en efecto sucedió, pues como es de conocimiento del Despacho, en las instalaciones de la entidad se llevó a cabo procedimiento administrativo sancionatorio por estabilidad de la obra que culminó con la afectación de la póliza que amparaba el contrato.

...

SE TRATA DE UNA CONTROVERSIDAD CONTRACTUAL QUE DEBE RESOLVERSE CON BASE EN LA PACTADO EN EL CONTRATO Y EN LA LEY POR LO QUE ESTAMOS FRENTE A UNA AUSENCIA DE COBERTURA DEL EVENTO EN LAS PÓLIZAS DE MANEJO PARA ENTIDADES OFICIALES NO. 000705407955 Y 000706237137

Qué ampara la póliza.

Amparar los riesgos que impliquen menoscabo de los fondos y bienes nacionales del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y SUS UNIDADES EJECUTORAS



FALLO No: 00001

FECHA: 25 FEB 2019

PÁGINA 38 DE 116

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO

GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES
Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001
PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200

(Direcciones, Divisiones o Batallones según sea el caso), causados por acciones u omisiones de sus empleados que incurran en los delitos contra la Administración Pública o en alcances fiscales por incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, incluyendo el costo de la rendición de cuentas en casos de abandono del cargo o fallecimiento del empleado o funcionario, y/o contratistas (Contratados directamente o por terceras personas) y/o funcionarios de firmas especializadas siempre y cuando el hecho sea imputable a uno o varios de ellos determinados. Este seguro operará por ocurrencia.

A quienes ampara la póliza:

Teniente coronel FERNANDO DE JESUS CALLE MORENO y EDISON WILMAN MANCHEGO OROZCO.

Ahora en gracia de discusión que se considere que RIMARCO es gestor fiscal, deberá entonces concluirse que las pólizas de manejo no tienen cobertura, por las siguientes razones:

De acuerdo con lo establecido en el amparo básico de las pólizas denominadas de "Manejo para Entidades Oficiales" No. 000705407955 y 000706237137, los riesgos cubiertos son única y exclusivamente aquellos que impliquen menoscabo de los fondos y bienes nacionales del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y SUS UNIDADES EJECUTORAS (Direcciones, Divisiones o Batallones según sea el caso), causados por acciones u omisiones de sus empleados que incurran en los delitos contra la Administración Pública, lo cual como se indicó anteriormente no ha ocurrido, pues si algún juicio de reproche se puede hacer frente a la ejecución del contrato suscrito con RIMARCO, el mismo no le es atribuible o imputable a los "empleados" del asegurado, por lo que la póliza carece de cobertura por no estar dados los presupuestos fijados en la misma, ya que RIMARCO es una persona jurídica de derecho privado, constituida como una sociedad por acciones simplificada (SAS), con autonomía e independencia del asegurado (MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y SUS UNIDADES EJECUTORAS), no siendo la responsabilidad de ese tipo de personas la amparada en la póliza.

En las condiciones Generales de la póliza, se lee lo siguiente:

"POLIZA MATRIZ GLOBAL DE MANEJO PARA ENTIDADES OFICIALES

...

CONDICION SEGUNDA - EXCLUSIONES:

ESTA PÓLIZA NO CUBRE LAS PÉRDIDAS PROVENIENTES DE CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES EVENTOS:

B MERMAS, DIFERENCIAS DE INVENTARIOS Y DESAPARICIONES O PÉRDIDAS QUE NO PUEDAN SER IMPUTABLES A UN SERVIDOR PÚBLICO DETERMINADO".

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO

GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES
Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001
PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200

Ya que como se expuso a lo largo del proceso de responsabilidad fiscal, dicha póliza excluye expresamente las pérdidas que no puedan ser imputables a un funcionario específico, y como quedó establecido en el Auto de Imputación, y como consta en las pruebas obrantes en el expediente, hasta el momento no ha sido posible establecer quien o quienes fueron los responsables directos del eventual incumplimiento de las obligaciones que le es imputable al contratista RIMARCO pero no a los funcionarios del batallón, razón por la cual estamos frente a un evento expresamente excluido de la cobertura.

...

Por lo tanto, sin asomo de duda se puede concluir que de acuerdo con las normas que regulan el contrato de seguro y del texto contractual aplicable a la póliza, el cual es ley para las partes, al no contener expresamente las condiciones generales que fueron aportadas al proceso, la cobertura frente a los detrimentos que pudiera sufrir la administración por los incumplimientos contractuales, debe concluirse que los mismos no están cubiertos y no le atañe ninguna responsabilidad a QBE SEGUROS S.A. ni a las coaseguradoras.

AUSENCIA DE COBERTURA POR TRATARSE DE EVENTOS OCURRIDOS POR FUERA DE LA VIGENCIA TÉCNICA DE LA PÓLIZA DE MANEJO PARA ENTIDADES OFICIALES NO. 000705407955 y 000706237137

De la información obrante en el plenario, encontramos que el proceso de selección y contratación de RIMARCO se llevó a cabo en el año 2014, momento en el cual la póliza no había iniciado su cobertura estando por lo tanto por fuera de su vigencia técnica, que de acuerdo con lo plasmado en la caratula, iniciaron en la POLIZA DE MANEJO PARA ENTIDADES OFICIALES No. 000706237137 desde 2016/01/01 hasta 2016/12/31 y en POLIZA DE MANEJO PARA ENTIDADES OFICIALES 000705407955 desde 2015/01/01 hasta 2015/12/31, no siendo por tanto trasladable al seguro ningún riesgo que no se haya materializado durante dicha vigencia, al respecto el Código de Comercio establece lo siguiente:

ARTÍCULO 1057 <TÉRMINO DESDE EL CUAL SE ASUMEN LOS RIESGOS>. En defecto de estipulación o de norma legal, los riesgos principiarán a correr por cuenta del asegurador a la hora veinticuatro del día en que se perfeccione el contrato

De forma errada en nuestra opinión la Contraloría considera que el hecho objeto de investigación ocurrió el 6 de octubre de 2015 con el recibido de la obra y como se indicó por parte de la entidad RIMARCO las eventuales fallas presentadas en la obra se deben a errores en la planeación.

LÍMITE DE LA COBERTURA PACTADA EN LA PÓLIZA MANEJO PARA ENTIDADES OFICIALES NO. 000705407955.

En el caso en que se emita fallo con responsabilidad fiscal y contrario a la expuesto la Honorable Contraloría considere que mi representada en condición de asegurador debe asumir algún valor, se debe tener en cuenta que su responsabilidad se limita a su participación del 21.5% en virtud del coaseguro que se explicó previamente, que

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO

GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES
Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001
PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200

equivale al 21.5% del valor asegurado en la póliza, porcentaje que deberá ser aplicado al valor total de la pérdida, todo ello, de acuerdo con el contenido de la póliza y con fundamento en el artículo 1079 del Código de Comercio...

ARGUMENTOS DE DEFENSA PRESENTADOS POR EL DR. JORGE MARIO ARISTIZÁBAL GIRALDO, APODERADO DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.:

...

Sea lo primero manifestar que mi representada en calidad de coaseguradora de la aseguradora líder QBE se acoge en su integridad a los descargos realizados por ésta y solicito que estas precisiones sean consideradas al momento del fallo:

- 1. De acuerdo con lo argumentado por la compañía líder, por la modalidad de la póliza no hay cobertura para los hechos por los que se está adelantando este proceso investigativo toda vez que la fecha de vigencia de la póliza es posterior a la fecha de configuración del posible daño*
- 2. El coaseguro contempla unos porcentajes de participación de las compañías de seguros, para Mapfre seguros es del 11,9 %.*
- 3. Cualquier fallo con responsabilidad no puede ir más allá de ese porcentaje y en la medida en que cualquiera de las aseguradoras realice cualquier pago indemnizatorio con cargo a la vigencia de la póliza, ese límite asegurado que fue pactado se va disminuyendo en tal proporción.*

El apoderado realiza una exposición de los antecedentes administrativos y contractuales del proceso, solicitando una contextualización del apoyo técnico respecto del proyecto inicial por valor de 900 millones de pesos, pues en este caso solo está ejecutada la primera etapa y no se puede juzgar como un incumplimiento

Precisa además, que el informe de la jefatura de ingenieros del que se les corrió traslado, contempla unas condiciones muy distintas a las establecidas por el apoyo técnico, donde el primero determina que si bien la infraestructura no cumple con la norma con un recalde cumpliría con la misma y eso no fue lo que manifestó el ingeniero Aristizábal.

Aduce que los señores Calle Moreno y Manchego Orozco actuaron de buena fe bajo el esquema de la entidad que fue contratada para el apoyo y que cumplieron con su obligación de verificar el cumplimiento del contrato, aspecto muy distinto de la calidad y estabilidad de la obra, que le correspondía a la sociedad FARMAQ SAS a quien se contrató para ello, por contar con los conocimientos técnicos necesarios para realizar el seguimiento y supervisión del contrato de obra civil, pues hasta donde se conoce los tenientes coroneles no eran ingenieros.

Indica que dentro de las consideraciones del auto de apertura no existe claridad en los cargos que se imputan, habida cuenta que no se señalan las conductas expresas en las que han incurrido los tenientes coroneles investigados, que se

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO

GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES
Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001
PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200

califiquen como un delito contra la administración pública y que si se llegare a demostrar que éstos actuaron con culpa grave, esta conducta está catalogada como uno de los actos inasegurables de acuerdo con el Código de Comercio y por lo tanto, solicita la desvinculación de su representada.

ARGUMENTOS DE DEFENSA PRESENTADOS POR LA DRA. LAURA ALEJANDRA DUQUE HERNÁNDEZ APODERADA SUSTITUTA DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS LA PREVISORA S.A.:

Indica que las pólizas por las que vinculan al presente proceso a su representada corresponden a un coaseguro, donde la compañía líder es QBE seguros y que el porcentaje de participación de su representada es del 21.5000039% correspondiente a 215.000.039 millones, por lo que en el caso de proferirse un fallo de responsabilidad fiscal, deberá tenerse en cuenta que La Previsora S.A. responderá únicamente hasta el porcentaje del valor asegurado, previo descuento del deducible pactado o descuentos hechos por otros pagos afectando la misma póliza

Hace alusión al artículo 6 de la Ley 610 de 2000 y a la Sentencia SU 620 de 1996, la cual establece que para la estimación del daño, debe acudirse a las reglas generales aplicables en materia de responsabilidad, por lo tanto, entre otros factores que han de valorarse debe considerarse que aquél ha de ser cierto, especial, anormal y cuantificable con arreglo a su real magnitud. Indica que en el proceso de determinación del daño por consiguiente ha de establecerse no solo la dimensión de este, sino que debe examinar también si eventualmente a pesar de la gestión fiscal irregular se obtuvo o no algún beneficio; así dentro del caso en cuestión se tiene que hasta el momento no se encuentra probado que se obtuvo algún beneficio por parte de los presuntos responsables, más cuando se considera que actuaron en ejercicio de sus funciones y acorde al principio de buena fe, el cual es un principio rector determinante en el contrato de seguros y en caso de demostrarse lo contrario deben ser desvinculados.

ARGUMENTOS DE DEFENSA PRESENTADOS POR EL DR. ANDRÉS MAURICIO VÁSQUEZ CASTAÑO, APODERADO DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS LIBERTY S.A.:

Afirma que en el auto de apertura se mencionan las pólizas 2448868 y 2448854, las cuales contemplan el amparo de cumplimiento y otros valores que no hacen parte de este proceso como los amparos de estabilidad de la obra y el pago de salarios y prestaciones. Aduce que en caso de coexistencia de seguros deberá estarse a lo dispuesto en el artículo 1092 y ss del Código de Comercio. Indica también, que hay varios presuntos responsables que no están amparados por las pólizas que vinculan a su representada y por tanto, para ellos no existiría cobertura pues las mismas son solo para los afianzados.

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO

GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES
Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001
PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200

Finalmente, manifiesta que en virtud del compromiso adquirido por el contratista de ajustarse al informe técnico de la jefatura de ingenieros y realizar el reforzamiento estructural y ajustarse a la parte técnica, se desvirtúa el daño y se demuestra la buena fe de este durante la ejecución del contrato, por lo que solicita se declare fallo sin responsabilidad fiscal y se desvincule a su prohiada.

AUDIENCIA DE DECISIÓN - ALEGATOS DE CONCLUSIÓN:

En la segunda sesión de la Audiencia de Decisión surtida el 28 de enero de 2019, los implicados presentaron sus alegatos de conclusión, así:

Dr. JUAN SEBASTIÁN HENAO GARZÓN como apoderado del TENIENTE CORONEL FERNANDO DE JESÚS CALLE MORENO, expuso:

... Se ha tenido a lo largo de este trámite que se ha realizado un peritaje técnico a las instalaciones locativas en donde se pondrá en funcionamiento las oficinas del CENAC Armenia en el BASPC-8, arrojando errores atribuibles a la empresa contratista RIMARCO S A. Lo que ha dejado sentado lo siguiente:

- 1. Que existe una inversión en infraestructura que no puede desconocer este cuerpo colegiado.*
- 2. Que una cosa es la inversión realizada, y otro asunto es el hecho de que se considere inservible, pues, encontrándose vigencias futuras por ejecutar dentro del presupuesto destinado específicamente para el "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES LOCATIVAS Y RED LAN PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO LAS OFICINAS DEL CENAC ARMENIA EN EL BASPC 8" se debe tener entonces, que la obra no se encuentra en un cien por ciento de ejecución, lo que a todas luces no puede determinarse de manera inmediata como un detrimento, por el contrario, en este momento obedece a una situación que generaría una controversia contractual directamente entre LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL y la sociedad RIMARCO S A*
- 3. Si bien, la contraloría debe velar por el cuidado de la inversión pública, dicha facultad no puede convertirse en una talanquera jurídica que impida la continuación y ejecución de la inversión pública.*

Por otro lado, tampoco se pude perder de vista, que la empresa RIMARCO - sociedad contratista- y de acuerdo a pentaje técnico, amén de no haber culminado su obra, NO CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE LANORMA NSR 10, y bajo la óptica de las oportunidades, ha tenido, iniciativas infructuosas en donde se ha podido evidenciar que sus trabajos constructivos tornan el inmueble objeto de peritaje como "inservible o inutilizable", y es que no se necesita ser ingeniero para observar que RIMARCO, en un afán inmediato de solucionar el impase presentado aún sin los recursos pendientes de desembolso para el efecto, ha dejado pendiente una serie de detalles técnicos que lograrían que la obra se adecúe a la norma NSR 10.

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO

GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES
Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001
PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200

El razonamiento anterior implica que:

- a *No existe desde la óptica de la responsabilidad fiscal, un nexo de causalidad entre una acción u omisión atribuible a mi cliente, con el presunto hecho dañoso que generaría detrimento al Estado, y se subraya la palabra "generaría" porque en este momento el daño es potencial, debido a que existe una obra inconclusa que precisamente solo podría cumplir con la norma NSR-10 al momento de ser culminada. Otra cosa, es que haya sido recibida como inconclusa y ese recibimiento se hubiere hecho por persona distinta a mi prohijado, rompiéndose también cualquier nexo de causalidad en ese sentido.*
- b *Mi mandante cumplió a cabalidad con la etapa precontractual que no ha sido el problema jurídico objeto de debate, sino, la ejecución de un presupuesto público en donde nunca tuvo injerencia indirecta, ni directa.*
- c *Se resalta: Que el presente asunto, debió tener primero que todo, una declaratoria de caducidad por parte de la entidad -EJERCITO NACIONAL- que hubiere podido realizar este trámite, previo a una revisión de un detrimento que no se ha dado, pero que puede darse por responsabilidad directa del contratista RIMARCO S.A.*

Afirma el apoderado que no concurren los elementos de la responsabilidad fiscal en su prohijado y funda su tesis en:

1. La materialización del daño.
2. Improcedencia de atribuir gestión fiscal para la fecha de los hechos investigados.
3. Falta de nexo de causalidad.

Por último, cabe señalar que si bien el artículo 119 de la ley 1474 de 2011 establece que todos los intervinientes en la actividad contractual deben asumir solidariamente la responsabilidad fiscal derivada de una actuación en la que se evidencie detrimento patrimonial, no puede tampoco, dársele desde la óptica de la solidaridad un alcance a las gestiones desarrolladas por mi cliente, independientemente del análisis del dolo o culpa, pues el nexo de causalidad atribuible a mi cliente, no es directo ni relevante con desembolsos de dinero, supervisión, ejecución directa de obra y recibo de la misma.

Por lo anterior, solicito respetuosamente al cuerpo colegiado que en lo que a mi cliente respecta:

PRIMERO: Profiera un fallo sin responsabilidad fiscal, con los efectos jurídicos pertinentes

SEGUNDO: En caso de declararlo responsable fiscalmente, solicito de la manera más respetuosa, compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación, en contra de la empresa contratista, que es quien, con su falta de seriedad en la ejecución de la obra, ha generado este impase que tiene efectos jurídicos y patrimoniales, y quien es la única llamada a solucionarlo..

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO

GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES
Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001
PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200

**ALEGATOS DE CONCLUSIÓN PRESENTADOS POR EL SEÑOR TENIENTE
CORONEL EDISON WILMAN MANCHEGO OROZCO:**

Su apoderada de confianza Dra. MARITZA DEL SOCORRO QUINTERO JIMÉNEZ expuso a favor de su prohijado los siguientes argumentos:

... De acuerdo con los descargos se plantea qué cuestiona la Contraloría: ¿El cambio del contrato de mantenimiento por construcción?, ¿no se logró satisfacer el objeto de la contratación?, ¿el objeto contractual no se cumplió?, ¿la construcción no puede ser utilizada o habitada por incumplir los requisitos de las normas sismo resistentes? Dichas situaciones fueron las que determinaron el auto de imputación de cargos?

Ya para efectos de los alegatos de conclusión se debe tener en cuenta la carga probatoria, qué fue lo que se probó y qué fue lo que no se probó. De acuerdo con los artículos 22 y ss de la Ley 610 de 2000 y 1474 de 2011. ¿Entonces qué quedó probado? Cómo fueron los antecedentes de este proceso, el origen, qué recursos se presentaron para la ejecución de la obra, pues el presupuesto y la ejecución que se tenía inicialmente era de 984 millones y en los estudios de mercado todas las cotizaciones que se tenían para iniciar el proceso contractual eran de más de 900 millones de pesos y en los estudios previos desarrollados por TC JHON RODRÍGUEZ PARRA de fecha noviembre de 2014 se menciona que el proyecto requiere partida especial para la vigencia de 2014, lo que hace evidenciar que el proceso se iba a desarrollar por etapas, con un presupuesto y unas cantidades por 984 millones, manifestándose que los materiales para instalación de redes serían suministrados conforme a las cantidades y especificaciones mínimas requeridas. Esto quedó probado, que la obra quedó inconclusa porque no había presupuesto y fue hecha por etapas. Entonces lo que hizo mi cliente fue ajustar las especificaciones técnicas, las cantidades de obra y el presupuesto a los 580 millones. Téngase presente que el objeto de la obra era mantenimiento y adecuación de instalaciones locativas y red LAN para poner en funcionamiento las oficinas del CENAC Armenia en el BASPC8, de acuerdo a los estudios previos y la propuesta adjudicataria, los cuales decían que era por etapas, lo cual indica que la obra no iba quedar terminada en cuanto a la integridad del proyecto.

En esta época cuando se planeó el contrato y se adjudicó, no se encontraba mi defendido como director del CENAC, ya cuando él llega encuentra este problema y entonces qué hizo?, buscar una persona técnica, unos expertos, que era la jefatura de ingenieros, quienes conceptuaron respecto al estado de la obra, por lo que mi representado decidió suspender el contrato y solicitar más presupuesto para terminar la obra como estaba proyectada, pero ¿qué pasó? Nunca le dieron la plata, entonces le tocó ajustar el presupuesto hasta el monto de los 585 millones, para dejar la misma por lo menos en una primera etapa, suscribiendo un modificadorio que se ajustó a las realidades de la obra.

el supervisor de la obra indica en su informe que la obra no fue terminada en su totalidad ya que el recurso asignado no alcanzó y el existente fue ejecutado en su totalidad por RIMARCO y en ese sentido el 6 de octubre fue suscrita el acta de recibo

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO

GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES
Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001
PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200

a satisfacción del contrato, que mi mandante suscribió por encontrarse precedida del siguiente concepto del representante legal del grupo empresarial FARMAQ: «En virtud de lo anterior solicitamos se conceda el visto bueno, a la culminación y realización de las actividades adelantadas por RIMARCO y la entrega a entera satisfacción de la debida y oportuna ejecución contractual, para no alterar, ni retardar las acciones subsiguientes de liquidación y pago total del contrato». Entonces esto también quedó probado, que no existió daño patrimonial pues se ejecutó lo que se contrató. Posterior a la desvinculación de mi defendido, las nuevas directivas, iniciaron un proceso sancionatorio contractual aduciendo un problema de estabilidad de la obra, por lo que mediante Resolución 203 del 3 de diciembre de 2018 confirmada mediante Resolución 212 del 26 de diciembre de 2018, se ordena lo siguiente: «Declarar la ocurrencia del siniestro por el riesgo de estabilidad de la obra y cuantifican el perjuicio por 541 millones». Bajo este entendido, al existir un proceso sancionatorio contractual con identidad de objeto no puede cruzarse con el proceso de responsabilidad fiscal. Yo estoy defendiendo al coronel Manchego por el modificadorio y el acta de recibo, pero sobre los mismos hechos hubo un siniestro y una cuantificación de unos perjuicios, entonces cuando hay un incumplimiento contractual ya digamos no existe el daño queda subsumido en el siniestro de la póliza de estabilidad de la obra, por lo tanto, la Contraloría no podría actuar, quedando desvirtuadas las imputaciones.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN DEL CONTRATISTA RIMARCO SAS:

A nombre de RIMARCO SAS la Dra. **PAULA ANDREA ADAMES PASTRANA** presentó los alegatos de conclusión, esbozando:

Inicialmente haré un relato de lo que quedó y no probado dentro del proceso, por lo tanto, manifiesto que no quedaron probados los elementos de la responsabilidad fiscal, que debía realizar a la Contraloría.

En primer lugar quedó probado todos los antecedentes contractuales, quedó debidamente probado que existió una falta de planeación por parte de la entidad contratante, y de esta manera que mi representada celebró un contrato de obra con un presupuesto no acorde a las actividades realizadas, lo que comportó que la obra se encuentre inconclusa por ausencia de presupuesto oficial suficiente, pues la obra si bien es funcional, no podrá ponerse en funcionamiento, pues el presupuesto no fue suficiente.

A la par con este proceso, se llevó proceso sancionatorio por la entidad afectada, el cual tiene los mismos hechos y el mismo perjuicio para la entidad, por tanto, no existe el daño pues ya existe un pronunciamiento al respecto.

Ahora, lo que no quedó probado dentro de los informes técnicos fue a cuanto ascendía el valor para que la obra se pudiera poner en funcionamiento pues se determinó que se requerían determinadas especificaciones técnicas, pero no se señaló el presupuesto requerido. Lo anterior por cuanto para que se cumpliera la norma NSR10 era necesario un incremento de presupuesto, situación que omitió el batallón. Que como contratista RIMARCO se comprometió a realizar unos recalces y efectivamente los hizo y que la obra tuvo un recibo a satisfacción.

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO

GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES
Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001
PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200

Es importante enfatizar que no existe prueba técnica que demuestre que las actividades ejecutadas por la empresa presentan algún tipo de daño o deterioro imputable al contratista, pues fueron desarrolladas de manera adecuada y recibidas a entera satisfacción desde el 6 de octubre de 2015 y la entidad no dispuso el presupuesto necesario para completar los acabados mínimos que permitieran restringir el acceso de agentes naturales que posiblemente causaran algún deterioro.

Indica que aportará las resoluciones que declaran el siniestro de estabilidad de la obra expedidas en el proceso sancionatorio contractual, por lo cual, ya existe un pronunciamiento al respecto y aduce que la sentencia del Consejo de Estado Sección Primera M.P. María Claudia Rojas Lazo, estableció que no se puede hablar de proceso de responsabilidad fiscal, ni de daño cuando se trata de un incumplimiento contractual pues el perjuicio del contrato se mitiga haciendo efectivas las pólizas de seguros y que de declararse una responsabilidad fiscal se constituiría en un enriquecimiento sin causa.

Menciona que en este proceso se está violentando el principio del non bis in ídem, pues se están adelantando dos actuaciones por los mismos hechos, que persiguen la misma finalidad, una de naturaleza sancionatoria y otra de carácter fiscal.

Afirma que no existió una conducta dolosa o gravemente culposa, pues no hubo un juicio de responsabilidad subjetiva, no se estableció cuáles fueron las obligaciones incumplidas, ni se determinó la intención, por tanto, opera el principio *nullum crimen sine culpa*. Así mismo, tampoco se acreditó la calidad de gestor fiscal de RIMARCO, aquí hace alusión a las normas de la Ley 610 de 2000 que precisan el proceso de responsabilidad fiscal y la gestión fiscal y que de acuerdo con estas definiciones sus actividades no se enmarcan en las mismas, pues en ningún momento administró o gestionó recursos públicos. Ellos solamente se limitaron a cumplir con un presupuesto asignado como se detalla en el acta de recibo final de la obra y se les pagó por una obligación cumplida.

Concluye que se encuentran frente a una ausencia de nexo causal, pues no existe ninguna acción y omisión que haya causado RIMARCO, no existe detrimento, ni culpabilidad, ni la calidad de gestor fiscal

Por último indica:

1. Existió una falta de planeación por parte de la entidad contratante, hubo deficiencias en el presupuesto, en la entrega del paquete técnico, mora en los pagos de anticipo.
2. Inexistencia de calidad de gestor fiscal.
3. Inexistencia del daño fiscal.

 CONTRALORÍA <small>GENERAL DE LA REPÚBLICA</small>	FALLO No: 00001
	FECHA: 25 FEB 2019
	PÁGINA 47 DE 116
GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO	
GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO	
FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001 PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200	

4. El informe de la Contraloría solo se desarrolló mediante visitas y no se han empleado estudios de vulnerabilidad sísmica, por tanto realizó una serie de objeciones ante el mismo.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN DEL GRUPO EMPRESARIAL FARMAQ SAS, CONTRATISTA CON FUNCIONES DE APOYO A LA SUPERVISIÓN.

Inicia sus alegatos el Dr. ROBERTO ERIC PRIETO CASALLAS apoderado del grupo empresarial haciendo alusión a los antecedentes contractuales que dieron pie a su vinculación a la presente causa y a las consideraciones del despacho para proferir la apertura e imputación de responsabilidad fiscal, aduciendo la importancia que reviste para que la Contraloría analice que el contrato celebrado no fue de interventoría, la cual tiene un fin eminentemente técnico, sino de apoyo a la supervisión, donde las actividades de monitoreo y seguimiento técnico, administrativo, contable y jurídico que les correspondía, no eran principales sino de apoyo y recuerda que dentro del material probatorio existe oficio del supervisor designado por el batallón, mediante el cual solicitó ser relevado de tal función, frente a lo que se le indicó que era éste quien debía desempeñar las mismas, pues la intención de la entidad no era realizar el seguimiento a través de un tercero, sino brindarle al personal nombrado como supervisor el apoyo en todas sus obligaciones.

Aduce el apoderado que quedó plenamente probado que no hay daño patrimonial por la existencia de un proceso sancionatorio contractual en el cual se profirió la Resolución 206 del 3 de diciembre de 2018 confirmada mediante Resolución 212 de 2018, la cual dispone en su artículo primero: *«declarar la ocurrencia del siniestro por el riesgo de estabilidad y calidad de la obra para garantizar la correcta ejecución de obras en cuantía equivalente al 20% del valor total del contrato por un término de cinco años, contados a partir del acta de recibo final a satisfacción»*.

Afirma que en este proceso se señaló cuantificar los perjuicios causados con el siniestro por el riesgo de estabilidad de obra por valor de QUINIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON 13 CTVS M-CTE (\$541.803.439,13) el cual deberá ser actualizado a valores presentes. En virtud de lo anterior trae a colación la sentencia del Consejo de Estado Sección Primera M.P María Claudia Rojas Lazo, donde se establece que no se puede hablar de proceso de responsabilidad fiscal, ni de daño cuando se trata de un incumplimiento contractual y que de declararse una responsabilidad fiscal se constituiría en un enriquecimiento sin causa.

Arguye que en el presente caso no están determinados los elementos de la responsabilidad fiscal, pues reitera no existe un daño, que en cuanto a la calidad de gestor fiscal, respecto al contrato de prestación de servicios, FARMAQ SAS no tomaba decisiones, era simplemente apoyo y que la conducta a ellos atribuida no

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO

GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES
Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001
PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200

puede ser calificada a título de culpa grave, pues el contrato celebrado no fue de interventoría sino de apoyo a la supervisión.

Al respecto trae a colación en qué consiste la supervisión, en concepto de Colombia Compra Eficiente, frente a la pregunta de si la supervisión puede ser ejercida por un contratista, la misma menciona lo siguiente: «1. La supervisión de un contrato estatal consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero y contable y jurídico que sobre el cumplimiento del contrato es ejercido por la misma entidad, cuando no se requieren conocimientos especializados. 2. En la supervisión, el seguimiento es responsabilidad de la entidad estatal a diferencia de la interventoría en la que una persona natural o jurídica contratada por la entidad es quien adelanta el seguimiento, 3. De acuerdo con lo anterior, la supervisión solo puede ser ejercida directamente por un contratista a través de la celebración de un contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. Del mismo modo ante la pregunta puede entenderse que el denominado personal de apoyo alude a personas naturales o jurídicas contratadas bajo la modalidad de prestación de servicios que cuentan con la competencia (función reglada) para ejercer directamente la supervisión de contratos estatales o a contrario sensu deben ser tenidas como personas externas que mediante actividades operativas o profesionales colaboran con la supervisión, sin que tal colaboración sea considerada como el ejercicio directo de la supervisión de contratos estatales, en tanto, es función pública de resorte exclusivo de la administración.

Así mismo, indica que el grupo empresarial entregó los siguientes informes de apoyo a la supervisión, los cuales se encuentran dentro del presente proceso, así:

- Informe semanal del 13 al 18 de enero de 2015.
- Informe semanal de 19 al 24 de enero de 2015.
- Informe semanal del 26 al 31 enero de 2015
- Informe semanal del 2 al 7 de febrero de 2015.
- Informe semanal del 9 al 14 de febrero de 2015.
- Informe semanal del 16 al 21 de febrero 2015.
- Informe semanal del 9 al 13 junio de 2015.
- Informe semanal del 22 al 27 de junio de 2015.

Expresa que el grupo empresarial realizó todas las actividades a su alcance con el fin de cumplir con el objeto del contrato de apoyo a la supervisión, indicando que no se explica cómo el supervisor que era quien debía ejercer la supervisión directa no fue llamado a responder en este proceso.

 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	FALLO No: 00001
	FECHA: 25 FEB 2019
	PÁGINA 49 DE 116
GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO	
GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO	
FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001 PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200	

También hace alusión a las normas de la Ley 610 de 2000 que precisan el proceso de responsabilidad fiscal y la gestión fiscal y que de acuerdo con estas definiciones la gestión desarrollada por FARMAQ era muy limitada, pues se trató solo de un apoyo a la supervisión, por lo tanto, considera que se ha hecho un juicio de responsabilidad objetiva.

Finalmente indica que no existe nexo causal pues no hay detrimento al patrimonio y no se tiene la calidad de gestor fiscal.

Concluye:

- 1. Que hubo ausencia de planeación por parte de la entidad contratante.
- 2. Que hay inexistencia de la calidad de gestor fiscal por parte del grupo empresarial FARMAQ
- 3. Que hay inexistencia de daño patrimonial.

Solicita que de acuerdo con el artículo 54 de la Ley 610 se profiera fallo sin responsabilidad fiscal, toda vez que no existe prueba que conduzca a la certeza de uno o varios de los elementos que estructuran la responsabilidad fiscal.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN PRESENTADOS POR LA DRA. CAROLINA GÓMEZ GONZÁLEZ APODERADA DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS QBE SEGUROS S.A.:

En sus alegatos de conclusión se reafirma en los mismos argumentos de los descargos.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN PRESENTADOS POR EL DR. JORGE MARIO ARISTIZÁBAL GIRALDO, APODERADO DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.:

Es importante resaltar que mi representada fue vinculada al presente proceso bajo la condición de COASEGURADORA de la aseguradora QBE, compañía líder que expidió el seguro de MANEJO PARA ENTIDADES OFICIALES No. 000705407955 y que tanto MAPFRE SEGUROS, como las demás coaseguradoras, estamos sometidas a los términos y condiciones de dicho contrato de seguro, por tanto adherimos en su totalidad a las alegaciones expuestas por la apoderada de la aseguradora líder, las que proponemos como si fueran nuestras, solicitando al Despacho que sean acogidas en su integridad al momento de emitir el fallo. No obstante lo anterior y para complementar las alegaciones, haremos las siguientes precisiones:

En primer lugar, considero importante resaltar algunos aspectos encontrados dentro de la gran cantidad de sesiones en las que se llevó a cabo el debate probatorio.

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO

GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES
Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001
PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200

1. Si bien es cierto se evidenció un daño consistente en un detrimento patrimonial representado en una obra civil que al parecer no representa utilidad para la entidad contratante; también es cierto que, no se configura el elemento del nexo causal, entre el daño causado y la actuación desplegada por los funcionarios investigados dentro del presente proceso, a saber: Teniente Coronel Fernando de Jesús Calle Moreno y Teniente Coronel Edison Wilman Manchego Orozco; lo anterior por cuanto de los hechos narrados en el presente proceso, se puede verificar que los funcionarios antes relacionados cumplieron con los deberes exigidos por el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, tanto por haber contratado con la sociedad RIMARCO S.A.S. la construcción de una obra civil, atendiendo a la necesidad y a la disponibilidad presupuestal de la entidad estatal, para asumir el pago de la misma, como por haber realizado la revisión periódica del cumplimiento de dicho contrato, a través de la firma GRUPO EMPRESARIAL FARMAQ S.A.S., sociedad que finalmente le entregó a los funcionarios Batallón de ASP No. 8 "CACIQUE CALARCÁ" el **acta de recibo final de obra** y el **acta de recibo a satisfacción**, con base en lo cual procedió a pagarle a la sociedad RIMARCO S.A.S. la suma de \$541.803.439,13, según las órdenes de pago antes indicados.
2. En la versión libre brindada por los investigados se demostró que el contrato inicial costaba novecientos millones de pesos (\$ 950.000.000), pero que por falta de presupuesto solo se logró contratar obras que no incluían la totalidad del proyecto, reformándose en consecuencia la totalidad de las obras a realizar.
3. De todo lo expuesto en los descargos y en la práctica de pruebas se ha de concluir que el caso de autos corresponde a incumplimientos contractuales, en los que la conducta de los investigados no está comprometida, habida consideración que dentro de sus gestiones contractuales acataron las normas y procedimientos propios de la ley contractual y que en consecuencia, se advierte el hecho, iteramos, de un incumplimiento contractual.

Ahora bien, frente a la vinculación que se hace de la compañía MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A., en calidad de coaseguradora dentro de las pólizas de MANEJO PARA ENTIDADES OFICIALES No. 000705407955 y No. 000706237137 emitidas por la compañía de seguros QBE S.A., se hace imperioso explicar que las mismas amparan los riesgos que impliquen menoscabo de los fondos y bienes nacionales del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y SUS UNIDADES EJECUTORAS, causados por acciones u omisiones de sus empleados que se tipifiquen como delitos contra la Administración Pública, y para el caso que nos ocupa tenemos que, los funcionarios públicos investigados, se reitera, cumplieron con sus obligaciones legales tendientes a la verificación del cumplimiento del **CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN No. 078-BASPC8-2014** celebrado con la sociedad **RIMARCO S.A.S.** Asunto muy distinto que se debe analizar al interior del proceso que aquí nos ocupa, será el relacionado con la verificación de la calidad de los bienes y la estabilidad de la obra contratada, la cual como se explicó, estuvo a cargo de la firma **GRUPO EMPRESARIAL FARMAQ S.A.S.**, sociedad que fue contratada por contar con los conocimientos, idoneidad y experiencia necesarios para realizar el seguimiento y supervisión del contrato de obra civil.

En cuanto a las consideraciones de la responsabilidad fiscal con las que el ente fiscal motivara la apertura de la investigación, para esta aseguradora no existe claridad en

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO

GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES
Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001
PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200

los cargos que se imputan, habida cuenta que no se señalan conductas expresas en las que haya incurrido que se califiquen como un delito en contra de la Administración Pública. Nótese, que no se incurrió en una celebración indebida de contrato, y que los funcionarios una vez legalizado el contrato nombraron una entidad idónea que se encargara de auditar la ejecución del contrato, entidad que posteriormente en el mes de octubre de 2015 emitió acta de recibo de la obra a entera satisfacción, lo que llevó al pago total de la obra contratada, sin que se advierta cuál fue la conducta que a criterio del ente investigador se descalifica

*Adicionalmente, debe expresar esta aseguradora que, si en gracia de discusión, si se les llegara a demostrar que incurrieron en **CULPA GRAVE**, esta conducta está consagrada en el **Código de Comercio, en el Título V. Del Contrato de Seguro, en su artículo 1055**, como uno de los **ACTOS INASEGURABLES** y carecería de sustento jurídico por efectos de lo consagrado en el Código de Comercio, razón por la que ésta aseguradora se atiene a lo que resulte probado dentro del proceso...*

Afirma el apoderado que el siniestro que se investiga tiene sustento en la calidad de las obras ejecutadas, las deficiencias técnicas, y otra serie de circunstancias imputables única y exclusivamente a los seguros de cumplimiento, estabilidad o calidad de obra, manejo de anticipo, pero desde ningún punto de vista al seguro de manejo y que los hechos por los que se inició la investigación tienen su génesis en el año 2014, cuando se planeaba el proyecto, mientras que la vigencia del seguro solo inició en el mes de enero del año 2015, lo que a todas luces se traduce en que los hechos se originan mucho tiempo antes del inicio de la cobertura de la póliza, solicitando se desvincule a la aseguradora MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. en su condición de coaseguradora y se profiera fallo sin responsabilidad fiscal para las aseguradoras QBE, expedidora líder del seguro y su representada.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN PRESENTADOS POR LA DRA. LAURA ALEJANDRA DUQUE HERNÁNDEZ APODERADA SUSTITUTA DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS LA PREVISORA S.A.:

Atendiendo a la línea de defensa que han mantenido los colegas que intervinieron antes de la presente se tiene que para endilgar responsabilidad fiscal es necesario que la conducta sea dolosa o culposa y en el caso que nos ocupa hasta la presente diligencia no se encuentra totalmente probado, ni determinado que en efecto los presuntos responsables fiscales vinculados dentro de este proceso hayan actuado bajo alguna de estas dos circunstancias.

Para determinar constitucional y legalmente las situaciones por las que responden los servidores públicos y los particulares con funciones públicas es indispensable dirigimos a la Constitución Política art. 6 donde mencionan "LOS PARTICULARES SOLO SON RESPONSABLES ANTE LAS AUTORIDADES POR INFRIGIR LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES, LOS SERVIDORES PÚBLICOS LO SON POR LA MISMA CAUSA Y POR OMISION O EXTRALIMITACIÓN EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES" De conformidad con la doctrina se actúa con culpa cuando existe un

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO

GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES
Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001
PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200

comportamiento voluntario en una actuación cuyo resultado es antijurídico, por tanto, se puede actuar por omisión, pero la conducta del agente debe ser dolosa o gravemente culposa para endilgar responsabilidad y para que proceda la indemnización resarcitoria. Así las cosas, tenemos que la culpa leve es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios, culpa que puede encajarle a los presuntos responsables fiscales, toda vez que dadas las resultas del proceso y dado todo lo que se recopiló en la etapa probatoria, no se tiene una prueba determinante donde se evidencie que los presuntos actuaron bajo dolo o culpa.

De acuerdo a lo conceptuado en el artículo 6 de la ley 610 del 2000, el daño es una lesión representada en el menoscabo disminución, detrimento, pérdida uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos o a los intereses patrimoniales del estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna. Al respecto la Corte Suprema de Justicia en sentencia SU 620 de 1996 establece que para la estimación del daño debe acudirse a las reglas generales aplicables en materia de responsabilidad, por lo tanto, entre otros factores que han de valorarse debe considerarse que aquel ha de ser cierto, especial, anormal y cuantificable con arreglo a su real magnitud. En el proceso del monto del daño por consiguiente ha de establecerse no solo la dimensión de este, sino que se debe examinar también si eventualmente o a pesar de la gestión fiscal irregular se obtuvo o no algún beneficio; así dentro del caso en cuestión se tiene que hasta el momento no se encuentra aprobado que se obtuvo algún beneficio por parte de los presuntos responsables ni por parte del grupo auditor ni por parte del grupo constructor.

Teniendo en cuenta lo anterior se puede concluir que el detrimento causado a la entidad no puede tenerse por culpa grave y por tanto, dicha conducta debería ser considerada como culpa leve dada las registras del proceso.

Frente a la vinculación de la compañía aseguradora como tal se tiene que esto obedece a un coaseguro y que en caso tal, de resultar una condena desfavorable a nuestros intereses la compañía aseguradora en efecto responderá únicamente por los cargos amparados y bajo las condiciones que ya se han plasmado del contrato de seguro y del respectivo coaseguro, esto teniendo en cuenta además que posterior a la anterior diligencia existe un fallo condenatorio dentro del proceso sancionatorio y que en caso de resultar condenados en este proceso estaríamos ante un doble pago por los mismos hechos y los mismos perjuicios, lo que en efecto se constituiría tanto en un cobro de lo no debido como en un enriquecimiento sin causa. Así las cosas, solicito a su honorable cuerpo colegiado desvincular a la PREVISORA COMPAÑÍA DE SEGUROS y si es del caso a las demás coaseguradoras en razón de los argumentos anteriormente expuestos...

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN PRESENTADOS POR EL DR. JAVIER FERNANDO RAMÍREZ MONTAÑEZ, APODERADO DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE ALLIANZ SEGUROS S.A. Y COLPATRIA S.A.:

El abogado manifiesta que presenta alegatos de conclusión en forma conjunta y coadyuva los argumentos expuestos por la apoderada de la aseguradora líder,



FALLO No: 00001

FECHA: 25 FEB 2019

PÁGINA 53 DE 116

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO

GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES
Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001
PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200

puntualizando que el batallón adelantó el proceso sancionatorio contractual en virtud del cual se profirió la resolución 206 del 3 de diciembre de 2018 que hizo efectiva la póliza de cumplimiento por la cobertura de estabilidad de la obra, por lo tanto advierte que la entidad cuenta con un título ejecutivo, que puede hacer exigible mediante procedimiento de cobro coactivo, contando con un término de 5 años para ello, habida cuenta que los recursos que son materia de esta investigación fiscal no son constitutivos de detrimento patrimonial y la contraloría debe valorar este medio probatorio como quiera que él mismo tiene incidencia en la cuantía que pretende resarcir.

Manifiesta así mismo, que el presente proceso de responsabilidad fiscal se debe armonizar con la teoría general del daño y aduce que de acuerdo al auto de apertura e imputación y los medios probatorios obrantes en el expediente, el presunto daño patrimonial no se encuentra plenamente demostrado, por lo cual solicita al despacho que en virtud del artículo 105 de la Ley 1474 de 2011 y en aplicación del artículo 47 de la Ley 610 de 2000 se profiera el archivo del mismo o en su caso fallo sin responsabilidad fiscal.

Expresa que es conocida la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional, concretamente la sentencia C-648 donde ha referido que la responsabilidad de las compañías de seguros está determinada de acuerdo a las condiciones del riesgo amparado, lo que significa para los operadores jurídicos en la medida en que confluyan o se den el lleno de los requisitos del contrato de seguros, surgirá para la compañía la obligación de indemnizar y que dados los argumentos que han sido expuestos por sus colegas y por él, los cuales encuentran pleno asidero jurídico y probatorio, concluye que para el caso de marras no se dan las condiciones de riesgo pactadas en el contrato de coaseguro y los hechos materia del proceso acaecen por fuera de la vigencia de las pólizas por las cuales se les ha vinculado, resultando jurídicamente improcedente la afectación de las mismas.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN PRESENTADOS POR EL DR. JUAN CARLOS ZULUAGA MAESE APODERADO DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS LIBERTY S.A.:

Al respecto afirma:

*Sea lo primero mencionar, que en el proceso administrativo llevado a cabo en el BATALLON DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE No. 8 "CENAC", cuyo contrato es el No. 078 BASP 08-2014, y cuya póliza llamada a afectar **B0-2448868** de Liberty Seguros, es la misma con la cual se llama en garantía en el proceso de la referencia. En dicho proceso administrativo, mediante resolución No. 2016 del 3 de diciembre del 2018 se declara la ocurrencia del siniestro y por lo tanto se hace efectiva la póliza **No. 244499968**- expedida el 24 de diciembre del 2014 por la compañía LIBERTY SEGUROS S.A., misma póliza con la cual LIBERTY SEGUROS S.A. es vinculada como tercero civilmente responsable al presente proceso y cuyo único afianzado es **RIMARCO S.A.S.***

 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	FALLO No: 00001
	FECHA: 25 FEB 2019
	PÁGINA 54 DE 116
GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO	
GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO	
FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001 PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200	

Lo anterior indica que la póliza en mención ya se encuentra AGOTADA por los hechos en el cual se declara la ocurrencia del siniestro de obra y calidad de la obra del contrato No. 078 BASP 08-2014, mismos hechos que se endilgan en el proceso de la referencia y por lo cual la póliza no puede ser afectada nuevamente, pues su saldo es cero.

Así mismo, como lo indiqué anteriormente, hay varios presuntos responsables que no están amparados con la póliza, para ellos no existe cobertura y el único afianzado es RIMARCO S.A.S.

*Es por esto que solicito respetuosamente se desvincule a la compañía **LIBERTY SEGUROS S.A.** del presente proceso, teniendo en cuenta la ocurrencia del siniestro y la afectación a la póliza anteriormente mencionada y su agotamiento. Si se fallara nuevamente en este proceso, se estaría violando el principio non bis in ídem, pues ya el mismo estado, en cabeza de la entidad contratante, adelantó y falló proceso de incumplimiento contractual, declaró un detrimento patrimonial y no podría nuevamente su Despacho declarar lo que ya fue declarado y condenado.*


X. ANÁLISIS DEL MATERIAL PROBATORIO

A continuación se hará expresa mención al marco jurídico a partir del cual debe analizarse la responsabilidad fiscal, cuya declaración ha sido atribuida por competencia a la Contraloría General de la República y a las Contralorías Territoriales a partir de la expedición de la Constitución Política de 1991.

Así se tiene que el artículo 6º de la Constitución Política establece que los servidores públicos además de ser responsables por infracciones cometidas a la Constitución y a las Leyes, lo son por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Por su parte el artículo 267 de la misma norma superior, otorga a la Contraloría General de la República la competencia para vigilar la gestión fiscal de la administración pública y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación. Dicha función tiene varios propósitos, como son: (i) proteger el patrimonio público; (ii) garantizar la transparencia y el acatamiento de los principios de moralidad administrativa en las operaciones relacionadas con el manejo y uso de los bienes y los recursos públicos y (iii) verificar la eficiencia y eficacia de la administración para cumplir los fines del Estado.

La principal herramienta con que cuenta el Estado para identificar la responsabilidad fiscal es la aplicación del proceso como tal, a través del cual se procura recuperar los dineros públicos malversados o extraviados como consecuencia de una inadecuada gestión fiscal.

Desde hace ya varios años, la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional deja en claro que el proceso de responsabilidad fiscal es netamente administrativo. Este proceso busca determinar y, si es del caso, declarar la responsabilidad fiscal

 CONTRALORÍA <small>GENERAL DE LA REPÚBLICA</small>	FALLO No: 00001
	FECHA: 25 FEB 2019
	PÁGINA 55 DE 116
GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO	
GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO	
FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001 PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200	

del servidor público o del particular, sobre la base de un detrimento patrimonial (daño) imputable a una conducta culpable (dolo o culpa grave) de éste, habiendo un nexo causal entre ambos.

Dicha facultad es otorgada al Contralor General de la República para establecer la responsabilidad fiscal que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva sobre los alcances deducidos de la misma, de acuerdo al artículo 268 ibídem.

Sobre la responsabilidad fiscal, se pronunció la Corte Constitucional en sentencia SU-620 de 1996, en la que señaló:

«Como función complementaria del control y de la vigilancia de la gestión fiscal que ejerce la Contraloría General de la República y las contralorías departamentales, distritales y municipales, existe igualmente, a cargo de éstas, la de “establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva sobre los alcances deducidos de la misma”, la cual constituye una especie de la responsabilidad que en general se puede exigir a los servidores públicos o a quienes desempeñen funciones públicas, por los actos que lesionan el servicio o el patrimonio público, e incluso a los contratistas y a los particulares que hubieren causado perjuicio a los intereses patrimoniales del Estado (...).».

El ejercicio de esta función se encuentra reglado en las Leyes 610 de 2000 y 1474 de 2011, la primera de ellas dispuso:

«ARTÍCULO 53. FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL. El funcionario competente proferirá fallo con responsabilidad fiscal al presunto responsable fiscal cuando en el proceso obre prueba que conduzca a la certeza de la existencia del daño al patrimonio público y de su cuantificación, de la individualización y actuación cuando menos con culpa leve del gestor fiscal y de la relación de causalidad entre el comportamiento del agente y el daño ocasionado al erario, y como consecuencia se establezca la obligación de pagar una suma líquida de dinero a cargo del responsable... (Texto subrayado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-619 de 2002).

Los fallos con responsabilidad deberán determinar en forma precisa la cuantía del daño causado, actualizándolo a valor presente al momento de la decisión, según los índices de precios al consumidor certificados por el DANE para los períodos correspondientes».

«ARTÍCULO 54. FALLO SIN RESPONSABILIDAD FISCAL. El funcionario competente proferirá fallo sin responsabilidad fiscal, cuando en el proceso se desvirtúen las imputaciones formuladas o no exista prueba que conduzca a la certeza de uno o varios de los elementos que estructuran la responsabilidad fiscal».



FALLO No: 00001

FECHA: 25 FEB 2019

PÁGINA 56 DE 116

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO

GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES
Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001
PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200

Teniendo en cuenta el marco legal anterior, sea lo primero realizar el subyacente análisis jurídico de las pruebas que constituyen el sustento para tomar la decisión, las cuales se ciñen a los principios de conducencia, pertinencia y necesidad, y serán valoradas dentro de las reglas de la sana crítica, la persuasión racional y el cumplimiento de los principios que rigen la acción fiscal y la función administrativa establecidos en los artículos 29 y 209 de la Constitución Política, la Ley 610 de 2000, la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes, con la finalidad de realizar un análisis veraz y objetivo de los hechos, que conduzca a establecer la verdad de los mismos, junto con los argumentos de defensa y de conclusión presentados por las partes haciendo uso del derecho de defensa y contradicción.

Con base en los artículos 22 y siguientes de la Ley 610 de 2000, se practicaron las pruebas conducentes, pertinentes y útiles para lograr el esclarecimiento de los hechos y determinar con certeza si existió o no daño fiscal en el presente proceso.

Ahora bien, se hace necesario analizar las pruebas y examinarlas en conjunto, lo cual se realizará así:

1. **CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN No. 078 BASPC8- 2014 Y SUS ADICIONALES (CD F.243).**

El negocio contractual en mención fue suscrito por FERNANDO DE JESÚS CALLE MORENO, en calidad de contratante y JOISMAR NAYIVE QUIROZ QUINTERO, representante legal de RIMARCO SAS como contratista, el día 24 de diciembre de 2014.

El objeto del contrato fue:

«CLÁUSULA PRIMERA - OBJETO: El objeto del presente contrato de obra es el MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES LOCATIVAS Y RED LAN PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO LAS OFICINAS DEL CENAC ARMENIA EN EL BASPC8; de acuerdo a los estudios previos de la entidad y la propuesta adjudicataria».

En la descripción de la necesidad que se pretendía satisfacer consagrada en los estudios previos, se estableció:

...
*El ejército nacional ha dispuesto la creación de la central administrativa y contable del eje cafetero en la ciudad de Armenia, razón por la cual **debe habilitarse una edificación de las existentes en la unidad militar, para funcionar como CENAC** y centralizar allí todas las funciones administrativas y contables de las unidades centralizadas en el eje cafetero.*

Hasta diciembre de 2014, los batallones de apoyo y servicios para el combate, ejercerán las labores de centralización administrativa y contable, la cual será asignada

 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	FALLO No: 00001
	FECHA: 25 FEB 2019
	PÁGINA 57 DE 116
GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO	
GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO	
FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001 PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200	

a la nueva central que se creó en el eje cafetero, con sede en el BASPC8 de la ciudad de Armenia.

Para habilitar el funcionamiento del CENAC, se identificó uno de los edificios, para ser adaptado con los lineamientos básicos del ejército nacional, conforme el tamaño y operatividad del nuevo CENAC con sede en Armenia.

Para hacer funcional la nueva unidad logística, ella debe contar con el espacio, seguridad, equipos, redes y oficinas correspondientes a la tarea que desarrollara en la centralización de los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío. Razón por la cual, debe habilitarse una red de comunicaciones electrónicas idóneas que permitan la interconexión efectiva con el comando central y garantice la correcta y oportuna manipulación de información para el buen funcionamiento del ejército nacional.

El edificio destinado para funcionar como CENAC dentro del BASPC8 debe someterse a mantenimiento y adecuación, no solo para garantizar su estabilidad y calidad para la prestación de sus servicios y el bienestar de los militares, sino que debe ser remodelada garantizando la capacidad de albergue requerida y la reubicación de sistemas y redes necesario para cumplir con las labores encomendadas a los responsables de cumplir las funciones administrativas y contables en el ejército nacional en esta parte del país, conforme la misión institucional encomendado a este grupo de militares; **Esta edificación y redes según su naturaleza, así como sus elementos integrantes y condiciones constructivas, deben ser objeto de intervención bajo altas medidas de seguridad.**

La vida útil de una edificación es la previsión del período de tiempo para el cual fue construido, durante el cual es susceptible de ser utilizado en las condiciones de calidad requeridas, siempre que se hayan observado las instrucciones de uso y mantenimiento **y se hayan realizado las obras de rehabilitación necesarias e identificadas por personal técnico. Se debe tener en cuenta que las estructuras deben estar en condiciones excelentes para que sirvan de soporte en el uso habitual para el cual fueron concebidas, en la protección, cuidado que los miembros del ejército nacional, funcionamiento de equipos, archivo y atención de usuarios, pero sobre todo se debe atender la priorización y orden para la realización de las obras conforme la planeación institucional** para prevenir pérdida de capacidad operativa, garantizando la capacidad de reacción de los miembros orgánicos de la institución ante cualquier amenaza o ataque a la unidad militar

El BASPC8 cuenta con varias edificaciones en las cuales se llevan a cabo las labores administrativas y logísticas desde las cuales se cumplen la programación de actividades del comando central; edificaciones que de acuerdo a la naturaleza propia del ejército nacional, como responsable de la seguridad nacional y el monopolio de las armas, **deben permanecer en el mejor estado posible para su empleo y servicio, sin lugar a evidenciar en ningún momento debilidad estructural, deterioro físico**

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO

GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES
Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001
PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200

o amenaza de ruina, por cuanto podrían ser objeto de identificación por parte de las fuerzas insurgentes y al margen de la ley, para cometer atentados en contra de la seguridad de las instalaciones militares y con ello menguar la capacidad operativa y de reacción de los miembros orgánicos del ejército nacional... (Negrillas del despacho).

2. Acta de inicio del contrato 078 BASPC8- 2014, de fecha 13 de enero de 2015, suscrita por JOISMAR NAYIVE QUIROZ QUINTERO -contratista-, JOSÉ WILMAR ADARME ALBARRACÍN -interventor- y FERNANDO DE JESÚS CALLE MORENO -contratante-. (Fs. 1277-1283).

3. Informes semanales de interventoría de fecha 13 al 18, del 19 al 24, del 26 al 31 de enero de 2015; del 02 al 07, del 9 al 14 y del 16 al 21 de febrero de 2015; del 9 al 13 y del 22 al 27 de junio de 2015 suscritos por el grupo FARMAQ (CD F. 243).

4. **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 079-BASPC08-2014**, cuyo objeto consistió en:

«CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PRESTAR EL APOYO A LA SUPERVISIÓN AL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES LOCATIVAS Y RED LAN PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO LAS OFICINAS DEL CENAC ARMENIA EN EL BASPC8».
(Ver CD F. 524 - Pág. 249 y siguientes del documento digital: tomo 1 contrato No. 079 2014).

5. Pliego de Condiciones - noviembre de 2014 (CD F.243; Fs. 1110-1159).

6. **Actas de seguimiento de obra No. 1** del 26 de diciembre de 2014, **No. 2** del 05 de enero de 2015, **No. 3** del 03 de febrero de 2015, **No. 4** del 19 de febrero de 2015, **No. 5** del 26 de febrero de 2015, **acta de suspensión del 19 de marzo de 2015**, **acta de seguimiento de obra No. 6** del 31 de marzo de 2015 y **No. 7** del 04 de junio de 2015 (Fs. 1578-1600).

7. Resolución No. 0037 del 09 de marzo de 2017, por medio de la cual se declara la liquidación unilateral del contrato (Fs. 387).

8. **VISITAS ESPECIALES:**

Acta de visita especial realizada en las instalaciones del BASPC8 «Cacique Calarcá», durante la indagación preliminar fiscal el día 21 de diciembre de 2016 (Fs. 277-278)

Acta de visita fiscal especial realizada el 27 de marzo de 2017 por el ingeniero civil HERNÁN ALONSO ARISTIZÁBAL ÁLZATE a la obra objeto del contrato (Fs.410-413).

 CONTRALORÍA <small>GENERAL DE LA REPÚBLICA</small>	FALLO No: 00001
	FECHA: 25 FEB 2019
	PÁGINA 59 DE 116
GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO	
GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO	
FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001 PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200	

Acta de visita fiscal especial No. 01 llevada a cabo el día 9 de agosto de 2018, realizada por el ingeniero civil HERNÁN ALONSO ARISTIZÁBAL ÁLZATE a la obra objeto del contrato (Fs. 1566-1568).

Acta de visita fiscal especial No. 02 realizada el 30 de octubre de 2018, por el ingeniero civil HERNÁN ALONSO ARISTIZÁBAL ÁLZATE a la obra objeto del contrato que llama la atención de este despacho (Fs. 1726-1728).

9. INFORME TÉCNICO:

El ingeniero civil HERNÁN ALONSO ARISTIZÁBAL ÁLZATE asignado al grupo de vigilancia fiscal de la gerencia departamental colegiada del Quindío, presentó informe bajo el radicado 2017IE0033816 del 23 de abril de 2017 (C. 3 Fs. 388-419), documento en el cual expresó entre otros.

*.. Se debe advertir que para el desarrollo de la visita se esperaba encontrar con las obras manifestadas y establecidas en los estudios previos, el pliego de condiciones, la minuta del contrato y los ítems o actividades pactadas, las cuales correspondían con el **mantenimiento de una construcción existente**, tal como se desprende de los siguientes párrafos transcritos.*

Según los Estudios Previos:

"1 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN.

El ejército nacional ha dispuesto la creación de la central administrativa y contable del eje cafetero en la ciudad de Armenia, razón por la cual debe habilitarse una edificación de las existentes en la unidad militar, para funcionar como CENAC y centralizar allí todas las funciones administrativas y contables de las unidades centralizadas en el eje cafetero

(.)

El edificio destinado para funcionar como CENAC dentro del BASPC8 debe someterse a mantenimiento y adecuación...

Por todo lo aquí descrito y de conformidad con el presupuesto de obra que contiene la cantidad de ítems a intervenir en el mantenimiento y adecuación del CENAC Armenia, se encuentra plenamente justificado el proceso de selección, . .

Siendo así y en atención de la necesidad expuesta, resulta necesario para el Batallón de ASPC N° 08 - "Cacique Calarcá", adelantar un proceso de selección pública que permita contratar la obra pública de "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES LOCATIVAS Y RED LAN PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO LAS OFICINAS DELCENACARMENIA EN EL BASPC8"

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO

GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES
Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001
PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200

(...)

En relación con las descripciones de las necesidades de la entidad, y la naturaleza de las prestaciones que surgen en cumplimiento del presente proceso contractual, se identifica como contrato a celebrar el Contrato de Obra de acuerdo a las directrices del artículo 32 de la Ley 80 1993, que textualmente señala:

"ARTÍCULO 32. Contrato de obra, de acuerdo al numeral 1° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 - Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, **mantenimiento**, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago" (...) (Subrayado fuera de texto)

Según el Pliego de Condiciones.

"1.3 OBJETO.

El objeto del presente proceso pre-contractual es el seleccionar de acuerdo a la ley y al presente pliego de condiciones la persona natural, persona jurídica, consorcio o unión temporal que en las mejores condiciones ofrezca realizar la ejecución del contrato de "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES LOCATIVAS Y RED LAN PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO LAS OFICINAS DEL CENAC ARMENIA EN EL BASPC8..." (subrayado fuera de texto)

Según el Contrato de Obra

"g) Que con base en las consideraciones anteriores, las partes hemos convenido en celebrar el presente contrato del cual hacen parte integral los documentos expedidos durante el proceso de selección y aquellos presentados por el contratista en su propuesta adjudicataria CLÁUSULA PRIMERA - OBJETO: El objeto del presente contrato de obra es el MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES LOCATIVAS Y RED LAN PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO LAS OFICINAS DEL CENAC ARMENIA EN EL BASPC8, de acuerdo a los estudios previos de la entidad y la propuesta adjudicataria" (subrayado fuera de texto)

Como se observa la Entidad planeó y contrató obras y actividades de mantenimiento, sin embargo, se evidenció, del expediente contractual y la visita de campo, que las obras y actividades realizadas fueron la demolición de una edificación existente de un piso y la construcción de una obra nueva de dos pisos

... La visita de campo, también permitió identificar el estado actual de la edificación, observándose que un inmenso sector del cielo raso en drywall construido presenta ruina, pues un sector de la cubierta fue destrozado por fenómenos naturales (vientos) permitiendo el paso directo del agua lluvia en varias ocasiones, con lo cual se humedeció el cielo raso en ambos pisos de la edificación, generando la presencia de **moho** (producido por diversos tipos de hongos) que puede causar serios problemas respiratorios y otros problemas de salud Esto obliga a remover y reconstruir la gran mayoría del cielo raso, pues es un cielo raso en drywall no revestido, el cual se caracteriza por ser poroso lo que hace imposible su limpieza completa...

 CONTRALORÍA <small>GENERAL DE LA REPÚBLICA</small>	FALLO No: 0 0 0 0 1
	FECHA: 2 5 FEB 2019
	PÁGINA 61 DE 116
GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO	
GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO	
FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001 PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200	

El aspecto más relevante del informe técnico en mención, tiene que ver con la inutilidad de la obra, por cuanto la misma no cumple con el reglamento «**Colombiano de Construcción Sismo Resistente, NSR-10**».

La conclusión que presenta el apoyo técnico es la siguiente:

«(...) Aunado a lo anterior, y aún mucho más grave, la edificación no debe ser utilizada, pues se evidenció el incumplimiento de requisitos técnicos estructurales importantes para edificaciones construidas en esta región del país, de conformidad con los criterios y requisitos mínimos del **Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente, NSR-10**.

... la obra fue ejecutada en el municipio de Armenia, el cual de acuerdo con la NSR-10 se encuentra, según el “Mapa de zonificación sísmica de Colombia” en la Zona de Riesgo Sísmico ALTA...

En el expediente contractual digital, carpeta 04 folio 832, se observa el documento aportado por el contratista de obra RIMARCO SAS denominado “CONCEPTO TÉCNICO - CONSTRUCCIÓN DE MURO EN MAMPOSTERÍA BASPC 8 CENAC ARMENIA”, el cual fue entregado al Batallón de ASPC No 8 “Cacique Calarcá” por la empresa contratada para ejercer las funciones de supervisión (interventoría) del contrato de suministro, mediante oficio del 24 de febrero de 2015, donde se indicó:

(.)
 “La ciudad de Armenia se ubica en la zona de amenaza sísmica alta, zonas de especial atención para edificaciones de 1 y 2 pisos, por lo cual se determina la construcción de mampostería confinada con elementos en concreto reforzado, de acuerdo a lo dispuesto en el Titulo D de la Norma Colombiana de Construcciones Sismo-Resistentes NSR- 10

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

Se proyecta la construcción de una edificación de dos pisos que tendrá un sistema estructural de pórticos en concreto reforzado y mampostería confinada. En la mampostería de muros confinados, se considera, que el muro es un elemento homogéneo que incluye la porción de mampostería y los elementos de confinamiento.

La Norma Colombiana de Construcciones Sismo Resistentes (NSR-10) clasifica como mampostería confinada aquélla que se construye utilizando muros de mampostería rodeados con elementos de concreto reforzado, vaciados posteriormente a la ejecución del muro y que actúan monolíticamente con este sistema estructural se clasifica, para efectos de diseño sismo resistente, como uno de los sistemas con capacidad moderada de disipación de energía en el rango inelástico (DMO), aplicable a edificaciones en regiones de las zonas de amenaza sísmica alta como la Ciudad de Armenia (.) (Subrayado fuera de texto).

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO

GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES
Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001
PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200

Sin embargo, no se evidenció en el expediente contractual la existencia de Planos Estructurales, Memorias Estructurales y más delicado aún, licencia de construcción la cual debía incluir también la autorización de demolición total, contraviniendo la Ley 400 de 1997 “por la cual se adoptan normas sobre construcciones sismo resistentes” y el Decreto 1469 de 2010 “por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones, a la función pública que desempeñan los curadores urbanos y se expiden otras disposiciones”

La normatividad indica que la revisión de los diseños, planos, memorias y estudios realizados deben ser revisados para efectos de la obtención de la licencia de construcción, por la curaduría o las oficinas o dependencias encargadas de estudiar, tramitar, y expedir las licencias de construcción, tal como lo indica la Ley 400 de 1997, la Ley 388 de 1997 y sus respectivos reglamentos

El concepto dado por el contratista y apoyado por el interventor, así como las obras realizadas, definitivamente no cumplen con los requisitos de la norma NSR-10, según se sustenta con los apuntes que se dan a continuación.

La norma establece que se debe definir el grupo de uso¹ de la edificación, por lo tanto los cuarteles de las fuerzas armadas deben clasificarse como del grupo de uso III, tal como lo expresa la norma

“(…) A.2 5 1- GRUPOS DE USO - Todas las edificaciones deben clasificarse dentro de uno de los siguientes Grupos de Uso: (..)

A 2 5 1 2 - Grupo III - Edificaciones de atención a la comunidad - Este grupo comprende aquellas edificaciones, y sus accesos, que son indispensables después de un temblor para atender la emergencia y preservar la salud y la seguridad de las personas, exceptuando las incluidas en el grupo IV Este grupo debe incluir

*(a) Estaciones de bomberos, defensa civil, policía, **cuarteles de las fuerzas armadas**, y sedes de las oficinas de prevención y atención de desastres, (..)”*
(negrilla fuera de texto)

Esta clasificación hace que se deban cumplir requisitos estructurales más estrictos que las edificaciones de viviendas normales, dado que son “esenciales para la recuperación de la comunidad con posterioridad a la ocurrencia de una emergencia, incluyendo un sismo, con el fin de garantizar que puedan operar durante y después de la ocurrencia de un temblor”

Aunque se dice en el concepto del Contratista que el sistema estructural de resistencia sísmica es un sistema estructural de pórticos en concreto reforzado y mampostería confinada, se pudo observar en las fotos del expediente que la mampostería no se reforzó ..

¹Según NSR-10 Grupo de uso es Clasificación de las edificaciones según su importancia para la atención y recuperación de las personas que habitan en una región que puede ser afectada por un sismo, o cualquier tipo de desastre

 CONTRALORÍA <small>GENERAL DE LA REPÚBLICA</small>	FALLO No: 00001
	FECHA: 25 FEB 2019
	PÁGINA 63 DE 116
GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO	
GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO	
FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001 PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200	

.. la construcción hecha no cumple con las apreciaciones dadas por el Contratista para su construcción, y mucho menos con los requisitos más estrictos de la norma.

Definitivamente, la norma NSR-10 es muy clara en indicar que los sistemas estructurales de mampostería confinada con pórticos de concreto no pueden ser empleados en zonas de riesgo sísmico ALTO . la Norma indica que para el Grupo de Uso III en el que debe estar la edificación en cuestión no pueden emplearse muros de mampostería confinada.

Observando algunos requisitos específicos sobre estructuras aporticadas (Columna y Viga) en concreto de la Norma NSR-10 se evidencia incumplimiento de sus requisitos. .

Como se desprende de todo lo arriba presentado, la edificación actual incumple los requisitos generales de diseño y construcción sismo resistente de la norma NSR-10, por lo tanto, debe evitarse su ocupación por los miembros del Ejército Nacional. En otras palabras la edificación así hecha no debe ser habitada, pues pone en un alto riesgo la vida de los ocupantes en el momento que se presente un sismo de considerables proporciones, pues se encuentra en una zona de Colombia donde los fuertes Sismos son relativamente frecuentes, y por eso la Norma NSR-10 ubica a Armenia en una Zona de Amenaza Sísmica ALTA.

*Lo anterior, indica que el presunto daño patrimonial al estado es por el total del valor pagado a la firma contratista que asciende a **\$541.803.439,13**, toda vez que la edificación no debe ser empleada en el estado en que se encuentra.*

Conclusión

Aunque se evaluaron las diferentes actividades contractuales según el acta de recibo a satisfacción suscrita por las partes, identificando menores cantidades de obra hechas que las pagadas, fue evidente, al estudiar y analizar la diferente documentación que reposa en el expediente digital del contrato y al confrontar con las condiciones de construcción en el terreno, que lo hecho o construido es una edificación que no puede ser utilizada o habitada por incumplir requisitos de construcción sismo resistente establecidos por la Ley 400 de 1997 en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10.

*Por lo tanto, se verifica un presunto daño patrimonial al Estado en la suma de **\$541.803.439,13**, como valor pagado al contratista por una edificación sin terminar que incumple los requisitos de construcción sismo resistente y pone en riesgo a las personas que decidan habitarlo. ».*

10. OBJECIONES PRESENTADAS Y RESPUESTA A LAS MISMAS POR PARTE DEL FUNCIONARIO DE APOYO TÉCNICO:

Dentro del término procesal los implicados presentaron objeciones frente al informe técnico enunciado, dándose las aclaraciones y respuestas por parte del funcionario de apoyo quien ratificó su posición y afirmó (Fs. 870 - 891):

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO

GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES
Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001
PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200

«Finalmente como se dijo en el informe técnico aunque se indican diferencias entre cantidades de obra pagadas con el acta de supervisión y obras medidas, el presunto detrimento patrimonial obedece a la no utilización de la obra ejecutada y pagada por \$541.803.439,19; según el incumplimiento de los requisitos técnicos que ponen en riesgo la vida de los posibles ocupantes de la edificación así construida, ante la existencia de un sismo de considerables proporciones, los cuales son muy probables en una zona de amenaza sísmica alta».

11. INFORME EJECUTIVO

Con oficio 2018ER0054127 del 25 de mayo de 2018, el Director del CENAC envía a este despacho análisis de sismo resistencia realizado por el Comando de Ingenieros del Ejército Nacional al nuevo edificio CENAC Armenia - refiriéndose a la obra del contrato que llama la atención de este despacho- (Fs. 893-895), documento en el cual se establece:

IV. OBSERVACIONES

- Este no es un informe de vulnerabilidad, pero es un concepto técnico elaborando un modelo estructural sobre el estado de la edificación, el cual se basó en materiales, cuantías y secciones del informe MASERRA ingeniería y arquitectura.
- Las deflexiones fueron verificadas ante carga muerta.
- Las derivas fueron analizadas bajo aspectos establecidos en el título A.6.2.1.2 y B.2.3.2.1 y el espectro de respuesta sísmica coeficiente de importancia $I=1.0$
- Según los chequeos de deflexiones verticales la estructura cumple en un 100%
- Se hace chequeo de derivas, hallando algo similar del informe donde las columnas centrales están ligeramente por encima del 1% permitido, como lo establece la NSR-10 en el título A tabla A.6.4 1 límites de deriva
- A pesar que la estructura cuenta con buenos métodos constructivos y tiene buena estabilidad, una vez verificado parámetros de sismo la edificación **NO CUMPLE 100%** con la NSR-10



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
COMANDO DE INGENIEROS

INFORME
EJECUTIVO

Pag ____ de ____
Código FO-COING-547
Versión: 1
Fecha de emisión: 2017-04-19

V. RECOMENDACIONES PARA EL PLANEAMIENTO

(Presupuestal complejidad, tiempos de ejecución para el diseño y construcción)

- La recomendación es realizar el recalce de las columnas de la zona central de escaleras ampliando secciones a 30x35, dando así cumplimiento a los parámetros en cuestión de la NSR-10.

12. COMPROMISO DE RIMARCO

Con oficio 2018ER0058084 del 6 de junio de 2018, se allega acta de reanudación de audiencia de debido proceso al contrato 078, mediante el cual el contratista se obliga a entregar la obra el día 6 de agosto de 2018, de acuerdo a las

 CONTRALORÍA <small>GENERAL DE LA REPÚBLICA</small>	FALLO No: 00001
	FECHA: 25 FEB 2019
	PÁGINA 65 DE 116
GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO	
GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO	
FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001 PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200	

observaciones hechas por el Comando de Ingenieros del Ejército Nacional con relación a los lineamientos de la NRS-10. (Fs. 901-902).

Se destaca de esta acta el compromiso adquirido por parte del contratista, así:

Toma la palabra el señor Contratista WILSON ALBERTO ALFONSO CLAVIJO Representante Legal Suplente RIMARCO SAS, quien manifiesta que el proceso se encuentra parado por la NSR 10, mas no por la edificación, ya que la obra si es sismo-resistente

Manifiesta que ya hicieron estudios para el reforzamiento

Manifiesta que realizará el reforzamiento de manera más técnica posible de acuerdo al informe presentado por el Comando de Ingenieros del Ejército Nacional de fecha 22 de Mayo de 2018.

Solicita tiempo prudencial para hacer la estabilidad de la obra.

Manifiesta que la Contraloría General de la Nación ha decretado medidas cautelares en contra de la empresa.

Solicita que se otorgue un tiempo de 2 meses para la entrega de la obra.

Manifiesta que la obra deberá venir acompañada de un método constructivo, normas estructurales, seguimiento permanente, para ser entregada en la fecha del 06 de Agosto de 2018...

13. RESULTADO DE LA VISITA TÉCNICA REALIZADA A LA OBRA LUEGO DE EFECTUADA LA INTERVENCIÓN DEL CONTRATISTA Y ESTUDIO O ANÁLISIS TÉCNICO SOBRE EL DOCUMENTO DENOMINADO INFORME EJECUTIVO

El ingeniero civil HERNÁN ALONSO ARISTIZÁBAL ÁLZATE en calidad de apoyo técnico, presentó a este despacho el oficio No. 2018IE0065184 del 30 de agosto de 2018, en el que da respuesta al resultado de la visita técnica realizada a la obra con el fin de verificar la intervención de la misma hecha por la firma contratista con el propósito de poner en servicio la edificación ante el acuerdo suscrito con la entidad contratante, así como el análisis técnico sobre el informe incorporado en el expediente a folios 893 a 895 (Fs.1559 - 1568) En el oficio destacó:

*... Todo lo anterior permite concluir que las actividades adicionales efectuadas por el contratista de la obra, específicamente **el recalce de las columnas no es suficiente para lograr que la edificación construida cumpla las condiciones de Sismo Resistencia exigidas por el Reglamento NSR-10.***

Las circunstancias evidenciadas ameritan que cualquier intervención adicional que se decida realizar en la edificación, con el fin de permitir su uso, deba ser planeada y

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO

GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES
Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001
PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200

justificada adecuadamente, de conformidad con los requisitos, criterios y procedimientos que resulten de un juicioso estudio de vulnerabilidad sísmica, tal como lo expone también el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistentes

El Reglamento NSR-10 establece los requisitos que deben ser utilizados para llevar a cabo la evaluación del comportamiento sísmico y el diseño de la intervención, reparación o refuerzo de la estructura de edificaciones que se modifiquen o rehabiliten en el territorio nacional.

Bajo las anteriores condiciones, comedidamente se solicita a la Colegiatura que se tenga en cuenta que con anterioridad a una posible nueva visita técnica para verificar actividades de reparación de la edificación de la CENAC Armenia, se exija la entrega oportuna y completa de los cálculos, memorias y planos que demanda el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistentes.

Por último, se indica que actualmente, la edificación con la intervención hecha aún no ha subsanado los diferentes puntos planteados como incumplidos en el informe inicial que reposa en el expediente... (Negritas fuera del texto).

14. INFORME EJECUTIVO - INSPECCIÓN VISUAL OBRA CENAC ARMENIA (Fs. 1730- 1731).

Acta de inspección efectuada el 19 de octubre de 2018, en las instalaciones del CENAC -al sitio de la obra-, consistente en «REVISION DOCUMENTACIÓN ESTRUCTURAL EXISTENTE REGISTRO FOTOGRÁFICO EDIFICACIÓN "CACIQUE CALARCA" por el ingeniero MARTÍN AUGUSTO LÓPEZ JAIME, en la cual se plasman las siguientes observaciones, donde se evidencia que el edificio en construcción no cumple con lo establecido en la norma sismo resistente:

...
IV. OBSERVACIONES

- Se detectan graves fallas de conexión entre elementos estructurales, además de ausencia de los mismos.
- Existen 2 columnas intermedias que se logró visualizar que **no cuentan** con conexión a la placa de entrepiso por lo cual **no hacen parte del sistema estructural**, además por cielo rasos no se logró establecer cuantas de éstas columnas están bajo esta grave condición.
- Se aprecia que la mayoría de las vigas principales 30cmx30cm establecidas en el informe de vulnerabilidad, **no existen**. Además las riostras para deflexiones no son de concreto sino de bloque de mampostería, material no apto como componente estructural,
- El informe de vulnerabilidad suministrado por la unidad y realizado por RIMARCO S.A.S. y MASERRA ingeniería y arquitectura **no corresponde** con la realidad observada en la presente visita.
- El recalce de las columnas que se recomendó en el anterior informe, **no** fue realizado bajo los parámetros de calidad establecidos para estas intervenciones, **no** fue realizado con buena calidad de concreto, no se escarifico la columna, **no** se

 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	FALLO No: 00001
	FECHA: 25 FEB 2019
	PÁGINA 67 DE 116
GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO	
GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO	
FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001 PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200	

realizó en toda la longitud del elemento, **no** se utilizaron materiales de adherencia, **no** se aumentó la cuantía del refuerzo de las columnas por lo que incumple con el 1% mínimo exigido en la NSR-10.

- Como se mencionó en el anterior informe “es un concepto técnico elaborando un modelo estructural sobre el estado de la edificación, el cual se basó en materiales, cuantías y secciones del informe MASERRA ingeniería y arquitectura.” Verificada la información de dichos estudios no son reales, la validez del anterior informe es nula.
- Por lo anterior y según la definición de pórtico de los sistemas estructurales A.3.2.1 NSR-10, esta edificación **no cumple** con las condiciones mínimas exigidas en la misma.

15. Resolución No. 206 del 03 de diciembre de 2018, por medio de la cual se declara la ocurrencia de un siniestro de obra y se hace efectiva la póliza de estabilidad y calidad de la obra dentro del contrato **No. 078-BASPC08.2014** (Fs.1777-1784) dictada por el Teniente Coronel LEONARDO BARRETO GAITÁN en calidad de Director Central Administrativa y Contable Regional Armenia del Ejército Nacional, providencia que en su parte resolutive establece:

«RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: declarar la ocurrencia del siniestro por el riesgo de estabilidad de la obra establecido en la cláusula 9° del contrato, garantía de estabilidad y calidad de la obra para garantizar la correcta ejecución de obras en cuantía equivalente al 20% del valor total del contrato por un término de cinco años, contados a partir del acta de recibo final a satisfacción.

ARTICULO SEGUNDO: como consecuencia de la declaratoria del siniestro, hacer efectiva la póliza de estabilidad de obra No. 24488868 Expedida el 24 de Diciembre de 2014. Del contrato No. 078-BASPC8-2014 expedida por la compañía LIBERTY SEGUROS S.A...».

16. Resolución No. 212 del 26 de diciembre de 2018, por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición y confirma en todas sus partes la Resolución No. 206 del 03 de diciembre de 2018, que declaró la ocurrencia del siniestro de obra y se hace efectiva la póliza de estabilidad de la obra dentro del contrato 078-BASPC08-2014 (Fs.1832-1849).

XI. MOTIVACIÓN JURÍDICO FISCAL FRENTE AL CASO CONCRETO

Una vez valorado el material probatorio se hace oportuno pasar a pronunciarse sobre cada uno de los elementos de la responsabilidad fiscal en los cuales se funda la presente decisión según lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 610 de 2000, así:

«Elementos de la responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal estará integrada por los siguientes elementos:

 CONTRALORÍA <small>GENERAL DE LA REPÚBLICA</small>	FALLO No: 00001
	FECHA: 25 FEB 2019
	PÁGINA 68 DE 116
GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO	
GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO	
FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001 PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200	

- Una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal.
- Un daño patrimonial al Estado.
- Un nexo causal entre los dos elementos anteriores».

11.1. EL DAÑO:

El daño en términos generales es la lesión a un interés tutelado por el derecho y causado por un comportamiento ilícito o no de una persona diferente al titular del mismo.

Esa lesión puede derivarse del incumplimiento o cumplimiento anormal de una obligación contractual y en esta hipótesis se configura el daño contractual, o bien de un comportamiento ilícito contrario a una norma constitucional, civil, penal o administrativa, así como de una conducta no ilícita, pero si antijurídica, entendida ésta como aquella que ocasiona un perjuicio que quien lo sufre no tiene el deber jurídico de soportarlo, y en ese evento se configura el daño extracontractual.

Y respecto a su indispensable acreditación, la jurisprudencia ha manifestado lo siguiente:

«Dentro del concepto y la configuración de la responsabilidad civil, es el daño un elemento primordial y el único común a todas las circunstancias, cuya trascendencia fija el ordenamiento. De ahí que no se de responsabilidad sin un daño demostrado, y que el punto de partida de toda consideración en la materia, tanto teórica como empírica, sea la enunciación, establecimiento y determinación de aquél, ante cuya falta resulta inoficiosa cualquier acción indemnizatoria».

En aplicación de tal principio, el daño es el primer elemento a verificar cuando se pretende declarar una responsabilidad fiscal. Nuestro ordenamiento constitucional y jurídico ha propendido por proteger de manera especial el patrimonio público, el cual deberá mantenerse indemne frente a las actuaciones gravemente culposas o dolosas de las personas a quienes se les ha encomendado la función de realizar gestión fiscal y que podrían ocasionar un menoscabo.

De esta manera cuando se configure una lesión al patrimonio público, el mismo deberá ser resarcido por las personas, que en ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de ésta lo hayan causado. A contrario sensu, si aquel no se afecta con sus actuaciones, no habrá lugar a declaratoria de responsabilidad fiscal.

Así pues, la Ley 610 de 2000, consagró en su artículo 6, la definición del daño así:

«Para efectos de esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al



FALLO No: 00001

FECHA: 25 FEB 2019

PÁGINA 69 DE 116

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO

GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES
Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001
PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200

cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público». (El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-340 de 2007).

En el caso particular el referido detrimento se determina de la siguiente manera:

Para el año 2014, el Batallón de BASPC No. 08 «Cacique Calarcá», adelantó un proceso de selección pública el cual partió de la siguiente necesidad plasmada en los estudios previos (CD F.243):

«1 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN.

*El ejército nacional ha dispuesto la creación de la central administrativa y contable del eje cafetero en la ciudad de Armenia, razón por la cual debe **habilitarse una edificación de las existentes** en la unidad militar, para funcionar como CENAC y centralizar allí todas las funciones administrativas y contables de las unidades centralizadas en el eje cafetero». (Negritas del despacho).*

Luego de surtido el proceso de selección, se suscribió el contrato de obra No. 078-BASPC8-2014 del 24 de diciembre de 2014, en el cual se estipuló (CD F.243):

*«... g) Que con base en las consideraciones anteriores, las partes hemos convenido en celebrar el presente contrato del cual hacen parte integral los documentos expedidos durante el proceso de selección y aquellos presentados por el contratista en su propuesta adjudicataria CLÁUSULA PRIMERA - OBJETO: El objeto del presente contrato de obra es el **MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES LOCATIVAS Y RED LAN PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO LAS OFICINAS DEL CENAC ARMENIA EN EL BASPC8, de acuerdo a los estudios previos de la entidad** y la propuesta adjudicataria» (Subrayado fuera de texto)*

Dos semanas después de haberse suscrito el acta que dio inicio al contrato el 13 de enero de 2015, se llevó a cabo la demolición de la infraestructura que iba a ser objeto de habilitación y se empezó de cero con la construcción de una obra nueva.

Como se observa la entidad planeó y contrató obras y actividades de mantenimiento, sin embargo, se evidenció, del expediente contractual y la visita de campo, que las obras y actividades realizadas fueron la demolición de una edificación existente de un piso y la construcción de una obra nueva de dos pisos, sin contar con planos estructurales, memorias estructurales, licencia de construcción, sin cumplir los requisitos generales de diseño y construcción sismo

 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	FALLO No: 00001
	FECHA: 25 FEB 2019
	PÁGINA 70 DE 116
GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO	
GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO	
FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001 PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200	

resistente de la norma NSR-10, por lo tanto, debe evitarse su ocupación por los miembros del Ejército Nacional.

En otras palabras, la edificación hecha no debe ser habitada, pues pone en un alto riesgo la vida de los ocupantes en el momento que se presente un sismo de considerables proporciones, pues se encuentra en una zona de Colombia donde los fuertes Sismos son relativamente frecuentes, y por eso la Norma NSR-10 ubica a Armenia en una Zona de Amenaza Sísmica ALTA.

Lo anterior, indica que se configura un daño patrimonial al Estado por el valor pagado a la firma contratista que asciende a **\$541.803.439,13**, toda vez, que la edificación no debe ser empleada en el estado en que se encuentra.


Los mencionados hechos se extractan del informe técnico rendido por el ingeniero civil **HERNÁN ALONSO ARISTIZÁBAL ÁLZATE**, quien para su preparación realizó una revisión documental del expediente de trámite de la denuncia ciudadana No 2016-95575-80634-D y del expediente contractual digitalizado del contrato de obra 078-BASPC8-2014 del 24 de diciembre de 2014. Así mismo, efectuó visitas al sitio de la obra.

Cabe aclarar que para la realización de las visitas especiales efectuadas al sitio de la obra de marras, fueron enviadas comunicaciones a todas las partes implicadas en el presente proceso, aunado a ello del informe técnico rendido, se corrió traslado a todas las partes como garantía procesal del derecho de defensa y contradicción y en su momento procesal contra él mismo se requirió aclaración por solicitud de las partes, lo cual quedó plasmado en el análisis del material probatorio de este proveído, quedando el informe técnico en firme, en la octava sesión de la audiencia de descargos surtida el día 31 de agosto de 2018.

Lo expuesto pone de manifiesto que en el caso particular existe un daño por la existencia de una obra que no cuenta con planos estructurales, memorias estructurales, licencia de construcción y que incumple los requisitos generales de diseño y construcción sismo resistente de la norma NSR-10.

La obra contratada que inicialmente era de habilitación y remodelación de obra ya existente, posteriormente se convirtió en la construcción de una obra nueva, se cambió su objeto, sin observar los requerimientos normativos, por tanto, no cumplió los fines esenciales del Estado.

Por lo dicho, se tiene certeza, seguridad y está probado que existe un detrimento fiscal por valor de QUINIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M-CTE (\$541.803.439,19), el cual de acuerdo con las características del daño es presente, cierto y real y se encuentra debidamente cuantificado en la suma indicada no indexada.

 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	FALLO No: 00001
	FECHA: 25 FEB 2019
	PÁGINA 71 DE 116
GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO	
GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO	
FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001 PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200	

Ahora bien, una vez realizado el estudio del daño como elemento fundamental sobre el cual se estructura la responsabilidad fiscal, procederemos a dilucidar el elemento subjetivo de la responsabilidad fiscal, constituida según el referido artículo 5º de la Ley 610 de 2000, por la conducta dolosa o gravemente culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal.

11.2 CONDUCTA DEL GESTOR FISCAL:

En este punto, es necesario realizar algunas precisiones conceptuales acerca de la gestión fiscal, así como, el tipo de conducta que en desarrollo de dicha gestión genera responsabilidad fiscal.

La conducta a partir de la cual debe analizarse la responsabilidad fiscal, se establece como un comportamiento activo u omisivo, doloso o gravemente culposo de un agente que realiza gestión fiscal. Este elemento se refiere a la potestad funcional, reglamentaria o contractual de un servidor público o de un particular que, autorizado legalmente, despliegue gestión fiscal en ejercicio de la cual, o con ocasión de ella, genere o contribuya en la causación de un daño al patrimonio del Estado. En este sentido la Corte Constitucional, en Sentencia SU-620 de 1996, expresó: «...dicha especie de responsabilidad es de carácter subjetivo porque para deducirla es necesario determinar si el imputado obró con dolo o con culpa».

Es necesario detenernos en los dos límites que ha establecido el legislador, esto es la gestión fiscal y la culpabilidad (dolo o culpa grave).

Gestión Fiscal

El control sobre la gestión fiscal tuvo su origen en la Ley 42 de 1923, producto de la Misión Kemmerer y se elevó a rango constitucional con el Acto Legislativo 1 de 1945, que consagraba «la vigilancia de la gestión fiscal de la administración corresponde a la Contraloría General de la República y se establecerá conforme a la ley».

La Constitución Política de 1991 recogió tal noción, que establece: «el control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación».

En este punto, el artículo 3 de la Ley 610 de 2000 define la gestión fiscal de la siguiente manera:

... es el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO

GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES
Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001
PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200

como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales...

La Corte Constitucional en la Sentencia C-840 de 2001 señaló que este elemento de la responsabilidad fiscal *«constituye el elemento vinculante y determinante de las responsabilidades inherentes al manejo de fondos y bienes del Estado por parte de los servidores públicos y de los particulares. Siendo por tanto indiferente la condición pública o privada del respectivo responsable, cuando de establecer responsabilidades fiscales se trata», aclarando además que «involucra a todos los servidores públicos que tengan poder decisorio sobre los bienes o rentas del Estado. Criterios éstos que en lo pertinente cobijan a los particulares que manejen fondos o bienes del Estado».*

Sumada a la anterior definición legal, la Corte Constitucional mediante la Sentencia en cita, además de precisar que el circuito de la gestión fiscal involucra a todos los servidores públicos que tengan poder decisorio sobre los bienes o rentas del Estado, puntualiza lo siguiente:

*... Como bien se aprecia, se trata de una definición que comprende las actividades económicas, jurídicas y tecnológicas como universo posible para la acción de quienes tienen la competencia o capacidad para realizar uno o más de los verbos asociados al tráfico económico de los recursos y bienes públicos, en orden a cumplir los fines esenciales del Estado conforme a unos principios que militan como basamento, prosecución y sentido teleológico de las respectivas atribuciones y facultades. Escenario dentro del cual discurren, entre otros, **el ordenador del gasto**, el jefe de planeación, el jefe jurídico, el almacenista, el jefe de presupuesto, el pagador o tesorero, el responsable de la caja menor, y por supuesto, **los particulares** que tengan capacidad decisoria frente a los fondos o bienes del erario público puestos a su cargo. Siendo patente que en la medida en que los particulares asuman el manejo de tales fondos o bienes, deben someterse a esos principios que de ordinario son predicables de los servidores públicos, **a tiempo que contribuyen directa o indirectamente en la concreción de los fines del Estado...***

*Por lo mismo, cuando el daño fiscal sea consecuencia de la conducta de una persona que **tenga la titularidad jurídica para manejar los fondos o bienes del Estado materia del detrimento**, procederá la apertura del correspondiente Proceso de Responsabilidad Fiscal, sea que su **intervención haya sido directa o a guisa de contribución...*** (Negrillas del despacho).

La gestión fiscal comprende las actividades económicas, jurídicas y tecnológicas para la acción de quienes tienen la competencia o capacidad para realizar uno o más de los verbos asociados al tráfico económico de los recursos y bienes públicos, en orden a cumplir los fines esenciales del Estado

En cuanto a la expresión *«...con ocasión de la gestión fiscal...»* que se establece en el artículo 1 de la Ley 610 de 2000, la Honorable Corte Constitucional mediante

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO

GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES
Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001
PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200

Sentencia C-840 de 2001, la declaró exequible y definió el contexto en que se debe aplicar dentro del proceso de responsabilidad fiscal, así:

«...el sentido unitario de la expresión o con ocasión de ésta sólo se justifica en la medida en que los actos que la materialicen comporten una relación de conexidad próxima y necesaria para con el desarrollo de la gestión fiscal. Por lo tanto, en cada caso se impone examinar si la respectiva conducta guarda alguna relación para con la noción específica de gestión fiscal, bajo la comprensión de que ésta tiene una entidad material y jurídica propia que se desenvuelve mediante planes de acción, programas, actos de recaudo, administración, inversión, disposición y gasto entre otros, con miras a cumplir las funciones constitucionales y legales que en sus respectivos ámbitos convocan la atención de los servidores públicos y los particulares responsables del manejo de fondos o bienes del Estado...».

Por lo tanto, una conducta dolosa o gravemente culposa atribuible a una persona que realiza gestión fiscal, se refiere a la potestad funcional, reglamentaria o contractual de un servidor público o de un particular que, autorizado legalmente, despliegue gestión fiscal, en ejercicio de la cual, o con ocasión de ella, genere un daño al patrimonio del Estado

Dolo o Culpa Grave.

A través de este elemento de la responsabilidad fiscal, encontramos que la conducta desplegada por el gestor fiscal y/o por las personas que con ocasión de la gestión fiscal o contribuyan con ella, debe ser dolosa o gravemente culposa.

La responsabilidad fiscal es subjetiva y, por tanto, requiere del análisis de la conducta, referida al comportamiento desplegado por la persona a quien le ha sido encomendada la guarda del patrimonio público

Ahora bien, ¿qué debe entenderse por dolo y culpa grave en materia de responsabilidad fiscal?

La Ley 610 de 2000, reguladora del proceso de responsabilidad fiscal, no consignó definición alguna de dolo o culpa grave; para tales definiciones habrá que acudir al artículo 63 del Código Civil, así.

«ARTÍCULO 63. CULPA Y DOLO...»

***Culpa grave**, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo.*

*El **dolo** consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro».*

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO

GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES
Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001
PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200

En consideración a los análisis realizados, debe enmarcarse la conducta en las acciones o actividades en el rango de dolo o culpa grave de conformidad con lo establecido en las definiciones que sobre estos conceptos trae la Ley 678² de 2001, teniendo en cuenta el vacío de la Ley 610 de 2000, en esta materia.

Al respecto el artículo 6° de la Ley en mención, determina.

«ARTÍCULO 6° Culpa grave. La conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.

Se presume que la conducta es gravemente culposa por las siguientes causas:

1. *Violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho...».*

En relación con el artículo en cita, la Corte Constitucional en la Sentencia C-285 de 2002, precisó:

*«El inciso primero del artículo 6° es una regla de derecho de alcance general en la cual se fijan los criterios para la determinación de la conducta gravemente culposa del agente estatal y el inciso segundo contiene una relación de los eventos en que el legislador presume la existencia de una conducta gravemente culposa. **No obstante, es claro que por fuera de estas hipótesis el juez puede deducir otras causales de culpa grave que si bien no se adecuen a alguna de las presunciones legalmente consagradas, si se enmarquen en los criterios fijados en el inciso primero, pero en estos supuestos, al no operar presunción de culpa grave alguna, deberán demostrarse los extremos de la acción de repetición ya que no habrá lugar a la inversión de la carga de la prueba**»* (Negrillas fuera de texto).

A su vez la Ley 1474 de 2011 tampoco definió el dolo y la culpa grave pero sí estableció presunciones de dolo y culpa grave en los procesos de responsabilidad fiscal.

Teniendo en cuenta que la razón jurídica de la responsabilidad fiscal, es la protección del patrimonio público, su finalidad es eminentemente reparatoria o resarcitoria, siendo determinada por un criterio normativo de imputación subjetiva que se estructura con base en el dolo y la culpa grave, partiendo de elementos axiológicos como son el daño antijurídico sufrido por el Estado y el nexo de causalidad entre el daño y la actividad del agente, por lo que quienes cumplen gestión fiscal manejan directamente recursos estatales y les asiste el deber de orientar esos recursos a la realización de las finalidades que le incumben al Estado.

² Ley 678 de 2001 «por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición» artículos 5 y 6

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO

**GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES
Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO**

**FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001
PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200**

Tal criterio se encuentra soportado sobre fundamentos constitucionales y legales, en los cuales se basa la declaratoria de responsabilidad de todo servidor público, tales como los artículos 6, 121, 124 y 209 de la Constitución Política de Colombia; los principios establecidos en las Leyes 1437 de 2011, 42 de 1993, 80 de 1993; los principios consagrados en el Decreto-Ley 111 de 1996, entre otros.


Y en el caso de los particulares, su responsabilidad ha de analizarse a la luz de las obligaciones contraídas en los contratos celebrados con el Estado, y de todas aquellas que surjan o deriven de su título habilitante.

De lo anterior podemos colegir que dentro del proceso de responsabilidad fiscal se debe verificar, analizar y determinar el grado de culpabilidad a partir de lo definido en el artículo 63 del Código Civil; Ley 678 de 2001 y de las presunciones legales que contempla la Ley 1474 de 2011.

Considerando los análisis realizados, calificaremos las acciones o actividades de los gestores fiscales involucrados y de los particulares que contribuyeron con la gestión fiscal, sustentados en la base probatoria recaudada, examinando sus funciones, si hubo extralimitación u omisión en su ejercicio, los fundamentos generadores de responsabilidad, el elemento intencional, la negligencia, imprudencia, imprevisibilidad y la falta de experticia, mirados desde la connotación de servidores públicos o colaboradores de la administración, y demás actividades administrativas desplegadas en su actuar, a fin de establecer el carácter subjetivo cualificado que se exige para comprometer la responsabilidad en el proceso fiscal.

Por tanto, una vez clara la concepción de la culpa grave como modalidad de la conducta que se tiene en cuenta dentro del segundo elemento constitutivo de la responsabilidad fiscal, de conformidad con el referido pronunciamiento de inexequibilidad realizado por el Tribunal Constitucional en relación con el parágrafo 2° del artículo 4° de la Ley 610 de 2000, tenemos entonces que en relación con la condición personal del agente, que para nuestro caso genera el daño patrimonial al Estado, deben confluir indefectiblemente, de un lado su condición de gestor fiscal o de condición determinante por contribución u ocasión de su gestión en el daño en relación con el bien que resultó lesionado y de otro lado, ha de establecerse que el aludido detrimento fue ocasionado con dolo o culpa grave.

De otra parte, en relación con el ejercicio de gestión fiscal desarrollada por quien con su actuar generó el daño, la misma debe estar relacionada con el desempeño de las funciones que tenía designadas, en tanto, salta a la vista que son las obligaciones impuestas y/o funciones otorgadas al servidor público o al particular en su calidad de contratista y/o interventor - supervisor, las que les permiten a unos tener la habilitación jurídica para tomar decisiones respecto de los bienes públicos que son puestos a su disposición o custodia y a otros que en virtud de su labor o condición generaron por contribución o con ocasión de su gestión el daño; por lo

 CONTRALORÍA <small>GENERAL DE LA REPÚBLICA</small>	FALLO No: 00001
	FECHA: 25 FEB 2018
	PÁGINA 76 DE 116
GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO	
GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO	
FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001 PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200	

cual dicha situación igualmente será estudiada en relación con cada uno de los presuntos responsables fiscales aquí implicados.

Antes de referirnos a cada uno de los sujetos procesales con el ánimo de establecer su responsabilidad o no en esta causa, no olvidemos que los fundamentos fácticos que constituyen la razón de ser de este proceso de responsabilidad fiscal y cuyo incumplimiento generaron el detrimento patrimonial que ahora llama la atención de este despacho, son:

1. Contrato de Mantenimiento y Adecuación No. 078 BASPC8- 2014 y sus adicionales.
2. Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 079-BASPC08-2014.

Seguidamente, y una vez analizados los anteriores negocios en el acápite correspondiente a la valoración probatoria, el despacho realizará el análisis de los demás elementos establecidos en el artículo 5º de la Ley 610 de 2000, así:

RESPONSABILIDAD DE LOS SEÑORES FERNANDO DE JESÚS CALLE MORENO y EDISON WILMAN MANCHEGO OROZCO, en condición de ordenadores del gasto -Contratantes- para la época de los hechos:

Ya vimos que el daño se generó por planear y ejecutar la construcción de una obra sin atender realmente las necesidades y sin que cumpliera su finalidad, ocasionando como ya se advirtió en letras anteriores en un detrimento que afectó los intereses del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - OCTAVA BRIGADA - BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE No. 8 «CACIQUE CALARCÁ».

No obstante, en el trámite del proceso, es ampliamente discutida la responsabilidad que se deriva de los ordenadores del gasto que intervinieron en las diferentes etapas de la contratación y para ello empezemos por establecer que:

FERNANDO DE JESÚS CALLE MORENO, quien se desempeñó como comandante y ordenador del gasto del Batallón de BASPC No 08 «CACIQUE CALARCÁ», de conformidad con la Resolución MDN 12767 del 25 de noviembre de 1994, por el período 20 de junio de 2013 al 12 de marzo de 2015, fue quien adelantó el proceso precontractual y suscribió con la empresa **RIMARCO SAS NIT. 900.075.341-3**, el pluricitado contrato de mantenimiento y adecuación No. 078-BASPC08-2014.

De lo expuesto se deduce que con relación al contrato de mantenimiento y adecuación de instalaciones locativas y red LAN para poner en funcionamiento las oficinas del CENAC Armenia en el BASPC8, el comandante alcanzó a estar aproximadamente dos (2) meses como interviniente del negocio contractual,

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO

GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES
Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001
PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200

considerando que este inició el 13 de enero de 2015 y tenía un plazo de ejecución inicial de cinco (5) meses.

Menciona en sus argumentos de defensa, que el problema jurídico a resolver por parte del despacho, es determinar si su participación como ordenador del gasto para este contrato fue determinante en la entrega de una obra presuntamente “inútil” y generadora de daño fiscal, frente a lo cual la respuesta por parte de este ente de control es afirmativa, pues fue a partir de su participación en la formación del negocio jurídico que se desencadenó el detrimento; fue él quien adelantó toda la etapa precontractual y parte de la contractual, situación que efectivamente quedó consagrada en el auto de apertura e imputación cuando se plasmó que su obrar contravino el principio de planeación dispuesto entre otras normas, en la Resolución No. 6345 del 14 de septiembre de 2012 «Manual de contratación del Ministerio de Defensa Nacional, y sus unidades ejecutoras 2012» y en el mismo informe técnico rendido por el profesional designado, también quedó contemplada dicha situación, a diferencia de lo afirmado por este.

Aunado a lo expuesto, en los estudios previos quedó plasmada la necesidad de creación de la Central Administrativa y Contable del ejército en el eje cafetero en la ciudad de Armenia, disponiéndose **habilitar una edificación de las existentes en la unidad militar para funcionar como CENAC**, así mismo, que se adelantara toda la etapa de escogencia del contratista y se suscribiera el contrato con esta finalidad, sin embargo, a las dos semanas de inicio de la obra, se dio un vuelco total al objeto contractual, autorizando la demolición de la estructura existente para iniciar de cero con una edificación nueva, desconociendo el principio de planeación consagrado en el Estatuto de Contratación

Revisando el nexo causal en el caso sub examine, el daño deviene desde la etapa precontractual, pues si lo que se requería era una obra nueva de dos pisos, así debió concebirse desde el comienzo y fue precisamente dentro de la gestión como ordenador del gasto del TC CALLE MORENO que se concibió el proyecto y se cambió el objeto contractual, pese a que formalmente no quedó estipulado.

Es menester aclararle al imputado que, para este despacho, el daño no se da por el recibo de una obra sin terminar, el daño es la obra en sí misma, la cual al no haber sido planeada incumple los requisitos de construcción sismo resistente y pone en riesgo a las personas que decidan habitarla

Es así como se aprecia que la planeación es de imperioso cumplimiento, pues de ella depende el éxito o fracaso de la contratación. Para el presente caso la ausencia de planeación -como pilar de la actividad comercial-, demuestra que la decisión de habilitar -mantenimiento y adecuación de obra existente - y luego de cambiar el objeto contractual, no respondió a necesidades claras y objetivamente identificadas, estudiadas, evaluadas, planeadas y presupuestadas previamente a la contratación.

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO

GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES
Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001
PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200

Si bien en sus alegaciones el Teniente Coronel aduce que su intervención no es directa, ni relevante con desembolsos de dinero, supervisión, ejecución directa de obra y recibo de la misma, dado que no ostentaba el cargo de ordenador del gasto para esta fecha, esto es 6 de octubre de 2015; fue a partir de la etapa de planeación y celebración del contrato y posteriormente autorizando el cambio de actividades, donde sí estuvo presente y se encontraba habilitado para el manejo de los recursos públicos, que se materializó la construcción de una obra que no cumplió la finalidad.

Se debe advertir que, de acuerdo a los estudios previos, el pliego de condiciones, la minuta del contrato y los ítems o actividades pactadas, la obra debía corresponder al «mantenimiento de una construcción existente» y no a la construcción de una obra nueva, como en realidad ocurrió.


En el desarrollo del presente proceso de responsabilidad fiscal, no se obtuvo prueba alguna que evidenciara el soporte técnico, ni legal, que condujera al cambio del objeto contractual, tampoco se evidencian como quedó reseñado en letras anteriores, los planos estructurales, memorias estructurales, licencia de construcción y el cumplimiento de los requisitos generales de diseño y construcción sismo resistente de la norma NSR-10.

Finalmente, en cuanto a la aseveración que el daño es potencial, debido a que existe una obra inconclusa que precisamente solo podría cumplir con la norma NSR-10 al momento de ser culminada, es preciso indicar que a este Despacho no le es dable efectuar pronunciamientos sobre supuestos, al día de hoy existe una obra que no genera ningún beneficio pues no puede ser utilizada o habitada, lo que configura un daño presente, cierto, real y cuantificable, pues la gestión realizada con los recursos públicos no logró el objetivo que se quería alcanzar

La planeación es un concepto incorporado al derecho, a través de las nociones de planeación y planificación como uno de los principales elementos técnicos planteados en la Ley 80 de 1993 y que fueron traídos de las ciencias de la administración y de la ingeniería industrial. En materia del contrato estatal de obra, es la realización en tiempo de la obra pública, acorde con lo pactado y en términos de presupuesto.

«La preocupación por la planeación obedece a la necesidad colectiva y económica de optimizar recursos, reducir costos, minimizar errores humanos y alcanzar el desarrollo de obras que son de prioridad social y no exclusivamente de orden suntuario, respecto a otras de uso restringido, que impliquen inversión no democrática o parcializada; es parte del concepto de modernización y eficiencia del Estado. La ausencia de planeación crea un uso inadecuado de los recursos públicos por desconocimiento de las necesidades y los medios con que se cuenta »³

³ Cfr. EXPOSITO VÉLEZ, Juan Carlos LA CONFIGURACION DEL CONTRATO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN EL DERECHO COLOMBIANO Y ESPAÑOL, reimp corregida y aumentada 2004, Bogotá Universidad Externado de Colombia

 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	FALLO No: 00001
	FECHA: 25 FEB 2019
	PÁGINA 79 DE 116
GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO	
GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO	
FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001 PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200	

En el ordenamiento legal colombiano la planeación no es delimitada de forma conceptual, sino que por medio de presupuestos y estudios de conveniencia y viabilidad diferentes; además de guías que sirven para darle cumplimiento como principio rector de la contratación estatal según el artículo 25 de la Ley 80 de 1993.⁴ Su implementación, difusión y desarrollo se presenta como parte del procedimiento para hacer contratos en el Estado y en materia de obras públicas, aún requiere un desarrollo práctico, desde un componente técnico y jurídico en la ejecución, para superar el nivel teórico que la limita al cumplimiento de actividades en la etapa precontractual

La planeación del contrato de obra, es más que los procedimientos legales y el cumplimiento con el ordenamiento jurídico en materia de contratación pública; porque tiene una finalidad material y social superior, que excede las fórmulas jurídicamente establecidas, toda vez que las obras contratadas deben ser las que se requieren en atención a unos planes de desarrollo vigentes que consideren cuáles son prioritarias, que existan los recursos para su plena ejecución y que no se inicien obras que no se puedan concluir, que se pague por ellas lo justo de acuerdo al mercado, que se cuente con los estudios previos necesarios, realizados en términos racionalmente económicos de tiempo, uso y compromiso de las finanzas públicas y, además, que se entreguen al servicio, con garantía por un tiempo técnicamente establecido acorde con su funcionalidad.⁵

De igual manera, se busca que se contemple su sostenibilidad y continuidad en el tiempo, para que cumplan los objetivos de la responsabilidad social y buen gobierno corporativo, para que el erario público sea aprovechado de manera óptima, sirviendo lo contratado al desarrollo con justicia social (Consejo de Estado, Sección Tercera Sentencia del 31 de agosto de 2006. Exp. 14287). Así, las entidades públicas que contratan, aparte de cumplir con la ley, lo harán dentro de estándares de calidad, planeación estratégica, normas internacionales de contabilidad e información financiera, y regulaciones de construcción, para que se minimicen los problemas de clientelismo y corrupción que históricamente han afectado la contratación pública.

⁴ «Artículo 26°.- Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio

1o Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato

2o Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas

3o Las entidades y los servidores públicos, responderán cuando hubieren abierto licitaciones o concursos sin haber elaborado previamente los correspondientes pliegos de condiciones, términos de referencia, diseños, estudios, planos y evaluaciones que fueren necesarios, o cuando los pliegos de condiciones o términos de referencia hayan sido elaborados en forma incompleta, ambigua o confusa que conduzcan a interpretaciones o decisiones de carácter subjetivo por parte de aquellos»

⁵ APONTE DÍAZ, Iriana LAS FALLAS DE PLANEACIÓN Y SU INCIDENCIA EN EL CONTRATO ESTATAL DE OBRA En REVISTA DIGITAL DE DERECHO ADMINISTRATIVO [Documento electrónico] Num 11 2014 Ed Universidad Externado de Colombia Consultada el 8 de mayo de 2017 en <http://revistas.ueexternado.edu.co/index.php/Deradm/article/view/3831/4087>

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO

GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES
Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001
PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200

En el caso de autos, se observa que el principio de planeación brilla por su ausencia.

Conforme con el material probatorio allegado a este expediente quedó probado que en la ejecución de las obras objeto del mantenimiento y adecuación, el Teniente Coronel CALLE MORENO actuó de forma negligente al no haber adoptado las medidas necesarias para garantizar la óptima inversión de los recursos, por tanto, fallará con responsabilidad fiscal en su contra a título de culpa grave, de conformidad con lo estipulado en el artículo 53 de la Ley 610 de 2000.

EDISON WILMAN MANCHEGO OROZCO, director de la Central Administrativa y Contable CENAC Armenia y ordenador del gasto, por el período 13 de marzo de 2015 al 14 de junio de 2016, quien suscribió el **contrato modificadorio No. 01 del 15-07-15** y **contrato modificadorio No. 02 del 04-09-2015**, con la empresa **RIMARCO SAS** NIT. 900.075.341-3, al contrato de mantenimiento No 078-BASPC08-2014 del 24 de diciembre de 2014 y ordenó el segundo pago del mismo

Afirma la apoderada que su cliente fue ajeno a la etapa precontractual y que fue desde el nivel central de donde se direccionó el plan de necesidades para el mantenimiento de inmuebles, estableciendo para Armenia la suma de 984 millones, que resultaron siendo finalmente solo 580 millones, por lo que tuvo que ajustarse el proyecto a dicha suma.

Observa el despacho, que en dicho direccionamiento efectivamente se emiten unas aclaraciones respecto al presupuesto asignado y a aspectos que se debían incluir en la etapa de contratación para que el proceso llegara a buen término, pero en ningún momento estaba definiendo las necesidades de ninguna unidad.

Expone también la defensora que su cliente llega a la etapa de ejecución donde advierte que al haberse dispuesto menos recursos se tuvo que ajustar el proyecto a las partidas efectivamente asignadas. Para este despacho es precisamente aquí donde la gestión fiscal del TC **MANCHEGO OROZCO** se hace relevante, pues evidenciando las irregularidades, que fueron puestas en su conocimiento tanto por el supervisor designado, como por el funcionario de la jefatura de ingenieros del nivel central, decidió continuar con la ejecución de los recursos, prueba de ello es el documento denominado informe ejecutivo de fecha 27 de marzo de 2015 obrante en medio magnético a folio 243, producto de la visita adelantada por el Teniente Diego Felipe Adrada Cardaba, en el que estuvo presente él como comandante de la unidad visitada y ordenador del gasto, donde se advierte que pese a que el contrato suscrito por el Batallón de A.S.P 0 No 08, corresponde al mantenimiento de una edificación, en obra lo que se evidenció fue que correspondía a una obra nueva, que las actividades ejecutadas no tenían una relación pues no eran contractuales, que el contrato vigente contemplaba actividades que no correspondían a una secuencia lógica para la construcción de una obra, que la demolición de la edificación preexistente no contó con el aval de la jefatura de ingenieros, que los planos del



FALLO No:	00001
FECHA:	25 FEB 2019
PÁGINA 81 DE 116	


GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO
GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO
FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001 PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200

proyecto sobre los cuales se contrató no contaban tampoco con el respectivo aval por parte de la JEING, y no ofrecían la información adecuada para su ejecución, ya que carecían de especificaciones técnicas, no ofrecían detalles acordes con el método constructivo empleado, generando vacíos en el proyecto, reflejándose en el estado de la obra.

Igualmente, se le comunicó que la interventoría no había ejercido un adecuado control de la obra, pues si bien se observó una programación, esta no correspondía a las actividades contractuales, siendo difícil establecer el estado financiero del proyecto.

Adicionalmente, se le advirtió que el contrato de la firma interventora se realizó a través de un contrato de prestación de servicios, lo cual no iba acorde con la ley de contratación, por ser esta una consultoría, que debió haber sido contratada por medio de un concurso de méritos.

Finalmente, el documento le recomendaba.

V. RECOMENDACIONES PARA EL PLANEAMIENTO (Presupuestal, complejidad, tiempos de ejecución para el diseño y construcción)
Se recomienda adelantar un estudio de patológico del estado actual de la construcción, toda vez que no se tiene registro de los estudios, ensayos y/o pruebas que permitan corroborar la calidad de la obra.
En cuanto a la firma interventora y al contratista de obra se les debe iniciar el debido proceso pues han ejecutado actividades no contempladas dentro del contrato y no se ha ejercido un adecuado control de calidad sobre estas. Por otra parte se evidencia que ninguno de los dos realizo un estudio sobre los planos y presupuesto del proyecto ya que si se hubiera realizado en una etapa previa no se habría dado inicio a la ejecución de la obra hasta que las novedades del mismo fueran subsanadas.
La firma interventora y el contratista de obra deben establecer que actividades de obra se requieren para terminar el proyecto, establecer el costo de cada una de ellas y realizar un balance financiero del proyecto. Se debe buscar una forma en la que las actividades no contempladas hagan parte del contrato para poder ser ejecutadas a fin de seguir con la construcción del proyecto. Lo anterior debe ser amparado jurídicamente para que sea viable y poder ser aplicado.
Los diseños y el presupuesto del proyecto deben ser completados por los arquitectos e ingenieros que los desarrollaron a fin de que se entregue un paquete técnico completo.
<div> FIRMA DEL PROFESIONAL</div> <div>NOMBRE Diego Felipe Adrada Cordoba CARGO Oficial de Cantones y Fuertes Militares</div>

A pesar de las observaciones y advertencias con relación a las diversas irregularidades acaecidas con la ejecución del contrato de marras, el TC

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO

GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES
Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001
PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200

MANCHEGO OROZCO no adoptó las medidas pertinentes tendientes a la conservación de los recursos de la entidad, sus actuaciones se limitaron a dictar dos (2) suspensiones del contrato, una con relación al ajuste de actividades adicionales al presupuesto y la otra referente a la ampliación del plazo de ejecución, observándose que en ninguna de ellas fue con el fin tomar los correctivos, lo que hubiera podido menguar el daño acaecido

Bajo el derrotero normativo anterior, le es predicable su condición de gestor fiscal, en la medida que tuvo el poder habilitante de manejar, administrar y velar por la adecuada utilización de los bienes y fondos asignados para el mantenimiento y adecuación de instalaciones locativas para poner en funcionamiento las oficinas del CENAC Armenia en el BASPC8, por su calidad de director, suscribiendo con la empresa RIMARCO SAS, los contratos modificatorios No. 01 y 02 del 15-07-15 y 04-09-2015 respectivamente, al contrato No. 078- BASPC08-2014, que tenía dicho objeto y con el cual se construyó y entregó una obra que no cuenta con planos estructurales, memorias estructurales, licencia de construcción y que ante todo incumple los requisitos generales de diseño y construcción sísmo resistente de la norma NSR-10, pues teniendo conocimiento de las irregularidades presentadas, siguió adelante con la ejecución de la misma, incumpliendo sus deberes legales y contractuales para evitar el detrimento o afectación del patrimonio público que le fue confiado.

En este orden, el manejo del recurso público recaía en dicho funcionario a través del cumplimiento del principio de responsabilidad a fin de satisfacer una necesidad institucional, lo que claramente se ve omitido.

Al respecto es imperioso remitirnos a la Sentencia del 31 de enero de 2001, proferida por el Consejo de Estado, Radicación No. 25000-23-26-000-1995-00867-01(17767), Consejera Ponente OLGA MELIDA VALLE DE LA HOZ, así:

« ..El principio de responsabilidad, impone al servidor público la rigurosa vigilancia de la ejecución del contrato, incluida la etapa precontractual»
(Negrillas del despacho).

Este principio busca que todos los intervinientes en la actividad contractual lo hagan dentro del marco legal, en cumplimiento de los deberes y obligaciones que le corresponde a cada cual, sin la predisposición de causar daño y con la diligencia y cuidado que es exigible en un ámbito como la contratación pública que predica por el interés general. (Consejo de Estado, 2007)

Recordemos que el principio de responsabilidad se encuentra consagrado con el fin de conservar la articulación y armonía que debe imperar para garantizar la efectividad y cumplimiento de los principios de transparencia, economía, del mantenimiento del equilibrio financiero del contrato y del deber de selección objetiva, que se encuentran desarrollados en el Estatuto de Contratación, de igual

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO

GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES
Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001
PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200

manera con el fin de asegurar un balance entre la mayor autonomía y libertad de gestión contractual que se otorga a las entidades estatales, las potestades y los privilegios que se les reconocen, y la finalidad del interés público o social que debe apuntar la actividad contractual del Estado, cual es la de satisfacer las necesidades, bajo una *gestión eficiente, económica, celera* y bajo criterios de moralidad, que garantice no sólo los intereses de la administración sino de los contratistas que intervienen en la gestión contractual.

Expresa la defensa del TC **MANCHEGO OROZCO** que el actuar de su prohijado simplemente fue incluir unas actividades importantes que habían quedado por fuera del contrato, ajustarlas al presupuesto asignado y solicitar al jefe financiero autorizar más recursos para que la obra se terminara de acuerdo a la proyección inicial, frente a lo cual este despacho considera que de haber ocurrido esta situación, es decir, de aprobarse más recursos, la cuantía del daño investigado en este proceso se habría incrementado en la suma adicional, pues se reitera, la obra no fue concebida con la debida planeación y de haberse culminado el proceso constructivo en los términos establecidos, persistirían las deficiencias técnicas ya advertidas.

En otro aparte de su defensa sostiene que el 6 de octubre de 2015, fue suscrita el acta de recibo a satisfacción del contrato por encontrarse precedida del concepto favorable del apoyo a la supervisión del grupo empresarial FARMAQ, por tanto, la responsabilidad en el seguimiento, vigilancia y control le correspondía al interventor y al contratista, olvidando que la facultad de supervisor y ordenador del gasto es indelegable y no lo exime de responsabilidad. Así se ha pronunciado la Corte en la Sentencia C-693 de 2008.

No debemos olvidar que la contratación estatal es una herramienta de gestión donde el servidor público al adelantar las actuaciones enmarcadas en las reglas contractuales, ejerce actos propios de la gestión fiscal y, en ese orden, es sujeto de la responsabilidad fiscal que se derive de la misma por daños al patrimonio público.

Los servidores públicos deben tener en cuenta que en la celebración y ejecución de los contratos estatales las entidades buscan el cumplimiento de los fines del Estado, para lo cual tienen los deberes previstos en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, entre ellos los siguientes

«1o. Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia podrán hacer al garante.

...

4o Adelantarán revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes suministrados, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, y promoverán las acciones de responsabilidad contra éstos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan.

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO

GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES
Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001
PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200

5o. Exigirán que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por las entidades estatales se ajuste a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales bienes o servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o, en su defecto, con normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscrito por Colombia...».

En el presente caso, se obtuvo informe técnico que compromete la responsabilidad fiscal del TC MANCHEGO OROZCO, para la época de los hechos, donde quedó establecido que no cumplió labores de vigilancia y control que le correspondían como ordenador del gasto y ejecutor de las obras. Si bien se observa una muy preocupante falta de planeación, también debe anotarse que seguir adelante con una obra concebida bajo unos parámetros y ejecutarla de manera improvisada, pretendiendo completar en su totalidad el alcance de un proyecto que no contaba con la apropiación presupuestal necesaria hizo más oneroso el proceso contractual objeto de las presentes diligencias

En sus argumentos de defensa se cuestiona si la modificación que hizo el Coronel fue la que produjo el daño, precisando que en el período de su gestión su cliente lo que hizo fue ajustar las especificaciones técnicas, las cantidades de obra y el presupuesto a los \$580 millones, lo cual indica que la obra no iba a quedar terminada en cuanto al proyecto inicial, sino que pretendía terminar una primera etapa de la misma dejándola en obra gris

Para el despacho el ajuste del presupuesto no era la mejor opción, toda vez, que continuar con la obra con las fallas que ésta presentaba, constituye un detrimento ocasionado por la imprevisión, la falta de planeación, la negligencia, máxime cuando las suspensiones no iban encaminadas a corregir las irregularidades configuradas desde la etapa de planeación, no constituían medidas preventivas para menguar el detrimento fiscal aquí cuestionado, aunado a ello, se demostró que la obra no presta ninguna utilidad y que tampoco puede ser habitada, pues si bien, la infraestructura existe, se encuentra inconclusa y sin uso, deteriorada como lo advierten los informes rendidos por el informe técnico, sin embargo el aspecto medular es que la obra no cumple el Reglamento Colombiano de Construcción Sismoresistente NSR-10, constituyéndose en un elefante blanco que a la postre no cumplirá su finalidad. No olvidemos, que el Ejército Nacional como entidad afectada en la declaración del siniestro por estabilidad de la obra, ordenó seguidamente su demolición, lo que reafirma el detrimento fiscal ya estimado por este despacho.

Corolario de lo expuesto, en la parte motiva de la Resolución No. 212 del 26 de diciembre de 2018, se menciona el CONCEPTO TÉCNICO donde se establece:

«Que la obra realizada mediante el contrato No. 078-BASPC8 -2014 no se encuentra en óptimas condiciones para ser puesta en funcionamiento, por lo cual se hace necesario demolerla y construir una que cumpla con las

 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	FALLO No: 00001
	FECHA: 25 FEB 2019
	PÁGINA 85 DE 116
GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO	
GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO	
FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001 PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200	

especificaciones técnicas establecidas para poder ser puesto en funcionamiento el inmueble». (Negritas del despacho).

Es de advertir que la planeación no puede limitarse únicamente a la elaboración de los estudios previos o a las medidas que tienen solo una función preventiva; sino que esta debe verse de una manera dinámica, en todas las etapas del contrato estatal hasta la entrega de la obra pública y la satisfacción del interés general, por lo que la planeación necesariamente vincula las etapas precontractual, contractual y también la post-contractual.

La Corte Constitucional en la referida Sentencia C-840 de 2001, menciona que la responsabilidad fiscal se restringe a quienes tienen la función de ordenación del gasto y la posibilidad de tomar decisiones que puedan generar un detrimento patrimonial, por lo tanto, se desprende por obvias razones, que en el desempeño del cargo, el señor TC **EDISON WILMAN MANCHEGO OROZCO** realizó actividades directamente relacionadas con la gestión fiscal, por tanto, este despacho procederá fallar con responsabilidad fiscal en su contra, por haberse demostrado que actuó con **CULPA GRAVE** en la causación del daño fiscal, presentándose el respectivo nexo de causalidad requerido en el artículo 53 de la Ley 610 de 2000.

RESPONSABILIDAD DE LA SOCIEDAD RIMARCO SAS - CONTRATISTA - REPRESENTADA LEGALMENTE POR EL SEÑOR JOISMAR NAYIBE QUIROZ QUINTERO

Respecto a la sociedad RIMARCO SAS quien se desempeñó como contratista, es de advertir que su apoderada manifestó en los correspondientes descargos, que las irregularidades en la etapa precontractual y contractual se dieron por una ausencia del principio de planeación, el cual a su criterio fue trasgredido por la entidad y era exclusivamente de su competencia, sin que le fuera posible al oferente, su prohijado, participar de esta etapa precontractual.

En este aspecto, cabe resaltar que la Ley 80 de 1993⁶ introdujo un cambio sustancial en la regulación normativa de la contratación estatal en Colombia, esta fue concebida como una ley de principios orientadores de la gestión contractual del Estado.

La Ley 80 de 1993 nominó y tipificó una serie de principios aplicables a la gestión contractual del Estado, uno de ellos que rigen la contratación estatal es el de la planeación, el cual hace referencia a aquellas actividades que deben realizar las entidades del Estado antes de adelantar un proceso de contratación encaminadas a determinar, de forma precisa, la necesidad pública que se pretende satisfacer, el

⁶ «Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública».

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO

GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES
Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001
PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200

objeto a contratar y los recursos con cargo a los cuales ejecutará el contrato, todo lo cual tiene como fin último satisfacer el interés general, haciendo uso de los recursos públicos de manera eficiente y eficaz.

Así, el principio de la planeación, se materializa en que el actuar de las entidades públicas sea coordinado -por oposición a lo improvisado-, debiéndose cumplir con una serie de disposiciones legales y reglamentarias que imponen un determinado comportamiento a cargo de las entidades del Estado, como la elaboración de estudios previos con la finalidad de determinar con precisión la necesidad pública a satisfacer y el objeto a contratar, la elaboración de estudios y diseños que permitan establecer la viabilidad del proyecto a contratar, así como la elaboración de pliegos de condiciones que contengan reglas claras y objetivas tendientes a lograr la selección de la oferta más favorable para la administración, todo ello con el fin de que la administración pública tenga plena certeza y conocimiento respecto de las necesidades y la problemática que pretende solventar mediante la contratación estatal, de forma tal que tenga absolutamente claro qué y cómo ejecutar el objeto del contrato.

No obstante lo anterior, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha proferido unas pocas sentencias (con ponencia del Dr. Orlando Santofimio Gamboa y salvamentos de voto del Dr. Enrique Gil Botero) en las cuales expone una posición completamente distinta a la decantada por años por dicha corporación, de lo cual es posible extraer los siguientes postulados

- *Que, a partir de lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 3° de la Ley 80 de 1993, comoquiera que los particulares contratistas del estado son colaboradores de la administración, se desprende que ellos también tienen deberes en el cumplimiento del principio de la planeación lo cual implica para el particular, no solo poner de presente a la entidad contratante las deficiencias en el cumplimiento de las normas sobre planeación sino, además, abstenerse de celebrar contratos en los cuales existan fallas en su planeación.*
- *Que, en razón a lo anterior, no podrá el contratista pretender el reconocimiento y pago de derechos económicos surgidos con ocasión de un contrato estatal celebrado y ejecutado con violación al principio de la planeación, por cuanto ello sería una "apropiación indebida de los recursos públicos".*
- *Que, el contrato celebrado con desconocimiento del principio de la planeación adolece de objeto ilícito, por cuanto se celebró en contravía a lo dispuesto por normas imperativas que ordenan que los contratos estatales deben ser adecuadamente planeados para la satisfacción del interés general (lo anterior se soporta en lo previsto en el artículo 1519 y 1741 del código civil, así como en las causales contenidas en los numerales 2° y 3° del artículo 44 de la ley 80 de 1993). (Negrillas de este despacho).*

El pronunciamiento expuesto, impone al contratista diversas cargas, en razón a que son colaboradores de la administración, desprendiéndose que ellos también tienen deberes en el cumplimiento del principio de la planeación lo cual implica para el

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO

GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES
Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001
PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200

particular, no solo poner de presente a la entidad contratante las deficiencias en el cumplimiento de las normas sobre planeación sino, además, abstenerse de celebrar contratos en los cuales existan fallas en la misma, por ello para este despacho no son de recibo los argumentos del contratista al manifestar que RIMARCO SAS al afirmar que las irregularidades en la etapa precontractual y contractual se dieron por una ausencia del principio de planeación contractual, olvidando que como tal es un colaborador del Estado y debía advertir en su calidad las anomalías presentadas en el contrato de obra que llama la atención del despacho.

Aunado a lo anterior y retomando las consideraciones expuestas por el CENAC en la Resolución No.212 del 26 de diciembre de 2018, por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición, contra el acto administrativo que declaró el siniestro de la obra, se tiene que: «. si desde su perspectiva profesional se percató de la falta de planeación por parte de la entidad por qué manifestó su interés en presentar su oferta y peor aún por qué la ejecutó y la entregó como consta en la respectiva acta de recibo a satisfacción, lo cual resulta contradictorio pues los contratistas bajo el principio de responsabilidad y ética profesional están en la obligación de oponerse a la ejecución de una obra pública cuando esta no es acorde a los parámetros de la ingeniería o de la construcción para que esta sea funcional, es decir, nos demuestra que desde el inicio usted conocía de vicisitudes en la planeación y pese a esto aceptó ejecutarla, por ende para la entidad no se configura la excepción interpuesta »

Así mismo, dentro del material probatorio obrante en el plenario, efectivamente se da cuenta de la falta de planeación, sin embargo, se reitera que ello no fue advertido por RIMARCO SAS actuando como contratista, pues en su propuesta obrante a folios 243 del expediente, indicó:

«Que conocemos la información general, las especificaciones técnicas generales y particulares, los estudios previos, el pliego de condiciones, las adendas y demás documentos de esta Selección de mínima cuantía y aceptamos los requisitos en ellos contenidos».

Frente al argumento que la convocatoria adelantada por la entidad no consagraba la sujeción a las normas sismo resistentes pues en los estudios previos no se indicó nada acerca de las mismas ya que el objeto inicial de este contrato era el mantenimiento y adecuación de la infraestructura existente, itera este despacho que el objeto contractual se cambió de una manera tajante, pues ya no era habilitación y mantenimiento de obra existente sino construcción de obra nueva, evidenciándose dentro del plenario que el contratista no cumplió para ejecutarla hasta su culminación con las normas técnicas obligatorias relativas al Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR10, tal y como quedó analizado en el informe técnico rendido por el ingeniero civil de este ente de control cuando advierte:

... Sin embargo, no se evidenció en el expediente contractual la existencia de Planos Estructurales, Memorias Estructurales y más delicado aún, licencia de

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO

GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES
Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001
PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200

construcción la cual debía incluir también la autorización de demolición total, contraviniendo la Ley 400 de 1997 "por la cual se adoptan normas sobre construcciones sismo resistentes" y el Decreto 1469 de 2010 "por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones, a la función pública que desempeñan los curadores urbanos y se expiden otras disposiciones"

La normatividad indica que la revisión de los diseños, planos, memorias y estudios realizados deben ser revisados para efectos de la obtención de la licencia de construcción, por la curaduría o las oficinas o dependencias encargadas de estudiar, tramitar, y expedir las licencias de construcción, tal como lo indica la Ley 400 de 1997, la Ley 388 de 1997 y sus respectivos reglamentos

Esboza que la obra que se iba a construir estaba en unas deficientes condiciones y que la constructora consideró que ahí no se podía hacer nada, que había que demoler y ya el objeto tenía que cambiar pues no era un mantenimiento sino una construcción. En este aspecto observa el despacho que el contratista está alegando su propia culpa *-nemo auditur propriam turpitudinem-* pues no olvidemos que fue decisión suya la demolición de la obra, tumbando la existente, cambiando el objeto contractual, sin cumplir con los trámites y licencias que ello conlleva, y dejando de lado las normas de sismoresistencia, las cuales constituyen protocolos esenciales de obligatorio cumplimiento, sin que sirva de excusa expresar que la entidad incurrió en mora en la entrega del paquete técnico.

Afirma, que las deficiencias del presupuesto, proyectado inicialmente en 984 millones obligaron a que tuvieran que ajustarse las actividades en un contrato de obra por 584 millones, lo cual no cubría todo el proyecto y que el contratista ejecutó el 100% del presupuesto. En este aspecto el despacho ya se pronunció en lo pertinente al TC **EDISON WILMAN MANCHEGO OROZCO**, tanto en lo relativo con el presupuesto asignado, así como con el cumplimiento del principio de planeación.

La apoderada aduce también la inexistencia del daño puesto que asumieron realizar el reforzamiento de la estructura, de acuerdo a los requerimientos técnicos indicados por los ingenieros en el informe de fecha 22 de mayo de 2018, comprometiéndose a entregar los ajustes el 6 de agosto de 2018. Aquí se hace necesario reiterar lo expuesto no solo por el funcionario de apoyo técnico designado en este proceso sino también lo plasmado en el acta de inspección efectuada el 19 de octubre de 2018, ambas realizadas con posterioridad a los compromisos asumidos por el contratista, en las instalaciones del CENAC - sitio de la obra-, consistente en «REVISION DOCUMENTACIÓN ESTRUCTURAL EXISTENTE REGISTRO FOTOGRÁFICO EDIFICACIÓN "CACIQUE CALARCA", donde se evidencia que el edificio en construcción no cumple con lo establecido en la norma sismo resistente:

A continuación se traen a colación las conclusiones de los informes originados al respecto (Fs. 1559-1568; 1730-1731).

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO

GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES
Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001
PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200

Todo lo anterior permite concluir que las actividades adicionales efectuadas por el contratista de la obra, específicamente **el recalce de las columnas no es suficiente para lograr que la edificación construida cumpla las condiciones de Sismo Resistencia exigidas por el Reglamento NSR-10.**

Las circunstancias evidenciadas ameritan que cualquier intervención adicional que se decida realizar en la edificación, con el fin de permitir su uso, deba ser planeada y justificada adecuadamente, de conformidad con los requisitos, criterios y procedimientos que resulten de un juicioso estudio de vulnerabilidad sísmica, tal como lo expone también el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistentes.

El Reglamento NSR-10 establece los requisitos que deben ser utilizados para llevar a cabo la evaluación del comportamiento sísmico y el diseño de la intervención, reparación o refuerzo de la estructura de edificaciones que se modifiquen o rehabiliten en el territorio nacional

Bajo las anteriores condiciones, comedidamente se solicita a la Colegiatura que se tenga en cuenta que con anterioridad a una posible nueva visita técnica para verificar actividades de reparación de la edificación de la CENAC Armenia, se exija la entrega oportuna y completa de los cálculos, memorias y planos que demanda el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistentes.

Por último, se indica que actualmente, la edificación con la intervención hecha aún no ha subsanado los diferentes puntos planteados como incumplidos en el informe inicial que reposa en el expediente... (Negrillas fuera del texto).

IV. OBSERVACIONES

- Se detectan graves fallas de conexión entre elementos estructurales, además de ausencia de los mismos.
- Existen 2 columnas intermedias que se logró visualizar que **no cuentan** con conexión a la placa de entrepiso por lo cual **no hacen parte del sistema estructural**, además por cielo rasos no se logró establecer cuantas de éstas columnas están bajo esta grave condición.
- Se aprecia que la mayoría de las vigas principales 30cmx30cm establecidas en el informe de vulnerabilidad, **no existen**. Además las riostras para deflexiones no son de concreto sino de bloque de mampostería, material no apto como componente estructural,
- El informe de vulnerabilidad suministrado por la unidad y realizado por RIMARCO S.A.S. y MASERRA ingeniería y arquitectura **no corresponde** con la realidad observada en la presente visita
- El recalce de las columnas que se recomendó en el anterior informe, **no fue** realizado bajo los parámetros de calidad establecidos para estas intervenciones, **no** fue realizado con buena calidad de concreto, no se escarifico la columna, **no** se realizó en toda la longitud del elemento, **no** se utilizaron materiales de adherencia, **no** se aumentó la cuantía del refuerzo de las columnas por lo que incumple con el 1% mínimo exigido en la NSR-10.

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO

GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES
Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001
PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200

- Como se mencionó en el anterior informe "es un concepto técnico elaborando un modelo estructural sobre el estado de la edificación, el cual se basó en materiales, cuantías y secciones del informe MASERRA ingeniería y arquitectura " Verificada la información de dichos estudios no son reales, la validez del anterior informe es nula
- Por lo anterior y según la definición de pórtico de los sistemas estructurales A 3 2 1 NSR-10, esta edificación **no cumple** con las condiciones mínimas exigidas en la misma.

Afirma que RIMARCO SAS no puede catalogarse como gestor fiscal, no puede ser objeto de responsabilidad fiscal. Al respecto este despacho tampoco comparte lo afirmado por la apoderada al manifestar que su representado por ser considerado un particular contratista, no sea sujeto de responsabilidad fiscal, advirtiéndole que no administró recursos o patrimonio, pues está demostrado que él fungió como contratista y por ende, ejecutó el contrato de mantenimiento y adecuación No. 078-BASPC08-2014 del 24 de diciembre de 2014 objeto de la denuncia, siendo preciso reiterar que la responsabilidad fiscal se predica no sólo de los servidores públicos sino de toda persona natural o jurídica que con ocasión de su participación funcional o contractual, contribuyan en forma condicionante y determinante a que el daño patrimonial se cause.

En el presente caso RIMARCO SAS no es considerado gestor fiscal, pero sí su responsabilidad está direccionada a que en calidad de contratista -servidor del Estado- contribuyó de manera condicionante y determinante en la generación del detrimento patrimonial que aquí se predica.

La Sentencia C-840 de 2001 es clara en afirmar:

*Así las cosas, debe verificarse si, adicional y complementariamente a la participación del gestor fiscal, servidores públicos o particulares habilitados reglamentaria o contractualmente, intervinieron en forma determinante y condicionante a la generación del daño fiscal. **Con esto se afirma que una es la participación del gestor fiscal y otra la de quien contribuye condicionante y determinantemente a la generación del daño fiscal...***

*De acuerdo con esto, existirían dos categorías de posibles responsables fiscales el gestor fiscal, que tiene la titularidad jurídica y material para disponer de ellos, administrar e invertir recursos o bienes públicos, **y, en segundo lugar, quienes, con ocasión de su participación funcional o contractual, contribuyan en forma condicionante y determinante a que el daño patrimonial se cause...*** (Negritas fuera del texto).

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO

GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES
Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001
PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200

Consecuentemente, si el objeto del control fiscal comprende la vigilancia del manejo y administración de los bienes y recursos públicos, forzoso es reconocer que a las entidades fiscalizadoras les atañe investigar, imputar cargos y deducir responsabilidades en cabeza de quienes, en el manejo de tales haberes, o con ocasión de su gestión, produzcan o contribuyan a causar un daño al patrimonio del Estado por acción u omisión, tanto en forma dolosa como gravemente culposa. (Sentencia C-840 de 2001).

De acuerdo con lo expuesto, la gestión fiscal presuntamente irregular puede producir un daño al patrimonio del Estado de manera directa o indirecta, el primer caso ocurre cuando se trata de un gestor fiscal típico (concurren todos los elementos definitorios de la gestión fiscal), mientras que en el segundo interviene un servidor público o particular que no es gestor fiscal de los recursos involucrados pero que con ocasión de la gestión fiscal contribuye a la producción del daño, mediante una relación de conexidad próxima y necesaria.

En este aspecto, se retoma lo estipulado por la Honorable Corte Constitucional la cual declaró exequible la expresión « *con ocasión de la gestión fiscal* » que se establece en el artículo 1 de la Ley 610 de 2000, y definió el contexto en que se debe aplicar dentro del proceso de responsabilidad fiscal, así:

«...el sentido unitario de la expresión o con ocasión de ésta sólo se justifica en la medida en que los actos que la materialicen comporten una relación de conexidad próxima y necesaria para con el desarrollo de la gestión fiscal...».
(Negrillas del despacho).

A su vez, el artículo 6º de la Ley 610 de 2000, enseña que el daño patrimonial al Estado « *podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público...*» (Negrillas del despacho)

Considera este cuerpo colegiado, que la empresa RIMARCO SAS por intermedio de su representante legal, en calidad de particular contribuyó con la gestión fiscal fallida y recibió el valor del contrato aun cuando la obra producto del mismo, no se puede utilizar porque no cumple con las normas de diseño y construcción sismo resistente, lo que puede poner en peligro la vida de sus ocupantes, contraviniendo el principio de responsabilidad consagrado en el artículo 26, numeral 8 del Estatuto General de la Contratación Estatal, Ley 80 de 1993, el cual indica.

«Los contratistas responderán y la entidad velará por la buena calidad del objeto contratado».

A su vez, el artículo 5º de los derechos y deberes de los Contratistas, a la letra estipula



FALLO No: 00001

FECHA: 25 FEB 2019

PÁGINA 92 DE 116

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO

GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES
Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001
PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200

Colaborarán con las entidades contratantes en los que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla que éste sea de la mejor calidad; acatarán las órdenes que durante el desarrollo del contrato ellas les impartan y, de manera general, obrarán con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las dilaciones y entramientos que pudieran presentarse.

...

Garantizarán la calidad de los bienes y servicios contratados y responderán por ello

Se reitera que los contratistas, con los que cumplen sus cometidos las entidades del Estado, son personas naturales o jurídicas, privadas o públicas, que ejercen la ejecución de una labor o actividad, o que deben asumir la realización de una determinada prestación, según la especificidad del objeto del contrato, a cambio de una contraprestación.

No se puede perder de vista que los contratistas del Estado, no solamente asumen una posición contractual, sino que adicionalmente, se convierten en sus colaboradores, con el fin de cumplir y satisfacer las finalidades y necesidades requeridas por la comunidad, logrando la adecuada inversión de recursos y el objetivo, como es el interés general; en este sentido se ha pronunciado la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-563 del 07 de octubre de 1998, magistrados ponentes ANTONIO BARRERA CARBONELL y CARLOS GAVIRIA DIAZ, así:

..

Los contratistas, como sujetos particulares, no pierden su calidad de tales porque su vinculación jurídica a la entidad estatal no les confiere una investidura pública, pues si bien por el contrato reciben el encargo de realizar una actividad o prestación de interés o utilidad pública, con autonomía y cierta libertad operativa frente al organismo contratante, ello no conlleva de suyo el ejercicio de una función pública

*Lo anterior es evidente, si se observa que el propósito de la entidad estatal no es el de transferir funciones públicas a los contratistas, las cuales conserva, **sino la de conseguir la ejecución práctica del objeto contractual, en aras de realizar materialmente los cometidos públicos a ella asignados.** Por lo tanto, por ejemplo, en el contrato de obra pública el contratista no es receptor de una función pública, su labor que es estrictamente material y no jurídica, **se reduce a construir o reparar la obra pública que requiere el ente estatal para alcanzar los fines que le son propios. Lo mismo puede predicarse, por regla general, cuando se trata de la realización de otros objetos contractuales** (suministro de bienes y servicios, compraventa de bienes muebles, etc.)*

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO

GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES
Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001
PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200

*En las circunstancias descritas, el **contratista se constituye en un colaborador o instrumento de la entidad estatal para la realización de actividades o prestaciones que interesan a los fines públicos**, pero no en un delegatario o depositario de sus funciones...* (Negrillas del despacho).

Lo anteladamente expuesto permite concluir que la conducta del mencionado contratista se encuentra seriamente comprometida, debiendo de conformidad con la graduación de la culpa establecida en el artículo 63 del Código Civil, en concordancia con lo preceptuado por la Ley 678 de 2001, como criterio auxiliar de interpretación, calificarla de **GRAVEMENTE CULPOSA**, pues su resultado o consecuencia, trajo consigo la causación de un perjuicio a los intereses patrimoniales del Ministerio de Defensa Nacional - Batallón de Servicios para el Apoyo y Combate No 08 «Cacique Calarcá» - BASPC8, configurándose además el nexo causal requerido, lo que da lugar a que este despacho profiera en su contra fallo con responsabilidad fiscal, al tenor de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 610 de 2000, en concordancia con lo establecido en la Ley 1474 de 2011.

RESPONSABILIDAD DEL GRUPO EMPRESARIAL FARMAQ S.A.S. REPRESENTADO LEGALMENTE POR EL SEÑOR JOSÉ WILLIAM ADARME ALBARRACÍN, QUIEN EJECUTÓ EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 079-BASPC08-2014:

La supervisión es el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercido por la misma entidad estatal cuando no se requieren conocimientos especializados.

Se precisa que en virtud del contrato No. 079-BASPC08-2014, cuyo objeto consistió en prestar el apoyo a la supervisión al mantenimiento y adecuación de instalaciones locativas y red LAN para poner en funcionamiento las oficinas del CENAC Armenia en el BASPC8, tenía las siguientes obligaciones contractuales:

B. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: . n) Velará por el cumplimiento de la ley 400 de 1997 -Normas Colombianas de Diseño y Construcción sismo resistente (NRS-2010), en lo referente a responsabilidades de los profesionales, materiales, métodos alternos de diseño y construcción, calidades y requisitos de los profesionales etcétera; (Subrayas fuera de texto)

Igualmente, se obligó a lo siguiente

Le corresponde al contratista en su labor de apoyo a la supervisión, además de las obligaciones establecidas en la ley y las aquí determinadas, el cumplimiento de las siguientes obligaciones

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO

GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES
Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001
PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200

- *Informar oportunamente al batallón de ASPCNO 8, sobre el incumplimiento total o parcial de parte del contratista de las obligaciones del contrato*
- *Suscribir el recibido a satisfacción del objeto contratado, el cual servirá de soporte para efectuar los pagos al contratista y para verificar el cumplimiento del contrato*
- *Realizar reuniones con el supervisor del contrato, por lo menos una (1) reunión por cada dos (2) semanas, con el fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas que documenten el estado del mismo*
- *Elaborar los documentos de justificación, debidamente soportados y aprobados por el ejército nacional-batallón ASPCNo.8 relacionados con la viabilidad o no de las solicitudes de modificación, suspensión, reiniciación o liquidación del contrato*

De Carácter Técnico frente al contrato de Obra sobre el cual se ejercen actividades de apoyo a la supervisión, Control y Vigilancia.

- *Apoyar la Verificación que el contratista cumpla con las obligaciones técnicas de las obras, así como con las normas ambientales correspondientes.*

En la oferta el grupo FARMAQ afirma (CD F.243):

«Que conocemos la información general, las especificaciones técnicas generales y particulares, los estudios previos, el pliego de condiciones, las adendas y demás documentos de esta INVITACIÓN PARA PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA # 024 de 2014 y aceptamos los requisitos en ellos contenidos y en la ley

Que en caso de que nos sea adjudicada la INVITACIÓN PARA PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA # 024 de 2014 de la referencia, me comprometo a ejecutar totalmente el objeto del contrato, en el plazo establecido en los estudios previos y en los pliegos de condiciones, contado a partir de la fecha de iniciación del mismo ...».

No olvidemos que dentro de las obligaciones contractuales quedó estipulado entre otras:

«Velará por el cumplimiento de la ley 400 de 1997 -Normas Colombianas de Diseño y Construcción sísmo resistente (NRS-2010), en lo referente a responsabilidades de los profesionales, materiales, métodos alternos de diseño y construcción, calidades y requisitos de los profesionales etcétera».

La obligación en comento, no se cumplió, pues durante el desarrollo del proceso y de acuerdo al informe técnico del funcionario de este ente de control, al igual que del informe plasmado por ingenieros del CENAC, la obra no se ejecutó acatando la normativa de sismoresistencia, tal y como se afirma:

... Sin embargo, no se evidenció en el expediente contractual la existencia de Planos Estructurales, Memorias Estructurales y más delicado aún, licencia de

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO

GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES
Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001
PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200

construcción la cual debía incluir también la autorización de demolición total, contraviniendo la Ley 400 de 1997 "por la cual se adoptan normas sobre construcciones sismo resistentes" y el Decreto 1469 de 2010 "por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas, al reconocimiento de edificaciones, a la función pública que desempeñan los curadores urbanos y se expiden otras disposiciones"

La normatividad indica que la revisión de los diseños, planos, memorias y estudios realizados deben ser revisados para efectos de la obtención de la licencia deconstrucción, por la curaduría o las oficinas o dependencias encargadas de estudiar, tramitar, y expedir las licencias de construcción, tal como lo indica la Ley 400 de 1997, la Ley 388 de 1997 y sus respectivos reglamentos.

Por otro lado, el representante legal de FARMAQ S.A.S. manifestó en los correspondientes descargos, que la naturaleza jurídica del contrato celebrado 079 BASPC08 de 2014, era de apoyo a la supervisión y no de interventoría, trayendo a colación en qué consiste la misma de acuerdo a definiciones de Colombia Compra Eficiente, para concluir que las obligaciones no pueden ser contrarias al objeto del contrato, el cual era apoyo a la supervisión, y que este apoyo no le da al grupo empresarial la calidad de gestor fiscal, pues no tomaba decisiones y por lo tanto no podría estar vinculado a este proceso

En cuanto a ser considerado gestor fiscal, este tema ya fue aclarado en letras anteriores.

Este despacho no discute la condición del contratista de ser un apoyo a la supervisión, pero sí considera que esta no era la figura jurídica a la que se debió acudir, lo cual fue puesto en evidencia por la jefatura de ingenieros que expresó que de acuerdo al Estatuto General de Contratación se debió emplear un contrato de interventoría, sin embargo, más allá de la modalidad, el grupo FARMAQ SAS debía cumplir una serie de obligaciones de seguimiento y control del contrato, así como la de constatar el cumplimiento de una norma técnica obligatoria como lo es la NSR-10, aspecto básico que no requería de conocimientos técnicos especializados, independiente de la forma de la contratación estatal.

El supervisor e interventor debe exigir el cumplimiento de las normas técnicas obligatorias de la obra y certificar el recibo a satisfacción, únicamente cuando la obra ha sido ejecutada a cabalidad.

En cuanto a que debe ser desvinculado del presente proceso así como lo fue el supervisor del mismo, se hace necesario acotar que las circunstancias son completamente distintas, pues se comprobó que el supervisor no ocasionó con su conducta, el daño aquí predicado, no ocurriendo lo mismo con FARMAQ SAS.

Por último es necesario acotar que tal y como se desprende del **Acta de recibo final de obra y del acta de recibo a satisfacción, ambas de fecha 06 de octubre**

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO

GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES
Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001
PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200

de 2015, el grupo FARMAQ omitió el cumplimiento de las obligaciones contractuales, siendo negligente en cuanto a la observancia de las mismas, toda vez, que con su aval permitió que durante el proceso contractual se ejecutara una obra que no puede ser utilizada o habitada por incumplir los requisitos de construcción sísmo resistente establecidos por la Ley 400 de 1997 y en el Reglamento Colombiano de Construcción Sísmo Resistente NSR-10, ocasionando un perjuicio para los intereses de la entidad afectada

Puntualizadas las obligaciones y deberes contractuales que adquirió el GRUPO EMPRESARIAL FARMAQ S.A.S. - NIT. 900.129.037-2, representado legalmente por el señor JOSÉ WILLIAM ADARME ALBARRACÍN, todas ellas de apoyo a la supervisión del contrato No. 078-BASPC08- 2014, encontramos que tenía necesariamente deberes de seguimiento, vigilancia y control de las obligaciones a cargo del contratista. Estaba obligado a realizar una gestión permanente del objeto del contrato que debían vigilar y debían informar al contratante de los posibles incumplimientos o circunstancias que ponían en riesgo la ejecución del contrato, obligaciones contractuales que no ejecutó en debida forma y las cuales se reitera se comprometió a ejecutar en virtud del plurimencionado contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 079-BASPC08-2014, situación que lleva al despacho a concluir con certeza que el **GRUPO EMPRESARIAL FARMAQ S.A.S.**, a través de su representante legal señor **JOSÉ WILLIAM ADARME ALBARRACÍN**, actuó con **CULPA GRAVE**, pues su conducta fue negligente y descuidada al suscribir el acta de recibo final de obra y el acta de recibo a satisfacción de fecha 06 de octubre de 2015, omitiendo los deberes contractuales a los que se comprometió, recibiendo una edificación que no puede ser utilizada o habitada y ocasionando un perjuicio para los intereses de la entidad afectada, irregularidades que el supervisor del contrato de mantenimiento y adecuación No. 078-BASPC08-2014, MY EDWIN ALFONSO BARRERA PÉREZ, advirtió en las actas de supervisión No. 01, 02 y 03, y que se retoman en el informe final de supervisión, dejando plasmadas entre otras las siguientes observaciones:

- A esta obra se le dio inicio sin presentar el soporte y aval de la Jefatura de Ingenieros, no cuenta con paquete técnico.
- RIMARCO SAS ha realizado cambios sin consultar la entidad
- El diseño en ejecución es diferente a los planos que tiene la unidad
- En la obra se evidencia una demolición completa de la instalación existente, no existe estudio de suelos, ni estructural para obra nueva
- Se desconoce por parte del supervisor las razones por las cuales se vienen adelantando estas actividades sin que estas hayan sido puestas en conocimiento de la entidad por parte de la interventoría.
- Se evidencia por parte del supervisor de la obra una falta de acompañamiento, asesoría y seguimiento de la firma que está adelantando la interventoría ya que a la fecha transcurridos dos meses después del inicio de la obra, la entidad solo cuenta con un informe emitido por la interventoría.

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO

GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES
Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001
PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200

- *Se recomienda al ordenador del gasto la suspensión de la obra hasta tanto no se aclare por parte del contratista y la interventoría el estado actual de ejecución de la obra respecto de lo contratado contra lo ejecutado.*

Del informe en cita, con el cual el supervisor pone en conocimiento las falencias tanto en la etapa precontractual como en su ejecución directa, no se allega al plenario prueba alguna que demuestre el cumplimiento del negocio contractual por parte del apoyo a la supervisión, al igual que no se observan las gestiones desplegadas por las partes intervinientes para enmendar lo previamente advertido.

En lo que concierne al supervisor del Contrato de Mantenimiento y Adecuación No. 078-BASPC08-2014, MY EDWIN ALFONSO BARRERA PÉREZ, el despacho no observó en el momento de la apertura e imputación del proceso, al igual que en esta etapa procesal una indebida gestión fiscal en su actuar, por el contrario, con lo evidenciado en las Actas de Supervisión Nos. 01, 02 y 03, y del Informe Final de Supervisión, se observa que en ellas él advirtió varias irregularidades en la ejecución del contrato objeto de supervisión, demostrando con ello el cumplimiento de su obligación a través de labores de seguimiento y control, destacándose que las observaciones no fueron tenidas en cuenta por los ordenadores del gasto, ni fueron motivo de pronunciamiento por parte del contratista (RIMARCO SAS), ni del GRUPO EMPRESARIAL FARMAQ S.A.S., razón por la cual esta colegiatura se abstuvo de vincularlo al presente proceso de responsabilidad fiscal, por no encontrar configurados los requisitos del artículo 5º, ni 48 de la Ley 610 de 2000, ni del artículo 97 de la Ley 1474 de 2011 para proceder a su vinculación e imputación de responsabilidad fiscal.

Por lo enunciado, este despacho considera que el grupo empresarial FARMAQ SAS Presentó una deficiente labor al no realizar seguimiento y control a las actividades constructivas ejecutadas.

no cumplió con su deber de supervisión con relación al seguimiento, monitoreo y control de la obra, por tanto, los argumentos de defensa no son de recibo, procediendo a fallar con responsabilidad fiscal en su contra, y confirmando lo establecido en el auto de apertura e imputación que su actuar fue con CULPA GRAVE y que se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 5º de la Ley 610 de 2000 y el artículo 53 ibídem.

Por último y una vez analizados los diferentes argumentos de defensa y alegatos de conclusión, y considerando que todos los sujetos procesales coinciden en afirmar que al existir un proceso sancionatorio contractual en el cual se declaró la ocurrencia del siniestro por la estabilidad de la obra, este despacho no debe continuar con el proceso de responsabilidad fiscal y menos dictar fallo con responsabilidad fiscal; debiéndose aclarar que de conformidad con la Ley 610 del 2000, la acción fiscal es autónoma respecto de cualquier otro tipo de acción tanto en

 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	FALLO No: 00001
	FECHA: 25 FEB 2019
	PÁGINA 98 DE 116
GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO	
GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO	
FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001 PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200	

sede judicial como administrativa. En este orden de ideas, los parámetros de juzgamiento de la causa fiscal están establecidos con el fin de determinar la responsabilidad generada en la gestión o administración de recursos públicos por parte de servidores públicos y de particulares, proceso que se podrá llevar a cabo con base en los mismos supuestos fácticos que también generen responsabilidades distintas a esta, como lo podrían ser la civil, la penal y la disciplinaria.

Así mismo, se recalca que el proceso de responsabilidad fiscal tiene por objeto el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público mediante el pago de una indemnización pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal⁷, situación que a la fecha no se ha presentado en este trámite fiscal de manera total, como tampoco se dio la reposición de las obras al tenor de lo contemplado en el artículo 111 de la Ley 1474 de 2011.

En virtud de lo anterior, y analizadas las respectivas responsabilidades de los presuntos responsables fiscales, es dable concluir que el daño se generó por el ejercicio de una gestión fiscal antieconómica, ineficiente e ineficaz, por parte de quienes administraron dineros de naturaleza pública y de quienes contribuyeron con el acaecimiento del mismo, a quienes les correspondía su custodia, respecto de cuyos verbos rectores (custodiar, administrar, gastar, invertir) debe centrarse el título y grado de responsabilidad.

11.3 UN NEXO CAUSAL ENTRE EL DAÑO Y LA CONDUCTA.

Implica que entre la conducta y el daño debe existir una relación determinante y condicionante de causa-efecto, de manera que el daño sea el resultado de una conducta activa u omisiva.

Para esta instancia los presuntos responsables fiscales no actuaron con la diligencia requerida, con el cuidado especial y obligado que debe darse a la administración y disposición de los recursos públicos.

Es evidente para este ente de control, que se responsabiliza a los procesados, toda vez, que el ejercicio de la gestión fiscal tiene como finalidad la protección del patrimonio público, la transparencia y moralidad en todas las operaciones relacionadas con el manejo y utilización de los bienes y recursos públicos y la eficiencia y eficacia de la administración en el cumplimiento de los fines del Estado, situación que no ocurrió en el caso sub examine y que condujo a la causación del daño. Dicha relación de causalidad de la conducta de los presuntos responsables con el detrimento patrimonial se da por la falta de diligencia, el poco cuidado y el descuido en la administración de los recursos públicos, lo cual se erige en la causa principal y fundante del detrimento estatal, evidenciándose que los citados

⁷ Artículo 4 Ley 610 de 2000

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO

GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES
Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001
PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200

responsables fiscales quebrantaron con culpa grave la norma legal y en consecuencia causaron lesión al patrimonio del Estado en cuantía de **QUINIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M-CTE CON 19 CTVS (\$541.803.439,19)**.

Vale decir, que emerge con toda claridad el **nexo de causalidad o relación causa - efecto**, toda vez que en la valoración del elemento de la conducta, está suficientemente demostrado que desde su posición en la entidad, el actuar de quienes obran como presuntos responsables fiscales señores **FERNANDO DE JESÚS CALLE MORENO**, quien ostentó la calidad de comandante y ordenador del gasto del batallón BASPC No. 08 «CACIQUE CALARCÁ», obrando como contratante; **EDISON WILMAN MANCHEGO OROZCO**, quien ostentó la calidad de director de la Central Administrativa y Contable CENAC Armenia, también contratante; **RIMARCO SAS**, representada legalmente por el señor **JOISMAR NAYIBE QUIROZ QUINTERO**, quien ejecutó el contrato de mantenimiento y adecuación No. 078-BASPC08-2014, en calidad de contratista y el **GRUPO EMPRESARIAL FARMAQ S.A.S.** representado legalmente por el señor **JOSÉ WILLIAM ADARME ALBARRACÍN**, quien ejecutó el contrato de prestación de servicios profesionales No. 079-BASPC08-2014, el cual tenía por objeto prestar apoyo a la supervisión técnica, administrativa y financiera frente al contrato de mantenimiento y adecuación No. 078- BASPC08-2014, es decir, el mencionado menoscabo patrimonial deviene de un proceder inexcusablemente omisivo y manifiestamente violatorio de normas y principios de orden constitucional, constituyente del resultado inexorable de la conducta de quienes ejercieron directamente gestión fiscal y de quienes con ocasión de su gestión contribuyeron con la gestión fiscal fallida, existiendo una verdadera relación determinante y condicionante de causa - efecto, teniendo en cuenta, como atrás quedó reseñado, que su actuar fue negligente y carente de cuidado lo que por ende, se tradujo en un daño para el Estado.

XII. SOBRE LA SOLIDARIDAD DE LOS IMPUTADOS

Al respecto es necesario indicar que en un proceso de responsabilidad fiscal no es procedente que se divida a prorrata el daño producido, cuando hubiere lugar a establecer una responsabilidad solidaria, por cuanto dicho daño es jurídicamente indivisible

En tal sentido, el artículo 119 de la Ley 1474 de 2011 estableció:

«SOLIDARIDAD. En los procesos de responsabilidad fiscal... en los cuales se demuestre la existencia de daño patrimonial para el Estado proveniente de sobrecostos en la contratación u otros hechos irregulares, responderán solidariamente el ordenador del gasto del respectivo organismo o entidad contratante con el contratista, y con las demás personas que concurran al

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO

GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES
Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001
PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200

hecho, hasta la recuperación del detrimento patrimonial» (Negrillas del despacho).

De esta forma, la solidaridad se predica en el proceso de responsabilidad fiscal, cuando varias personas concurren en las actividades de gestión fiscal, o sea el ordenador del gasto y representante de la entidad contratante, con el contratista y con las demás personas que concurren al hecho, cuando se demuestre la existencia del daño patrimonial para el Estado provenientes de sobrecostos en la contratación u otros hechos irregulares.

Por lo expuesto, resulta predicable la existencia de la solidaridad con ocasión de la gestión fiscal cuestionada respecto de los señores Teniente Coronel FERNANDO DE JESÚS CALLE MORENO, Teniente Coronel EDISON WILMAN MANCHEGO OROZCO - Contratantes -; RIMARCO SAS - Contratista, a través de su representante legal señor JOISMAR NAYIBE QUIROZ QUINTERO y el GRUPO EMPRESARIAL FARMAQ S.A.S, quien tenía obligaciones de supervisión detallados en el contrato de prestación de servicios profesionales No. 079-BASPC08-2014 obrando por medio de su representante legal señor JOSÉ WILLIAM ADARME ALBARRACÍN, de quienes fue debidamente acreditada las calidades de los primeros como servidores públicos para la época de los hechos al servicio de la institución castrense, y con relación al contratista y al supervisor, en el monto del daño patrimonial.

**XIII. DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LOS TERCEROS
CIVILMENTE RESPONSABLES**

En el presente y caso y de acuerdo a lo consagrado en el artículo 44 de la Ley 610 de 2000, por auto No. 00091 del 21 de noviembre de 2017 (Cd 591-630), fueron vinculadas al presente proceso verbal de responsabilidad fiscal en calidad de terceros civilmente responsables la compañía de seguros **QBE SEGUROS S.A.** NIT. 860.002.534-0, como aseguradora líder, por la póliza de manejo para entidades oficiales No. **000705407955**, expedida el 19 de enero de 2015, vigente desde el 2015/01/01 hasta 2015/12/31, por un valor asegurado de \$1.000.000.000,00 y como coaseguradoras la misma compañía con un porcentaje de participación del 21 5% por un valor asegurado de \$215.000.000, MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. con un porcentaje de participación del 11.9999967% por un valor asegurado de \$119.999.967; LA PREVISORA S.A. con un porcentaje de participación del 21 5000039%. por un valor asegurado de \$215.000.039; SEGUROS COLPATRIA S.A. con un porcentaje de participación del 22 4999997%, por un valor asegurado: \$224 999 997 y ALLIANZ SEGUROS S.A. con un porcentaje de participación del 22 4999997% por un valor asegurado de \$224.999.997 Igualmente la póliza No. **000706237137**, expedida por la compañía líder **QBE SEGUROS S.A**, el 4 de enero de 2016, vigente desde el 2016/01/01

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO

GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES
Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001
PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200

hasta el 2016/12/31, por un valor asegurado de \$1.000.000.000,00, con las siguientes coaseguradoras: la misma compañía líder con un porcentaje de participación del 21.5% por un valor asegurado de \$215.000.000; MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. con un porcentaje de participación del 12% por un valor asegurado de \$119.999.967; LA PREVISORA S.A. con un porcentaje de participación del 21.50%. por un valor asegurado de \$215.000.039; SEGUROS COLPATRIA S.A. con un porcentaje de participación del 22.50%, por un valor asegurado. \$224.999.997 y ALLIANZ SEGUROS S.A. con un porcentaje de participación del 22 50% por un valor asegurado de \$224.999.997.

El coaseguro es la vinculación sustancial entre aseguradoras, derivada de la conformación de una unión temporal para postularse en licitación dirigida a celebrar contrato de seguro de responsabilidad de servidores públicos, que en caso de condenas se hará de acuerdo al porcentaje de participación establecido en el acuerdo de coaseguro

Dentro del objeto del seguro se garantizó: *«amparar los riesgos que impliquen menoscabo de los fondos y bienes nacionales del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y SUS UNIDADES EJECUTORAS (Direcciones, Divisiones o Batallones según sea el caso), causados por acciones u omisiones de sus empleados que incurran en los delitos contra la administración pública o en alcances fiscales por incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, incluyendo el costo de la rendición de cuentas en casos de abandono del cargo o fallecimiento del empleado o funcionario, y/o contratistas (contratados directamente o por terceras personas) y/o funcionarios de firmas especializadas siempre y cuando el hecho sea imputable a uno o varios de ellos determinados. Este seguro operará por ocurrencia».* (Negritas fuera del texto).

De esta manera, debe tenerse en cuenta por un lado, que los lineamientos básicos del objeto de seguro de manejo, encajan en la cobertura ofrecida por **QBE SEGUROS S.A**, toda vez, que este tipo de pólizas, amparan el normal ejercicio de las funciones como servidores públicos. Para este caso la gestión de los señores FERNANDO DE JESÚS CALLE MORENO, en su calidad de comandante del batallón BASPC No 08 «CACIQUE CALARCÁ» y EDISON WILMAN MANCHEGO OROZCO, como director de la Central Administrativa y Contable CENAC Armenia, ambos en su condición de ordenadores del gasto para la época de los hechos, quienes en ejercicio de sus potestades adelantaron todo el proceso precontractual y contractual del contrato de mantenimiento y adecuación objeto del daño, tal y como quedó dilucidado líneas atrás.

Ahora bien con relación a la persona jurídica RIMARCO SAS, de acuerdo a las condiciones particulares de la póliza, nos permitimos transcribir textualmente:

Definición de trabajador o empleado

Persona natural que presta su servicio a la entidad asegurada, vinculada a ésta mediante contrato de trabajo, orden de trabajo o mediante nombramiento o resolución

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO

GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES
Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001
PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200

o bajo cualquier otra modalidad. Igualmente, quedan amparados los empleados temporales y/o de firmas especializadas cuando se encuentren ejerciendo sus funciones en los predios del asegurado y los de aquellos contratistas independientes los cuales deben cumplir con las normas que los regulan y con las garantías exigidas por la Ley 80/93... (Negrilla fuera del texto).

En su calidad de contratista debidamente determinado, este despacho considera que igualmente se encuentra cubierto por el objeto de la póliza, toda vez, que los hechos que originan la presente actuación tienen su génesis en el contrato de obra en predios del asegurado, el cual de acuerdo con estas condiciones tiene también su propia garantía como es la póliza de cumplimiento en favor de entidades estatales, por lo tanto, se considera amparado por la póliza de gestión.

En sus argumentos de defensa y alegatos de conclusión, la compañía líder afirma:

«Que existe ausencia de prueba de los elementos de la responsabilidad fiscal, que la responsabilidad de la aseguradora se deriva del contrato de seguro y no de la gestión fiscal, que sin fallo de responsabilidad fiscal no hay responsabilidad de la aseguradora, que se trata de una controversia contractual que debe resolverse con base en la pactado en el contrato y que los riesgos amparados están por fuera de la vigencia técnica de las pólizas».

Este despacho discrepa de lo anterior, reiterando que se encuentra asegurada la gestión de los señores FERNANDO DE JESÚS CALLE MORENO y EDISON WILMAN MANCHEGO OROZCO, por las pólizas de seguros en cuestión, quienes en ejecución de las labores propias como funcionarios de la Octava Brigada - Batallón de Apoyo y Servicio para el Combate No. 8 «Cacique Calarcá», al momento de vigilar la correcta inversión de los recursos públicos que tenían a su cargo, incumplieron con sus obligaciones legales y reglamentarias, lo que los convierte en responsables fiscales, situación que hace parte de los riesgos amparados, de acuerdo con las condiciones generales de las pólizas en su artículo primero, el cual establece claramente la situación materia de amparo, pues se trata de una pérdida imputable a unos servidores públicos, por su gestión ineficiente, ineficaz en lo que respecta al deber de cuidado y custodia de los bienes puestos bajo su tutela, cumpliéndose con ello, los requisitos necesarios para que opere la efectividad del amparo de la póliza y por tanto, para establecer el siniestro que produce, como consecuencia la necesidad de indemnización en los términos contemplados.

Recordemos que el objeto de la póliza consagra (F. 1509):

«QBE SEGUROS S. A., QUE EN ADELANTE SE LLAMARÁ LA COMPAÑÍA, EN CONSIDERACIÓN A LAS DECLARACIONES QUE EL TOMADOR HA HECHO EN LA SOLICITUD, LAS CUALES SE INCORPORAN A ESTE CONTRATO PARA TODOS LOS EFECTOS, AMPARA LOS ORGANISMOS SUJETOS A LA FISCALIZACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CONTRA

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO

GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES
Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001
PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200

LOS RIESGOS QUE IMPLIQUEN MENOSCABO DE FONDOS Y BIENES NACIONALES CAUSADOS POR SUS SERVIDORES PÚBLICOS POR ACTOS U OMISIONES QUE SE TIPIFIQUEN COMO DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O FALLOS CON RESPONSABILIDAD FISCAL»
(Negrillas del despacho).

Observése que encuentra estipulado dentro dentro de la póliza, que esta ampara los organismos sujetos a la fiscalización de la Contraloría General de la República, contra los riesgos que impliquen menoscabo de fondos y bienes nacionales causados por sus servidores públicos por actos u omisiones...y a renglón seguido se afirma o fallos con responsabilidad fiscal, como ocurre en el presente caso.

En cuanto al argumento esgrimido por la apoderada de QBE que se trata de una controversia contractual la cual debe ser resuelta con base en lo pactado en el contrato y en la ley, por cuanto los incumplimientos contractuales no están cubiertos en las pólizas de manejo; es menester aclararle que efectivamente frente a esta hipótesis el efecto adverso del incumplimiento, se mitiga haciendo efectivas las pólizas de cumplimiento y demás, sin embargo, los hechos cuestionados surgen por la competencia que tiene la contraloría de vigilar la gestión fiscal de la administración, en desarrollo de la cual se investigó y se probó el acaecimiento un daño patrimonial ocasionado en el marco del contrato No. 078 BASPC8-2014 tantas veces aludido, por la gestión fiscal irregular de dos funcionarios amparados y asegurados por las pólizas de manejo Nos. 000706237137 y 000705407955, derivada de un comportamiento calificado a título de culpa grave.

Así mismo, de conformidad con la Ley 610 del 2000, la acción fiscal es autónoma respecto de cualquier otro tipo de acción tanto en sede judicial como administrativa.

En este orden de ideas, los parámetros de juzgamiento de la causa fiscal están establecidos con el fin de determinar la responsabilidad generada en la gestión o administración de recursos públicos por parte de servidores públicos y de particulares; proceso que se podrá llevar a cabo con base en los mismos supuestos fácticos que también generen responsabilidades distintas a esta, como lo podrían ser la civil, la penal y la disciplinaria.

En cuanto a la ausencia de cobertura por tratarse de hechos ocurridos por fuera de la vigencia de las pólizas, ya que el proceso de selección y contratación de RIMARCO se llevó a cabo en el 2014 y para esta fecha las pólizas no habían iniciado la cobertura (2015/01/01 al 2016/12/31), el despacho precisa que si bien el daño se gestó en la etapa de planeación concretada efectivamente a finales del año 2014, también lo fue durante la ejecución del contrato donde se configuró y materializó el mencionado detrimento período en el cual sí tenían vigencias las citadas pólizas cuyos amparos recordemos operan por ocurrencia y dentro de este período también tuvo una participación determinante el TC CALLE MORENO. Si bien este cuerpo colegiado estableció como fecha de ocurrencia de los hechos, para



FALLO No: 00001

FECHA: 25 FEB 2019

PÁGINA 104 DE 116

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO

GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES
Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001
PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200

efectos de contabilizar la caducidad de la acción fiscal, la fecha 6 de octubre de 2015 en la que se suscribió el acta de recibo de la obra, no significa que el siniestro se halla materializado en esta data, pues se itera se trata de un acto complejo en el que se presenta la conjugación e intervención de diferentes sujetos en diferentes etapas (planeación y ejecución) las cuales en suma ocasionaron las irregularidades aquí investigadas.

Finalmente, manifiesta que en caso de que se emita fallo con responsabilidad fiscal, se debe tener en cuenta que la responsabilidad de su representada se limita a su participación del 21.5% en virtud del coaseguro, lo que equivale al 21.5% del valor asegurado en la póliza, porcentaje que deberá ser aplicado al valor total de la pérdida, con fundamento en el artículo 1079 del Código de Comercio, contexto contractual bajo el cual, este despacho hará las consideraciones pertinentes respecto a la proporción en la indemnización y alcance de la responsabilidad de la compañía aseguradora y bajo la misma línea interpretativa, lo correspondiente a las coaseguradoras vinculadas con la actuación fiscal.

En consecuencia, se negarán los argumentos y pretensiones orientados a desestimar la configuración de la responsabilidad fiscal y la consecuente ausencia de responsabilidad de la compañía QBE SEGUROS S.A con ocasión de las pólizas de manejo global por las cuales medió su vinculación como tercero civilmente responsable.

Frente a los descargos y alegatos de conclusión del apoderado de las compañías **ALLIANZ SEGUROS S.A** y **AXA COLPATRIA S.A** presentados en forma conjunta, en los cuales arguye que no se ha demostrado en cifras reales y concretas cuál fue el daño sufrido por la entidad afectada, que se imputó una responsabilidad objetiva al no establecer de forma concreta y cierta, los actos u omisiones reprochables, calificados a título de culpa grave y que por tanto no se dan los elementos de la responsabilidad fiscal, ni los presupuestos pactados en el contrato de seguro para hacer efectivas las pólizas de manejo.

El despacho encuentra en oposición a tal hipótesis hermenéutica que las pólizas de manejo del sector público expedidas por QBE donde se encuentran como coaseguradoras **ALLIANZ SEGUROS S.A.** y **AXA COLPATRIA S.A.**, es una solución que cubre los perjuicios o pérdidas de fondos y bienes causados por actos u omisiones de funcionarios del Estado, como en este caso «los fallos con responsabilidad fiscal» y dentro del proceso se demostró el daño patrimonial causado a los intereses del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - OCTAVA BRIGADA - BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE No. 8 «CACIQUE CALARCÁ», en cuantía de QUINIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M-CTE (\$541.803.439,19), y está acreditada la calidad en que obraron los señores FERNANDO DE JESÚS CALLE MORENO, comandante del batallón BASPC No 08 «CACIQUE CALARCÁ» y EDISON WILMAN MANCHEGO

 CONTRALORÍA <small>GENERAL DE LA REPÚBLICA</small>	FALLO No: 00001
	FECHA: 25 FEB 2019
	PÁGINA 105 DE 116
GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO	
GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO	
FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001 PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200	

OROZCO, como director de la Central Administrativa y Contable CENAC Armenia, ambos en su condición de ordenadores del gasto para la época de los hechos y del contratista RIMARCO SAS, cuyas actuaciones se dieron dentro del término de vigencia de las pólizas, por ende sus gestiones se encuentran amparadas por las mismas.

Igualmente está demostrado que el detrimento fiscal fue ocasionado con su actuar lo que conllevó a un perjuicio al Ministerio de Defensa Nacional y sus Unidades Ejecutoras (direcciones, divisiones o batallones), por lo que se reitera, la referida aseguradora, deberá responder por el daño causado a los intereses patrimoniales del Estado hasta el monto del valor asegurado, de conformidad con las condiciones pactadas contenidas en el referido contrato de coaseguro, con sus correspondientes anexos y certificados de modificación.

Puntualiza el apoderado, que el batallón adelantó el proceso sancionatorio contractual en virtud del cual se profirió la resolución 206 del 3 de diciembre de 2018 que hizo efectiva la póliza de cumplimiento por la cobertura de estabilidad de la obra, por lo tanto advierte que la entidad cuenta con un título ejecutivo, que puede hacer exigible mediante el procedimiento de cobro coactivo, contando con un término de cinco (5) años para ello y solicita que la Contraloría valore este medio probatorio como quiera que el mismo tiene incidencia en la cuantía que pretende resarcir, argumento frente al cual este despacho hará el pronunciamiento pertinente más adelante.

En consecuencia, se negarán los argumentos y pretensiones orientados a desestimar la configuración de la responsabilidad fiscal y la consecuente ausencia de responsabilidad de la compañía con ocasión de la póliza de manejo global por la cual medió su vinculación como tercero civilmente responsable.

Con respecto a los argumentos de la apoderada sustituta de la aseguradora LA PREVISORA S.A., quien afirma que a su juicio en la realidad procesal no se demostró de manera certera y concisa el daño, de acuerdo a las reglas generales aplicables en materia de responsabilidad fiscal, que para su estimación debe acudirse entre otros factores que han de valorarse a que aquel debe ser cierto, anormal, cuantificable con arreglo a su real magnitud.

Considera este despacho que el tema del daño y su cuantía quedó debidamente dilucidado en líneas anteriores, por tanto, por economía procesal no se traerán nuevamente a colación, sólo se le indicará que en el presente caso se tiene certeza que con la ejecución del contrato de adecuación y mantenimiento No 078-BASPC08-2014, no se cumplió ninguna finalidad, lo que trajo consigo un detrimento a las arcas del Estado, por lo que se despacharán negativamente sus pretensiones, aclarándole que pese a existir una decisión de fondo dentro del proceso sancionatorio contractual que se adelantó paralelo a este por la entidad afectada, no se configura un cobro de lo no debido, ni un enriquecimiento sin causa, pues ambos

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO

GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES
Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001
PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200

persiguen fines distintos y en este caso no se ha logrado el resarcimiento pleno del detrimento ocasionado -objeto del proceso de responsabilidad fiscal-

En cuanto a los argumentos del apoderado de la compañía **MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.**, quien precisa que por la modalidad de la póliza no hay cobertura para los hechos por los que se está adelantando este proceso investigativo toda vez que la fecha de vigencia de la póliza es posterior a la fecha de configuración del posible daño, este despacho retoma también la posición frente a lo expuesto a la compañía líder QBE Seguros S.A

Igualmente precisa el apoderado que de acuerdo a las pruebas obrantes se debe concluir que en el caso de autos corresponde a un incumplimiento contractual, en el que la conducta de los investigados no está comprometida, habida consideración que dentro de sus gestiones contractuales acataron las normas y procedimientos propios de la ley contractual y que la verificación de la calidad de los bienes y la estabilidad de la obra contratada, estuvo a cargo de la firma **GRUPO EMPRESARIAR FARMAQ S.A.S.**, sociedad que contaba con los conocimientos, idoneidad y experiencia necesarios para realizar el seguimiento y supervisión al contrato de obra civil.

Ante tal manifestación, el despacho reitera su posición generalizada en torno a la responsabilidad que atañe a los servidores públicos en su condición de gestores fiscales por la conducta desplegada activa y/o pasiva ajena a sus deberes misionales que dieron lugar al siniestro y consecuente afectación a los intereses patrimoniales de la entidad, aspecto que quedó probado en desarrollo de esta actuación, en la cual no existe soporte técnico, ni legal, que condujera al cambio del objeto contractual, lo que llevó a que se construyera una obra que incumple los requisitos generales de diseño y construcción sismo resistente de la norma NSR-10, situación que configura el supuesto de orden contractual para la exigibilidad indemnizatoria que le atañe como compañía coaseguradora vinculada, en calidad de tercero civilmente responsable.

Sobra referirse a que en ejercicio de la atribución constitucional contenida en los artículos 119 y 267 de la Constitución Política, la Contraloría General de la República tiene a su cargo la vigilancia de la gestión fiscal y el control de resultado de la administración.

Indica también el representante de MAFRE que si en gracia de discusión se llegara a demostrar que los afianzados incurrieron en **CULPA GRAVE**, esta conducta está consagrada en el Código de Comercio, en el Título V. del Contrato de Seguro, en su artículo 1055, como uno de los ACTOS INASEGURABLES y carecería de sustento jurídico.

Con respecto a la tesis denominada **CULPA GRAVE** como causal de exclusión de la póliza, este despacho indica que, los hechos que han sido materia de investigación

	FALLO No: 00001
	FECHA: 25 FEB 2019
	PÁGINA 107 DE 116
GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO	
GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO	
FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001 PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200	

en este proceso y que dieron lugar a la iniciación del mismo, han girado en torno a determinar el cumplimiento o no de los deberes funcionales de cuidado, custodia y conservación de los recursos que se encontraban en cabeza de los aquí vinculados, en su condición de ordenadores del gasto, circunstancia que les atribuye, sin lugar a dudas la calidad de gestores fiscales respecto de los mismos. De esta manera, se encuentra configurada la situación materia de amparo, pues se trata de un detrimento imputable a unos servidores públicos, por su gestión ineficiente, ineficaz en lo que respecta al deber de cuidado y custodia de los recursos puestos bajo su tutela, quienes con su actuar ocasionaron un daño fiscal por valor de QUINIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS con 19 CTVS M-CTE (\$541 803.439,19), cumpliéndose con ello, los requisitos necesarios para que opere la efectividad del amparo de las pólizas denominadas: «Manejo Global Entidades Oficiales No. 000705407955 y 000706237137 expedidas por QBE SEGUROS S.A.» y por tanto, para establecer el siniestro, que produce como consecuencia la necesidad de indemnización en los términos allí expresados, donde cabe el alcance individual, proporcional y civil de la responsabilidad que se declare.

La compañía de seguros solo puede ser obligada a pagar el daño o perjuicio causado al patrimonio público con el cumplimiento de dos requisitos indispensables, a saber: a) Que exista una declaración de responsabilidad fiscal por haberse demostrado a cabalidad los elementos para su tipificación: gestión fiscal, una conducta dolosa o gravemente culposa, un daño y la relación de causalidad respectiva y b) Que la cobertura prevista en el contrato de seguro ampare específicamente el hecho constitutivo de la responsabilidad fiscal teniendo en cuenta sus condiciones y limitaciones, tales como el alcance del riesgo cubierto, la vigencia, la suma asegurada, el deducible, entre otros, los cuales están debidamente acreditados.

En consecuencia, se negarán los argumentos y pretensiones orientados a desestimar la configuración de la responsabilidad fiscal y la consecuente ausencia de responsabilidad de la compañía MAFRE, con ocasión de la póliza de manejo global por la cual medió su vinculación como tercero civilmente responsable.

Nuevamente se reitera la posición generalizada en torno a la responsabilidad que atañe a los servidores públicos en su condición de gestores fiscales por la conducta desplegada activa y/o pasiva ajena a sus deberes misionales que dieron lugar al siniestro y consecuente afectación a los intereses patrimoniales de la entidad, configurándose el supuesto de orden contractual para la exigibilidad indemnizatoria que le atañe como compañía aseguradora vinculada en calidad de tercero civilmente responsable

Ahora en cuanto a la **COMPAÑÍA DE SEGUROS LIBERTY S.A.**, su apoderado sustituto allegó oficio No. 2019ER0016011 de fecha 21 de febrero de 2018, con el que se acredita el pago del riesgo amparado por la póliza No. 2448868 expedida el

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO

GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES
Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001
PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200

24 de diciembre de 2014, por los hechos en los cuales se declaró la ocurrencia del siniestro de obra y calidad del contrato No. 078 BASP 08-2014 en el proceso sancionatorio contractual llevado a cabo por la entidad afectada, en la suma de CIENTO OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL SEICIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M-CTE (\$108.360.688), resultando procedente la desvinculación solo respecto a esta póliza, pues la misma ya se encuentra AGOTADA y de conformidad con la ley comercial, la aseguradora no puede responder más allá de la suma asegurada.

Sin embargo, esta compañía también fue llamada en garantía por la póliza No. 2448854 expedida el 24 de diciembre de 2014 por el contrato de prestación de servicios No. 079 - BASPC08-2014, siendo procedente mantener su vinculación dentro del presente proceso y la afectación de la misma por los daños ocasionados al erario, determinándose que el valor amparado corresponde al establecido para el cumplimiento del contrato, pues el afianzado es el contratista y la compañía debe cancelar el valor amparado por el cumplimiento del contrato, sin que los demás presuntos responsables fiscales se encuentren amparados. En cuanto al monto por el cual debe responder la compañía garante, lo hará por el monto del valor asegurado, de conformidad con las condiciones pactadas y contenidas en la póliza respectiva, pues la responsabilidad solidaria sólo aplica para los presuntos responsables fiscales, más no para los terceros civilmente responsables.

Así las cosas, QBE SEGUROS S.A y sus coaseguradoras y LIBERTY SEGUROS DE COLOMBIA S A como aseguradoras concurrentes, pagarán solamente la parte proporcional del capital asegurado en la respectiva póliza, sin que el conjunto de las indemnizaciones sobrepase el valor real de los daños producidos por el siniestro, conforme lo dispuesto en los artículos 1084, 1089, 1092 y ss del Código de Comercio.

Por último el despacho quiere traer a colación la Sentencia C-735 de 2003 de la Corte en la cual se analiza el artículo 44 de la Ley 610 de 2000 y se establece:

*«El papel que está llamado a jugar el asegurador es precisamente el de garantizar el pronto y efectivo pago de los perjuicios que se ocasionen al patrimonio público **por el servidor público responsable de la gestión fiscal, por el contrato** o el bien amparados por una póliza. ., cuando el legislador dispone que la compañía de seguros sea vinculada en calidad de tercero civilmente responsable en los procesos de responsabilidad fiscal, lo que está haciendo es atender el principio de economía procesal para asegurar el pago de la indemnización evitando un juicio adicional para hacer efectivo el pago de la misma luego de adelantado un proceso de responsabilidad fiscal, con lo cual se logra en atención a los principios que rigen la función administrativa, el resarcimiento oportuno del daño causado al patrimonio público». (Negrillas del despacho).*

 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	FALLO No: 00001
	FECHA: 25 FEB 2019
	PÁGINA 109 DE 116
GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO	
GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO	
FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001 PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200	

De acuerdo a lo expuesto se despacharán negativamente los argumentos de los apoderados de las compañías de seguros y mantendrán dentro del presente proceso su calidad de terceros civilmente responsables.

XIV. MEDIDAS CAUTELARES

Dentro del presente proceso de responsabilidad fiscal fueron decretadas medidas cautelares de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Ley 610 de 2000.

Mediante Auto No. 00031 del 03 de mayo de 2018 (Cuaderno medidas cautelares Fs. 51-55) notificado en Audiencia de Descargos, se decretó el embargo preventivo de la cuota parte del 50% del bien inmueble de propiedad del señor FERNANDO DE JESÚS CALLE MORENO, identificado con la cédula de ciudadanía 14.322.663, presunto responsable fiscal, el cual fue adquirido mediante la escritura pública No. 550 del 17 de marzo de 2014 de la Notaria Quinta de Armenia, inscrito en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Armenia, y posee las siguientes características:

*...Número de matrícula: 280-130746
CIRCULO REGISTRAL: 280 ARMENIA - DEPTO: QUINDÍO - MUNICIPIO: LA
TEBAIDA - VEREDA LA TEBaida.*

*...DESCRIPCIÓN. CABIDA Y LINDEROS:
CONTENIDOS EN ESCRITURA NRO. 770 DE FECHA 04-08-99 EN NOTARÍA
4ª DE ARMENIA LOTE 5 CON ÁREA DE 1.043.00 M2 (SEGÚN DECRETO
1711 DE JULIO 6/84).*

*...DIRECCIÓN DE INMUEBLE Tipo de predio: URBANO:
1) LOTE #5.*

La medida cautelar decretada se extenderá y tendrá vigencia hasta la culminación del proceso de cobro coactivo, por tanto, se remitirán junto con el fallo con responsabilidad fiscal en caso de quedar en firme, al grupo de jurisdicción coactiva de la gerencia departamental colegiada del Quindío, para lo de su competencia.

XV. EL DAÑO Y SU INDEXACIÓN

El daño patrimonial al Estado ocasionado con la gestión fiscal cuestionada, se configura por la existencia de una obra que no cuenta con planos estructurales, memorias estructurales, licencia de construcción y más delicado aún, que incumple los requisitos generales de diseño y construcción sismo resistente de la norma NSR-10, en la suma de **QUINIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES**



FALLO No: 00001

FECHA: 25 FEB 2019

PÁGINA 110 DE 116

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO

GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES
Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001
PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200

OCHOCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON 19 CTVS M-CTE (\$541.803.439,19).

Dicha cuantía deberá ser reconocida por los responsables fiscales antes reseñados, la cual será debidamente indexada.

Así las cosas, en la presente causa fiscal y conforme lo establece el artículo 53 de la Ley 610 de 2000 «*Los fallos con responsabilidad deberán determinar en forma precisa la cuantía del daño causado, actualizándolo a valor presente al momento de la decisión, según los índices de precios al consumidor certificados por el DANE para los períodos correspondientes...*».

En la presente actuación fiscal se ha demostrado que el daño ocasionado, se encuentra valorado en **\$541.803.439,19**, cuantía que será actualizada al valor presente a la fecha de esta decisión, según los índices de precios al consumidor, tomando como IPCI el día 9 de marzo de 2017, en la cual se liquidó el contrato, aplicándose entonces la siguiente fórmula:

Dónde: $VP = VH \times \frac{IPCF}{IPCI}$ (25 de febrero de 2019)
IPCI (9 de marzo de 2017)

VP: Valor Presente o Valor por actualizar.

VH: Valor histórico, valor del detrimento al momento de los hechos: **\$541.803.439,19.**

IPCF: Índice de precios al consumidor según el DANE al momento de proferir el presente Fallo con Responsabilidad Fiscal (25 de febrero de 2019).

IPCI: Índice de precios al consumidor certificado por el DANE a la fecha de ocurrencia de los hechos (9 de marzo de 2017).

De acuerdo con la anterior fórmula tenemos:

$$\text{\$ } 541.803.439,19 \times \frac{143,26}{136,76} = \text{\$ } 567.554.553.21$$

TOTAL VALOR A CANCELAR:

Una vez efectuada la liquidación anterior, arroja la suma de **QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON 21 CETVS M-CTE (\$567.554.553,21).**

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO

GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES
Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001
PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200

Teniendo en cuenta que con fecha 21 de febrero de 2018, se recibió oficio No. 2019ER0016011, mediante el cual la compañía de seguros LIBERTY SEGUROS DE COLOMBIA S.A. allega recibo de consignación por valor de CIENTO OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M-CTE (\$108.360.688) con el cual se acredita el pago del riesgo amparado por la póliza No. 2448868 expedida el 24 de diciembre de 2014, este despacho procederá a descontar dicha suma de la cuantía debidamente indexada, resultando entonces un valor a pagar de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON 21 CTVS M-CTE (\$459.193.865,21), cuyo depósito debe ser efectuado en el Banco Popular, Cuenta Corriente No. 050-00120-5, a favor de la DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL D.T.N. y allegar a este Despacho el comprobante respectivo, con el fin de verificar que se haya obtenido el resarcimiento pleno de la obligación de conformidad con lo estipulado en el artículo 111 de la Ley 1474 de 2011 y artículo 47 de la Ley 610 de 2000.

En mérito de lo expuesto, el cuerpo colegiado de la gerencia departamental colegiada del Quindío, de la Contraloría General de la República, de conformidad con lo estipulado en el artículo 53 de la Ley 610 de 2000,

RESUELVE

PRIMERO: FALLAR CON RESPONSABILIDAD FISCAL, dentro del presente proceso de responsabilidad fiscal trazabilidad **PRF-2017-01200**, el cual se adelanta por el daño patrimonial ocasionado al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - OCTAVA BRIGADA - BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE No. 8 «CACIQUE CALARCÁ» NIT. 800.130.829-8, en cuantía de **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON 21 CTVS M-CTE (\$459.193.865,21)** debidamente indexada, en contra de las siguientes personas naturales y jurídicas, por su conducta calificada a título de **CULPA GRAVE** conforme quedó establecido en las consideraciones precedentes, quienes deberán responder de manera solidaria por el daño causado, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Ley 610 de 2000, así:

- **FERNANDO DE JESÚS CALLE MORENO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 14.322.663, expedida en Honda (Tolima), quien para la época de los hechos, ostentó la calidad de comandante y Ordenador del Gasto del Batallón de ASPC No. 08 «CACIQUE CALARCA», obrando como **CONTRATANTE**.

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO

GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES
Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001
PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200

• **EDISON WILMAN MANCHEGO OROZCO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79 643.255, expedida en Bogotá D.C., quien para la época de los hechos, ostentó la calidad de Director de la Central Administrativa y Contable CENAC Armenia y Ordenador del gasto, en calidad de CONTRATANTE.

• **RIMARCO SAS** NIT. 900.075 341-3, persona jurídica - CONTRATISTA- que ejecutó el Contrato de Mantenimiento y Adecuación No. 078-BASPC08-2014, representada legalmente por el señor **JOISMAR NAYIBE QUIROZ QUINTERO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 52.774.905, en condición de CONTRATISTA.


• **GRUPO EMPRESARIAL FARMAQ S.A.S.** NIT. 900.129.037-2, - SUPERVISOR- representada legalmente por el señor **JOSE WILLIAM ADARME ALBARRACÍN**, identificado con la cédula de ciudadanía No 1.030.579.022 de Bogotá D.C., quien ejecutó el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No.079-BASPC08-2014, el cual tenía por objeto prestar apoyo a la supervisión de manera técnica, oportuna y suficiente; además, tenía obligaciones de carácter general, administrativas, técnicas, financieras y de carácter social frente al Contrato de Mantenimiento y Adecuación No. 078-BASPC08-2014 (Contratista con funciones de apoyo a la supervisión del Contrato de Mantenimiento y Adecuación No. 078- BASPC08-2014).

SEGUNDO: DECLARAR dentro del presente proceso de responsabilidad fiscal trazabilidad No. **PRF-2017-01200** como Terceros Civilmente Responsables, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído a:

Compañía Aseguradora: QBE SEGUROS S.A. - NIT. No. 860.002.534-0

Póliza No. 000705407955 - «Póliza de manejo para entidades oficiales», expedida el 2015/01/19 - vigente desde: 2015/01/01 hasta 2015/12/31.

Asegurado: MDN - EJE- DIRECCIÓN DE INTENDENCIA Y REMOTA - NIT. 800.030.632 - póliza que cubre el menoscabo de fondos y bienes nacionales causados por sus servidores públicos por actos u omisiones que se tipifiquen como delitos contra la administración pública o fallos con responsabilidad fiscal. Valor asegurado. \$1.000.000.000,00. Sin deducible.

 CONTRALORÍA <small>GENERAL DE LA REPÚBLICA</small>	FALLO No: 00001
	FECHA: 25 FEB 2019
	PÁGINA 113 DE 116
GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO	
GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO	
FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001 PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200	

Coaseguro:

Código: 1309 - Aseguradora: QBE SEGUROS S.A. - Porcentaje de participación: 21.5% - Valor asegurado: \$215.000.000,00.

Código: 891700037 - Aseguradora: MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. - Porcentaje de participación: 11.9999967% - Valor asegurado: \$119.999.967,00.

Código: 860002400 - Aseguradora: LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS - Porcentaje de participación: 21.5000039% - Valor asegurado: \$215.000.039,00.

Código: 860002184 - Aseguradora: SEGUROS COLPATRIA S.A. - Porcentaje de participación: 22.4999997% - Valor asegurado: \$224.999.997,00.

Código: 860026182 - Aseguradora: ALLIANZ SEGUROS S.A. - Porcentaje de participación: 22.4999997% - Valor asegurado: \$224.999.997,00.

Compañía Aseguradora: QBE SEGUROS S.A. - NIT. 860.002.534-0.

Póliza No. 000706237137 - «Póliza de manejo para entidades oficiales», expedida el 2016/01/04, vigente desde: 2016/01/01 hasta: 2016/12/31.

Asegurado: MDN - EJE- DIRECCIÓN DE INTENDENCIA Y REMOTA - NIT. 800.030.632, póliza que cubre menoscabo de fondos y bienes nacionales causados por sus servidores públicos por actos u omisiones que se tipifiquen como delitos contra la administración pública o fallos con responsabilidad fiscal. Valor asegurado de \$1.000.000.000,00. Sin deducible.

Coaseguro:

Código: 1309 - Aseguradora: QBE SEGUROS S.A. - Porcentaje de participación: 21.50% - Valor asegurado: \$215.000.000,00.

Código: 891700037 - Aseguradora: MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. - Porcentaje de participación: 12% - Valor asegurado: \$119.999.967,00.

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO

GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES
Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001
PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200

Código: 860002400 - Aseguradora: LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS - Porcentaje de participación: 21.50% - Valor asegurado: \$215.000.039,00.

Código: 860002184 - Aseguradora: SEGUROS COLPATRIA S.A. - Porcentaje de participación: 22.50% - Valor asegurado: \$224.999.997,00.

Código: 860026182 - Aseguradora: ALLIANZ SEGUROS S.A. - Porcentaje de participación: 22.50% - Valor asegurado: \$224.999.997,00.

LIBERTY SEGUROS S.A. - NIT. 860.002.534-0

Póliza No. 2448854 fecha de expedición: 2014-12-24 y Anexo de Modificación de fecha 2015-09-07 (Contrato No. 079-BASPC08-2014) Póliza de Cumplimiento a favor de entidades.

Asegurado y beneficiario: MDN EJÉRCITO NACIONAL BATALLÓN DE BASPC No. 8 CACIQUE CALARCÁ.

Riegos asegurados:

Cumplimiento del Contrato: \$6.160.000,00, vigente desde: 2014-12-24 al 2015-10-30 (según anexo de modificación)

Calidad del Servicio: \$6.160.000,00, vigente desde: 2014-12-24 hasta: 2016-06-30 (según anexo de modificación). Sin deducible.

TERCERO: Por tratarse de un proceso de única instancia, contra el presente proveído **PROCEDE EL RECURSO DE REPOSICIÓN** ante este Despacho, debiendo manifestar en esta audiencia si lo interponen, caso en el cual deberán sustentarlo dentro de los diez (10) días siguientes. Lo anterior de acuerdo con lo establecido en el Literal d del artículo 101 de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con el artículo 110 de la misma norma.

CUARTO: En firme y ejecutoriada esta providencia, a través de la secretaría común de la gerencia departamental colegiada del Quindío, súrtanse los siguientes traslados y comunicaciones:

- Remitir copia auténtica del Fallo con Responsabilidad Fiscal al grupo de jurisdicción coactiva de esta gerencia departamental colegiada del Quindío, para que proceda de conformidad con el artículo 58 de la Ley 610 de 2000, al igual que el envío del cuaderno de las medidas cautelares, para que se hagan valer dentro del proceso de cobro coactivo.

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO

GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES
Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001
PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200

- Solicitar a la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, incluir en el Boletín de Responsables Fiscales a las siguientes personas:

- **FERNANDO DE JESÚS CALLE MORENO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 14.322.663.
- **EDISON WILMAN MANCHEGO OROZCO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.643.255.
- **RIMARCO SAS** - NIT. 900.075.341-3, a través de su representante legal señor JOISMAR NAYIBE QUIROZ QUINTERO y/o quien haga sus veces, identificado con la cédula de ciudadanía No. 52.774.905.
- **GRUPO EMPRESARIAL FARMAQ S.A.S.**, - NIT. 900.129.037-2, a través de su representante legalmente señor JOSÉ WILLIAM ADARME ALBARRACÍN, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.030.579.022.

- Remitir copia íntegra del presente proveído a la Procuraduría General de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 57 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002.

QUINTO: Enviar copia íntegra de esta providencia al señor Teniente Coronel **DEIVER RODRÍGUEZ GALÁN**, en calidad de Comandante del Batallón BASPC No. 08 «CACIQUE CALARCÁ», NIT. 800.130.829-8, y al señor Teniente Coronel **LEONARDO BARRETO GAITÁN**, Director Central Administrativa y Contable CENAC Armenia, quienes se pueden localizar en la Avenida Centenario No. 25N-00 Batallón de BASPC No. 08 «CACIQUE CALARCÁ», de la ciudad de Armenia Quindío, para que se surtan los registros contables correspondientes.

SEXTO: Notificar por estrados la presente decisión de conformidad con lo establecido en el artículo 104 literal b) de la Ley 1474 de 2011.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



KATHERINE PULECIO GÓMEZ
Directiva Colegiada - Ponente



FALLO No: 00001

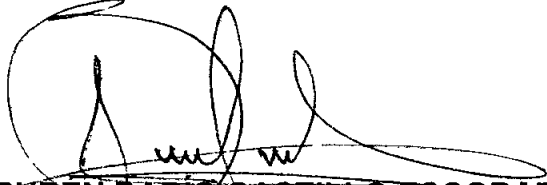
FECHA: 25 FEB 2019

PÁGINA 116 DE 116

GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA DEL QUINDÍO

GRUPO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES
Y JURISDICCIÓN COACTIVA DEL QUINDÍO

FALLO CON RESPONSABILIDAD FISCAL No. 00001
PROCESO VERBAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. PRF-2017-01200


RUBÉN DARIO CASTILLO ESCOBAR
Directivo Colegiado


HADA LUCERO MORALES GIL
Directiva Colegiada

Revisó: Martha Elena Duque Giraldo
Coordinadora de Gestión G-02

Proyectó: Juliana Buitrago Ossa
Abogada Sustanciadora

Nota. La presente providencia fue aprobada en acta extraordinaria 80631-003-80-09 de febrero 21 de 2019
(Sigedoc 3382519)